

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA



TESIS

LOS VALORES SUPERIORES DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA EN EL
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO FEDERAL: UN ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ESCALAS
AXIOLÓGICAS

PRESENTA
GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

FEBRERO, 2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



TESIS

LOS VALORES SUPERIORES DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA EN EL
CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL
GOBIERNO FEDERAL: UN ANÁLISIS COMPARADO DE LAS ESCALAS
AXIOLÓGICAS

PRESENTA
GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

DIRECTOR DE TESIS
NANCY NELLY GONZÁLEZ SANMIGUEL

CODIRECTOR DE TESIS
ALMA SILVIA RODRÍGUEZ PÉREZ

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

FEBRERO, 2020

Declaración de autenticidad

DECLARO QUE:

1. El presente trabajo de investigación, *Los valores superiores de la Constitución Mexicana en el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal: un análisis comparado de las escalas axiológicas*, presentada para la obtención del título de Doctor es original, siendo resultado de mi trabajo personal, el cual no he copiado de otro trabajo de investigación.
2. En el caso de ideas, formulas, citas completas, ilustraciones diversas, sacadas de cualquier tesis, obra, artículo, memoria, en versión digital o impresa, se menciona de forma clara y exacta su origen o autor, en el cuerpo del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tenga derechos de autor.
3. Declaro en el que trabajo de investigación que pongo en consideración para evaluación no ha sido presentando anteriormente para obtener algún grado académico o título, ni ha sido publicado en otro sitio alguno.
4. Soy consciente de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, es objetos de sanciones universitarios y/o legales, por lo que se asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de irregularidades en la tesis, así como de los derechos sobre la obra presentada.
5. De identificarse falsificación, plagio, fraude, o que el trabajo de investigaciones haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, responsabilizándome por todas las cargas pecuniarias o legales que se deriven de ello sometiéndome a las normas establecidas y vigentes de la UANL.

AUTOR: GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ

FECHA: ENERO 2019

FIRMA: _____

DEDICATORIA

A MIS PADRES: RAFAEL LUCHO CHIGO Y GUADALUPE FRINÉ GONZÁLEZ CARRANZA, POR

TODO SU AMOR Y SU APOYO.

A MIS HERMANAS: FÁTIMA DANAE LUCHO GONZÁLEZ Y ARIADNA DEL CARMEN LUCHO

GONZÁLEZ, POR LAS RISAS, LOS CAFÉS Y LAS PORRAS.

A MIS ABUELOS, POR SU AMOR INCONDICIONAL.

A FRANCISCO DE JESÚS CEPEDA RINCÓN, POR ACOMPAÑARME GRAN PARTE DEL CAMINO, Y

SOSTENER MI MANO.

CON MUCHO AMOR A LA DRA. ALMA SILVIA RODRÍGUEZ, QUE A PESAR DE LAS DIFICULTADES

SIEMPRE ESTUVO PARA MÍ Y ESTA INVESTIGACIÓN.

A LA DRA. NANCY NELLY GONZÁLEZ SANMIGUEL, EJEMPLO DE MUJER FUERTE E

INDEPENDIENTE.

ASÍ MISMO AGRADEZCO A CONACYT, SU APOYO A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MÉXICO

ES VITAL PARA EL CRECIMIENTO DEL PAÍS.

Los valores superiores de la Constitución Mexicana en el Código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal: un análisis comparado de las escalas axiológicas

Contenido

Introducción.....	9
1. Protocolo de investigación.....	17
1.1 Introducción	17
1.2 Preguntas.....	17
1.3 Problema	18
1.4 Hipótesis	18
1.5 Objetivos.....	18
1.6 Metodología	19
1.7 Marco Teórico.....	19
2. Institucionalismo histórico y constitución.....	26
2.1 Introducción	26
2.2 Teoría del valor y teoría de la Tiranía del Valor.....	30
2.3 Gobernabilidad.....	32
2.4 Instituciones	37

2.5 El institucionalismo histórico como enfoque de análisis	38
2.6 Principales limitaciones del enfoque del institucionalismo histórico	44
2.7 Principales modelos de análisis del institucionalismo histórico	48
2.7.1 «Coyunturas críticas»	48
2.7.2 Path dependency o path dependence	49
2.7.3 Punctuated equilibrium	50
2.8 Institucionalismo histórico y concepto de constitución	51
2.9 Concepto de Constitución	52
2.9.1 Diferentes perspectivas del concepto de Constitución	54
2.9.2 Constitución formal y Constitución material.	56
2.9.3 Poder constituyente	57
2.9.4 Clasificación de las Constituciones.	59
2.9.5 Constitucionalismo	60
2.9.6 La constitución como institución	61
2.10 Conclusión	63
3. Axiología Jurídica	65
3.1 Concepto de valor	65
3.2 Axiología jurídica	73
3.3 Justificación axiológica de las normas.	74
3.4 Posturas en la axiología jurídica	75

3.5 Escalas de valor	77
3.6 Axiología como marco de la ética/ Deber ser y Justicia.....	80
3.7 Conclusiones del capítulo	82
4. Recorrido histórico: la Constitución en México.....	84
4.1 Proyectos constitucionales novohispanos	84
4.2 Principalísimo constitucional independentista.....	86
4.3 Modernidad política: liberalismo y conservadurismo en México	87
4.4 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824	91
4.4.1 Escala de valor de la Constitución de 1824.....	94
4.5 Carta magna de 1836: Las Siete Leyes	96
4.5.1 Escala de valor de la Constitución de 1836.....	98
4.6 Carta magna de 1843	100
4.6.1 Escala de valor de las Bases Orgánicas.....	102
4.7 Acta Constitutiva y de Reformas de 1847	103
4.7.1 Escala de valor de la Acta Constitutiva y de Reforma.....	105
4.8 Carta magna de 1857	105
4.8.1 Escala de valor de la Constitución de 1857.....	109
4.9 Constitución de 1917	110
4.10 Reforma constitucionales.....	114
4.11 Conclusiones	117

5. Análisis histórico hermenéutico de la axiología de la Constitución de 1917	119
5.1 Introducción	119
5.2 Valores axiológicos en la Constitución de 1917	121
5.3 La promesa revolucionaria de Justicia Social	123
5.4 Escala de valor	128
5.5 Valor de la igualdad	132
5.6 Valor de la libertad	135
5.7 Valor de la justicia	136
5.8 Principio de autodeterminación	138
5.9 Valores axiológicos en la reforma Constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos	138
5.9.1 Valores axiológicos en las Declaraciones de Derechos Humanos	142
5.9.2 Mundialización y universalización.....	149
5.9.3 Praxis de los Derechos Humanos	151
5.10 Las dos escalas de valor	152
5.11 Conclusiones	157
6. La práctica de los valores en la ética	163
6.1. Introducción	163
6.2. La ética pública	165
6.3. Código de ética de los servidores públicos	171

6.4. El deber ser y el es en la ética pública	179
6.5 La escala de valor del Código de ética de las personas servidoras públicas.....	181
6.6 Análisis comparado de las escalas de valor	182
7. Conclusiones.....	184
8. Bibliografía.....	188

Introducción

La modernidad buscó la separación de la ética de otras disciplinas sociales para evitar la temida “falacia naturalista” en los estudios sociales, la cual establecía una dicotomía entre lo natural que es *bueno*, y lo no natural, identificado como aquello que es *malo*. Nietzsche pensaba que el problema del mal “no era algo dado, sino creado” (Neiman, 2012, pág. 275) pues para él “los valores acabaron por invertirse; a la luz del mundo ideal, el mundo real era menospreciado” (Neiman, 2012).

Sin embargo, con el cambio de paradigma planteó Nietzsche, y la llegada del posmodernismo a las ciencias sociales, con el fin de combatirlo, comenzaron a surgir intentos de vincular los principios éticos a los campos de las ciencias sociales, ya que como refiere Beuchot “la economía funciona mejor si es justa, la política si es democrática, el derecho si atiende a las ideas morales de quienes han de cumplirlo” (Beuchot, 2013).

Tanto Fichte, como Kant concuerdan que el hombre tiene la obligación de hacer algo es independiente de sus fines externos, por la misma idea de que algo debe o no debe de tener lugar, esta disposición del hombre es una obligación que debe de manifestarse “de modo tan seguro como que es un hombre, se le denomina en general su naturaleza moral o ética” (Fichte, 2005). Esta naturaleza ética presente en el hombre requiere de los valores, en tanto que son ellos los que funcionan como principios que deben de guiar el comportamiento del hombre en su individualidad y colectividad, pues se encuentran él.

Es decir, no hay ética sin valores, y el conflicto aparece en el mismo momento en que en cualquiera de nuestras acciones llevamos a cabo la valorización (la acción de valorar) lo que hacemos, ya que en ese instante estamos dando un paso del “ser” al “deber ser”, y es ahí

cuando pueden surgir distintas visiones sobre el dilema del deber ser que como menciona Kant *deber* “significa la representación de una acción libre causada por mí [que] sucedería necesariamente si la razón tuviera completo poder sobre nuestra voluntad” (Kant, Lecciones de filosofía moral Mrongovius II, 2017).

Al respecto, Roberto Gutiérrez Guerra considera que los conflictos sobre ideas y valores siempre existirán, pero es posible llegar a alcanzar acuerdos y compromisos racionales para solucionarlos. Es por ello por lo que resulta necesario para la política y el derecho en la solución de estos conflictos, considerar que existen “bases éticas, más filosóficas y universales, en las que se fundan” (Beuchot, 2013).

Varios pensadores han señalado que es fundamental considerar en un primer momento llegar a acuerdos y soluciones conforme a una ética que responda a intereses comunes, puesto que, aún cuando existen morales y valores diversos, hay puntos en los que se puede asentir y consentir, mismos que permiten desarrollar acuerdos que respondan a los intereses de los grupos en conflicto o discordia. En ese mismo sentido, Carré de Malberg propuso la figura del Estado, principalmente porque este tiene diversas funciones que ayudan a atender diversas situaciones complejas, y dar unidad, pues “la esencia propia de toda comunidad estatal consiste primero en que, a pesar de la pluralidad de sus miembros y de los cambios que operan entre éstos, se encuentra retraída a la unidad por el hecho mismo de su organización” (de Malberg, 2013).

El Estado es visto como una unidad que además busca consolidarse en una voluntad única y colectiva, que se expresa y se manifiesta por los distintos órganos regulares de Estado, instituidos tradicionalmente en un contrato, que en el caso mexicano y en muchos otros países, se encuentran establecidos en la Constitución, manifiesto de una voluntad única,

constituyente que se encarga de orientar la defensa y protección de los valores deseados que deben ser compartidos.

Si bien, en principio derecho y política van de la mano y buscan confluir en la garantía de una convivencia pacífica y justa, los valores que se encuentran en cada una de ellas como disciplinas, modelan el actuar propio de su esfera, así como sus alcances e intenciones. En el derecho, por una parte los valores se encuentran en la base de la normatividad, es decir, en aquello que da origen y fundamento a las mismas como las Constituciones, mientras que los valores dentro del ámbito de la política se dan en el ámbito de la ética pública, no ya en la base, sino en la puesta en práctica, de manera que los valores constitucionales son vistos desde un aspecto práctico, como el que llevan a cabo los servidores públicos, encargados como agentes institucionales del Estado, a realizar el contenido axiológico constitucional en sus actividades.

Dicho lo anterior, hay que hacer hincapié en el hecho de que en la actualidad, esta situación ha planteado la necesidad de fomentar el uso de la ética pública para mejorar el servicio público prestado. De esta manera existen las propuestas de realizar diversos códigos de ética para servidores públicos, a través de los cuales se busca establecer bases normativas sólidas para mejorar su comportamiento ético en sociedad y en sus propias labores, pues estas labores son en beneficio de ella y para ella.

Los intentos por establecer una ética pública con códigos de ética, a su vez conformados por valores, nos lleva a plantearnos si esta ética realmente es una ética, pues los valores contenidos por los códigos se tornan en valores jurídicos, “porque así se recogen en el propio derecho” (Ruiz Resa, 2015). Así mismo, la Constitución siendo la instancia reguladora del derecho y la política, se convierte en una declaración de valores axiológicos, y por ende de

valores específicos de cada ámbito, que tienen una estructura de sentido normativa, ideal, y a la vez es dinámica en tanto que la Constitución al convertirse en vida política, toma una nueva dimensión en lo real.

Es en esta misma dualidad presente en la Constitución en dónde los conflictos de valores se hacen presentes, el sentido normativo o ideal de la Constitución muestra un deber ser, mientras que en su parte dinámica de la vida política alude a múltiples visiones sobre “lo que debe de ser,” generando un conflicto entre los valores contenidos en la dimensión jurídica a través de la Constitución y los practicados en la vida política, pues la política:

“no es sólo —sin dejar de serlo— táctica y estrategia, empleo de medios eficaces para cumplir sus objetivos, sino también —y además insoslayablemente— una actividad práctica que persigue realizar ciertos valores o fines que sus agentes consideran valiosos” (Sánchez Vázquez, 2007).

La política por su ámbito práctico ha sido considerada preponderante para resolver los conflictos, y es por ello que Bauman en su libro *Ética posmoderna* señala que “se ha vuelto común declarar que los problemas éticos de la sociedad contemporánea solo pueden resolverse —si acaso— por medios políticos” (Bauman, 2005), no obstante el debate actual se centra en la ética de las personas que participan de la gobernabilidad, sin preguntarnos, discutir o analizar “la ética que los impulsa o los deja de impulsar” (Bauman, 2005), y lo más importante ¿dónde los valores axiológicos postulados en la Constitución entran en conflicto con su puesta en escena dentro de la gobernabilidad? Y, ¿cuándo este proceso de gobernabilidad termina por afectar o modificar las bases axiológicas establecidas del Estado en la Constitución?

Es necesario que dentro del Estado se compartan ciertos valores fundamentales para garantizar parámetros de convivencia y cohesión social, siendo imprescindible en la situación actual, realizar este tipo de investigaciones a profundidad. Determinar cuáles son los valores axiológicos contenidos en la Constitución y cuáles son aquellos valores que deben llevarse a la práctica por los actores involucrados en la gobernabilidad del Estado a través de su comportamiento ético, no es un problema menor, y como García Amado refiere “el concepto de ética o de lo ético es utilizado para abarcar el conjunto de las conductas exigibles y debidas. Dentro de lo ético, así caracterizado, dichas conductas debidas se dividen en morales y jurídicas. Derecho y moral son las dos partes de ese territorio ético.” (Ollero, García Amado, & Hermida del LLano, 2013)

Tradicionalmente, la doctrina ha realizado una diferenciación en torno al derecho y la moral, siendo el primero aquel que busca la convivencia pacífica y ordenada mediante disposiciones normativas externas al individuo, mientras que la moral ha sido delimitada a un elemento privado del individuo, donde este se dirige a la conciencia de los individuos que buscan su perfección ética.

Tanto el derecho como la moral han interactuado con la ética, pues ambos tienen la premisa de que el individuo pueda aspirar a través de la realización de conductas valiosas y concordantes con el bien común la materialización de valores, situación que se ha aplicado al ámbito estatal con la incorporación de conductas éticas a los servidores públicos, no obstante sin miras a que estas conductas vayan aparejadas al cumplimiento de los valores Constitucionales como bien común, antes bien como conductas deseables para la realización de un trabajo técnico.

Las crisis actuales que viven la mayor parte de los países latinoamericanos han afectado a sus instituciones centrales; para Fernando Calderón Gutiérrez estas crisis están modificando el perfil político de toda la región, y esto a su vez plantea la existencia de nuevas formas de vinculación entre instituciones y sociedad (Calderón Gutiérrez, 2016). Es innegable que los cambios económicos, políticos y sociales que se han dado en la sociedad inciden de manera profunda en la forma en que se ejerce la gobernabilidad en todos los sectores públicos, y por ende en el cómo se llevan a la práctica los valores constitucionales en la vida política y jurídica de cada uno de los países.

México, al ser un Estado Constitucional democrático de derecho, integra dentro de su estructura gubernamental la integración de valores, ideas y prácticas que son comunes a la sociedad, y que “atañe, entre otros a la representación de las formas jurídico-políticas del Estado” (Solé, 2011), por lo que en aquello que compone al Estado mexicano:

“no es, pues, únicamente un sistema jurídico político sino un sistema cultural. Es decir, además de las leyes y las instituciones legislativas y judiciales y políticas, sirve para fomentar y salvaguardar el pluralismo, la tolerancia y la igualdad de oportunidades” (Solé, 2011).

Sin embargo, existe una dualidad en este manejo del Estado, ya que por un lado siendo un Estado Constitucional, está basado en una decisión política fundamental que origina, constituye, contiene, regula y protege los valores y principios que deben de regir al Estado, la norma suprema del Estado que es la Constitución; por otro lado, el entramado político institucional en donde se da el quehacer práctico de la gobernabilidad, es decir, la puesta en práctica de los valores constitucionales, en la cual por los diversos cambios que se han gestado en el Estado, se han comenzado a involucrar nuevos actores, como la ciudadanía,

entendida como sociedad civil, para la atención de los problemas que se dan en el aparato estatal, situación que ha dado como resultado una relación de corresponsabilidad.

Esto a su vez ha dado lugar a distintos planes de acción para combatir los problemas político-institucionales en el Estado. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que refiere el requisito de un Estado de derecho plenamente funcional y vigente para que al aparato político-social del estado funcione, y “el incumplimiento de las leyes y la incapacidad de hacerlas valer constituye una ruptura de un pacto social fundamental que debe de existir entre la ciudadanía y el Estado” (INE, 2016).

En México, la misma desafección que muestran los mexicanos en torno al régimen del Estado está estrechamente ligado con “la apreciación de que este régimen no ha ofrecido resultados satisfactorios en prácticamente ninguno de los ámbitos que vinculan a la sociedad con sus gobiernos” (INE, 2016). La preocupación constante resulta de una falta de ética pública por parte de los servidores públicos, que antes de ejercer los valores constitucionales, realiza prácticas indebidas, por ejemplo hay una amplia percepción por parte de los ciudadanos acerca de la corrupción. El 90% de ellos considera que ésta constituye un problema, lo que coincide con los datos del Banco Mundial que califica con 39 sobre 100 a México en sus indicadores de control de corrupción.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) considera que la sociedad actual se encuentra inmersa en una profunda crisis de valores, centrada más en aspectos éticos y morales que en aspectos intelectuales (Sharma, 2014), prevaleciendo valores como la riqueza, el orgullo, el egoísmo y la hipocresía, que vienen a relucir en el tipo de comportamientos apreciados por los mexicanos en cuestiones de gobernabilidad, pero, no solamente los funcionarios que son parte de la

corrupción, sino también los mismos ciudadanos que se hacen copartícipes de estas conductas.

La firmeza del Estado de Derecho, la propagación de la seguridad y la justicia, así como todas las actividades que son parte de la gobernabilidad, recaen en los sujetos que ejercen las mismas, es decir, el problema no se encuentra en el cuerpo normativo del Estado Mexicano, pues los valores no pueden atender a otra cosa más que a la justicia, sino en la gobernabilidad que se da en éste, a través de la puesta en práctica de los valores y sobre todo, en las formas éticas en que se da esta acción.

La preponderancia del derecho sobre la política y el ejercicio de la gobernabilidad a través de la Constitución es evidente, pues como afirma García Ramírez:

“Si la Constitución es la norma crucial del sistema jurídico mexicano, a la que deben plegarse y corresponder todas las restantes en la inmensa pirámide jurídica, en esa misma ley suprema es preciso encontrar las decisiones políticas fundamentales y los valores éticos principales que guían y condicionan –ambas cosas- la formación del orden jurídico” (García Ramírez, 1997).

La Constitución es por tanto “la norma positiva en la que se manifiesta éticamente el Estado” (Casanueva Reguart, 2006), y por ello, es importante tener en claro cuáles son los valores depositados en ésta, para poder determinar cuáles son aquellos con los que se debe conducir la gobernabilidad y lograr a su vez que estos correspondan a los marcados por la Constitución, ya que como menciona García Máynez “todo valor sirve de fundamento a la norma que exige realizarlo,” (Obras 3, 2013) y si un valor no existe dentro de una realidad, la norma que verse sobre él es estéril.

1. Protocolo de investigación

1.1 Introducción

Las Constituciones son depositarias de los valores e ideales que se consideraron fundamentales en la construcción del Estado, y son al mismo tiempo, la norma suprema de la que deben desprenderse las demás normas, por lo que resulta de gran importancia conocer cuáles son los valores y cómo se configura la escala de valores presente en la Constitución, pues la fundamentación de la ética pública, entendida esta última como la ética que se debe llevar a cabo en lo público debe de estar fundamentada y orientada en estos valores para lograr que sean materializados .

A diferencia de otras Constituciones como la de España de 1978, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece de manera explícita los valores superiores que se encuentran en ella, ni una escala de valor precisada que nos señale el lugar que ocupa cada uno de ellos, sin embargo, esto no significa que estos valores no existen ni se encuentren en ella, pues estos se requieren para componer el *deber ser* que interviene en la formación no sólo de las Instituciones del Estado, sino que deben de ser sustento del actuar institucional.

1.2 Preguntas

¿Cuáles son los valores Constitucionales?

¿Cómo es la escala de valor constitucional?

¿La escala de valor constitucional corresponde a los valores establecidos en el Código de ética de las personas servidoras públicas?

1.3 Problema

La escala de valores establecida en la Constitución no corresponde a la escala de valor establecida en el Código de ética de las personas servidoras públicas, por lo que existe una incongruencia entre las escalas axiológicas.

1.4 Hipótesis

Fortalecer los valores constitucionales originarios de Igualdad, Libertad y Justicia, así como los que se incorporan con la Reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos que son el valor de lo humano, así como los principios que lo rodean fortalece la ética pública en México.

1.5 Objetivos

Objetivo general

Analizar si los valores axiológicos constitucionales se encuentran bajo la misma lógica del valor en el código de ética de las personas servidoras públicas

Objetivos específicos

- Explicar teóricamente la formulación de los valores dentro de la Teoría Constitucional.
- Describir los valores que se encuentran presentes en la Constitución Mexicana.
- Establecer las escalas de valor constitucionales y la presente en el Código de ética de las personas servidoras públicas
- Realizar un análisis comparativo de las escalas.

1.6 Metodología

Este trabajo de investigación se encuentra dividido en dos partes: en la primera de ella se emplea el método hermenéutico para que con él se pueda establecer en una primera instancia cuáles son los valores constitucionales y, en una segunda instancia cómo se conforma la escala de valor constitucional. El análisis hermenéutico se realizará en los Diarios de los Constituyentes de 1916-1917, así como en documentos de la época, entre los que podríamos considerar diarios personales de testigos de primera mano, finalmente se auxiliará este trabajo de estudios historiográficos.

En la segunda parte de este trabajo a través de un análisis comparativo se realizará la comparación entre la escala axiológica constitucional y la que está establecida en el Código de ética de las personas servidoras públicas con el fin de observar las diferencias y analizar las consecuencias.

Como sustento teórico de esta investigación se estará aplicando la Teoría de la Tiranía del Valor de Carl Schmitt, pues la misma contiene los elementos pertinentes para adentrarnos en la parte axiológica de los textos jurídicos necesarios, además, resulta pertinente utilizar esta teoría para lograr concretar los objetivos planteados.

1.7 Marco Teórico

Semblanza histórica de la Constitución como depositaria de valores

Si bien gracias al arduo trabajo de historiadores, cronistas y juristas podemos rastrear las concepciones jurídicas que existieron desde antes de la Conquista en el México prehispánico, para los efectos de esta exposición ahondaremos en la historia del constitucionalismo mexicano, es decir, de todas las constituciones que son fruto de la conformación de México

como nación, y que por su propia naturaleza representaron y representan parteaguas en históricos en los ámbitos sociales, políticos y jurídicos, teniendo en cuenta que “la historia constitucional no es otra cosa que la historia patria a través de las normas supremas” (de la Hidalga, 2002), para después centrar el estudio en la Constitución de 1917, pues al ser la Constitución vigente es necesario enfocar la investigación en este documento.

Constitución de 1917

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor en 1824 tras el derrocamiento de Agustín de Iturbide y la Caída del Imperio Mexicano el 4 de octubre de 1824, en ella se estableció que el nombre oficial del Estado, sería Estados Unidos Mexicanos, y en ella se estructuró todo un sistema “para llegar al fondo de la problemática de su momento histórico” (de la Hidalga, 2002) la conciencia de las tradiciones, los tintes ideológicos de aquellos que lucharon por conseguir un México libre, soberano e independiente

El 14 de septiembre de 1916, Carranza reconoce oficialmente que la celebración de un congreso constituyente es “el único medio para alcanzar los fines por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad” (Ramírez Álvarez & Garrido del Toral, 2015, pág. 158). Las posturas que planteaban un nuevo constituyente consideraban que:

“la soberanía nacional, que reside en el pueblo, no expresa ni ha significado en México una realidad, sino en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, si casi de una manera rara vez interrumpida, el poder público se ha ejercido no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación” (Ramírez Álvarez & Garrido del Toral, 2015, pág. 107).

Para la conformación de la nueva Constitución Carranza consideró que:

“lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme a nuestros antecedentes políticos, y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos, de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro, es, no me cansaré de repetirlo, construir el Gobierno de la República respetando esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad, y a la seguridad de sus derechos, que siente el pueblo mexicano” (Ramírez Álvarez & Garrido del Toral, 2015, pág. 107).

La Constitución de 1917, tenía como urgente necesidad proteger los derechos obreros y agrarios, pues en estos ámbitos habían sido cometidos grandes abusos y eran estos los principales sectores donde se pedía un cambio, sin embargo esto no fue del todo inmediato, ya que aún se guardaba respeto a las disposiciones contenidas en la Constitución que le dio origen, a la vez que surgen las garantías sociales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la carta magna que rige actualmente, desde su promulgación se fijaron en ella los límites como tradicionalmente había sido. La clásica separación de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial se han conservado, de manera que las reformas que se han dado en la Carta Magna mexicana se han dirigido a la necesidad de actualizar o prever situaciones que en el momento de su promulgación no existían, ya que como refiere de la Hidalga (2002)

“La Constitución [...] no es solamente un texto jurídico, sino una representación de la sociedad. De lo que ha sido, de lo que no pudo ser, de lo que no ha podido alcanzar

y de los programas necesarios para alcanzar y realizar las esperanzas sociales” (de la Hidalga, 2002).

Reforma del 2011 a la Constitución en materia de Derechos Humanos

La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos es un parteaguas en la forma en la que en México se desarrolla la vida pública, se imparte justicia y se da la exigibilidad de la libertad y de la justicia. La forma que tenemos de concebir los valores representados en la Constitución, los mecanismos jurídicos y el desarrollo de las políticas públicas enfrentan enormes retos que es necesario analizar.

A partir de dicha anexión constitucional, en la cual los Derechos Humanos dejan de ser parte exclusiva del Derecho Internacional y se incorporan a las normas constitucionales, estos se convierten en parte de los lineamientos que dirigen al país y deben seguir los servidores públicos, ya que como lo señala el artículo 1º *constitucional*:

“todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016)

Teoría del valor

Las concepciones éticas solo tienen lugar cuando el ser humano pasa de sobrevivir a vivir en armonía con sus semejantes, esto debido a que solo dentro de este entorno de seguridad se puede dar la reflexiones e interiorización de su vida, pues la lucha por la supervivencia ha quedado atrás, y es entonces cuando surge *el llamado moral* que se deriva de la responsabilidad y la necesidad de hacer el bien.

Hans Kung (Proyecto de una ética mundial, 2006) refiere que “el hombre normalmente siente un inextinguible deseo de aferrarse a algo, a confiar en algo, [...] el hombre siente, en una palabra, el deseo de poseer algo semejante a una orientación fundamental ética”, es decir, que para entender qué es esta fundamentación ética y cómo se da, debemos en un primer lugar entender qué es un valor.

Diferentes autores han dado su visión sobre los valores, Max Scheler (Ética, 2001) por ejemplo, nos dice que los valores son cualidades materiales, es decir, lo bueno y lo malo, no pertenecen al mundo de las ideas, no son valores abstractos que usamos para referirnos a las cosas, son en sí mismos parte de aquellas cosas a las que se los nombramos, son cualidades que le damos a todo aquello que nos rodea.

Uno de los grandes problemas a los que se ven enfrentados los estudiosos de la filosofía del valor ha sido al subjetivismo. Para tratar de evitar esta barrera que restaría científicidad a las teorías producto de estas reflexiones se ha optado por solucionarlo, y hasta el día de hoy se sigue tratando de solucionar, con un orden ascendente de valores según niveles.

Scheler al realizar su jerarquía de valores empezó con el estrato más bajo, partió de los valores útiles y siguió subiendo hasta lo más alto, que denominó como lo *santo*. Por su parte Nicolai Hartmann habló de un sistema de conexión objetiva del mundo real en estratos, de los cuales el más bajo sería el inorgánico y el más elevado el espiritual.

Tales posturas fueron analizadas posteriormente por Schmitt en su libro «La tiranía del valor», concluyendo que estas escalas no son tan importantes como el valor en sí mismo, ya que “sean los valores tan elevados o santos como se quiera, sólo valen como valores para algo o para alguien.” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012).

Partiendo de la postura schmittiana, los valores solo lo son en cierta ubicación y en cierto momento y “el valor más elevado tiene el derecho y el deber de someter el valor más bajo, y a su vez el valor como tal aniquila el derecho del no valor ya que “nadie puede valorar sin desvalorizar o poner en valor” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012).

Una vez señalando que no es tan importante la escala como el valor, Schmitt consideró que esto es así porque el valor tiene su propia lógica, un valor es aquello que vale, sin embargo, debemos de aclarar que en primer término la concepción de valor ofrecida por Schmitt en su texto es extraída desde una perspectiva económica del valor, ya que como refiere Villacañas:

“la filosofía del valor aceptó un conjunto de herramientas que procedían de la psicología y la economía [...] La clave de este proceso teórico fue que permitió extender el valor de la ciencia desde la economía a la antropología” (Villacañas, 2008).

La postura del valor que considera Schmitt a pesar de encontrarse íntimamente relacionada con la economía, no demerita su análisis de la filosofía del valor, pues intentó ofrecer una respuesta a la amenazadora crisis provocada por el nihilismo que dejó el siglo XIX, de manera que:

“fue un intento de afirmar al hombre como un ser libre y responsable, no por cierto a partir de un Ser, pero sí al menos a partir de la validez de aquello que se dio en llamar valor. A este intento se lo puede designar indudablemente como sustituto positivista de lo metafísico” (Villacañas, 2008).

“El valor no es sino que vale,” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012) pero a la vez representa un fortísimo impulso a la realización, sin embargo al preguntarse quién impone

los valores el autor nos dice que es un proceso meramente subjetivo en el cual “la libertad puramente subjetiva de las posiciones de los valores conduce empero a una lucha eterna de los valores y cosmovisiones, a una guerra de todos contra todos” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012), situación que no puede ser aceptada en un ordenamiento jurídico tan fácilmente, pues es justamente un orden el que debe brindar.

2. Institucionalismo histórico y constitución

2.1 Introducción

El Estado contemporáneo afronta en la actualidad un desafío de gran magnitud debido a los cambios que la explosión demográfica y la globalización han traído consigo. La búsqueda de la eficiencia, la equidad y la justicia con la que los servidores públicos realizan y desempeñan sus funciones, ha generado un desafío al sector político, económico y social, y sobre todo, una gran preocupación en cómo es posible solucionar este reto.

El Estado nunca ha sido una entidad estática, pues no es inmune a los cambios sociales que se gestan en él, y es por ello por lo que en los primeros años del siglo presente nos hemos encontrado con grandes modificaciones en las estructuras de poder. Estas modificaciones se han venido configurando en un modelo de gobernabilidad en la cual se busca redireccionar el modo en la que se ejerce el poder, cambiándolo de un modelo vertical a uno horizontal, esto aunado al constitucionalismo que se ha ido consolidando y fortaleciendo como paradigma, en el cual, las leyes no son ya solo un conjunto de normas jurídicas rígidas, sino una combinación armoniosa de principios, normas, reglas y valores.

El redireccionamiento del ejercicio del poder ha llevado a la necesidad de involucrar a la ciudadanía entendida como sociedad civil en los problemas del aparato estatal, se ha buscado generar una relación de corresponsabilidad para atender lo público, sin embargo, esto ha derivado en la imperiosa necesidad de dar un sustento ético que permita un correcto funcionamiento que le de orden a esta nueva dinámica del Estado.

Aguilera (2013) refiere que el propósito ético es la fundamentación racional de la acción que elegimos, a la cual le damos significado y brinda sentido o finalidad a nuestro querer, por lo

que es en la ética donde todas las acciones realizadas por el hombre buscan una teleología, el bien común, o la felicidad aristotélica, y esto resulta así porque no actuamos por el simple hecho de hacerlo, sino que cada acción que realizamos tiene un por qué y un deber que nos motiva a actuar de una manera u otra.

La necesidad de establecer un nuevo paradigma se nos presenta debido a que en México se viven diariamente casos de corrupción, de la búsqueda de beneficios personales en el sistema de Gobierno y trámites burocráticos interminables que afectan no solo las relaciones de la sociedad con los actores estatales, sino que desembocan en una crisis de la gobernabilidad y de hartazgo ciudadano, donde la imposición de castigos y sanciones más fuertes parecen no ser el antídoto adecuado para acabar con los males que aquejan.

Muchos de los males que vemos en esta crisis de gobernabilidad han sido reconocidos por los gobiernos en turno, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 expuesto por el gobierno encabezado por Felipe Calderón se desarrolla en el Eje 1 la necesidad de la certidumbre jurídica por parte de todos los mexicanos, ya que como lo señala el mismo texto:

“Un sistema jurídico con principios y planteamientos ambiguos o anacrónicos, que derivan en situaciones como la discrecionalidad de funcionarios en la toma de decisiones o en procedimientos largos y complejos, impacta negativamente [...] en la certidumbre de los ciudadanos de que las leyes se cumplen”(Presidencia de la República, 2007).

Sin embargo, el problema no se encuentra en el aparato normativo del Estado, ya que la protección del orden que pretenden las normas jurídicas, la firmeza del Estado de Derecho, la propagación de la seguridad y la justicia, así como todas las actividades que son parte de

la gobernabilidad, recaen en los sujetos que ejercen las mismas, es decir, el problema no se encuentra en el cuerpo normativo del Estado Mexicano, sino en la gobernabilidad que se da en este, mediante los actores gubernamentales que llevan día a día las tareas correspondientes a sus funciones, no se trata tanto de qué deben hacer los servidores público, sino de cómo y por qué lo hacen de esa manera.

Es por ello por lo que antes de comenzar a buscar soluciones a esta crisis, debemos de entender en un primer momento que bajo el paradigma constitucionalista, la Constitución es la norma que prima sobre todos los involucrados en la tarea estatal, en las propias bases de la gobernabilidad, pues como hemos señalado anteriormente, en ella se encuentran las decisiones políticas fundamentales y los valores que deben hacerse valer en el Estado, tanto por el aparato gubernamental, como por el ciudadano, pues si bien son ideales, tienen la misión de fungir como guías para alcanzar las metas comunes que motivaron la institución del Estado.

Considerando que la Constitución es “la norma positiva es la forma en la que se manifiesta éticamente el Estado,” (Casanueva Reguart, 2006) es importante tener en claro cuáles son los valores depositados en está, para poder analizar cuáles son los valores con los que se conduce la gobernabilidad y lograr que estos correspondan a los marcados por la Constitución, ya que como menciona García Máynez (Obras 3, 2013) “todo valor sirve de fundamento a la norma que exige realizarlo,” y si un valor no existe dentro de una realidad, la norma que verse sobre él es estéril.

El objetivo de este trabajo de investigación es en un primer momento conocer cuáles son los valores superiores, es decir los valores contenido en la Constitución vigente y a partir de ello realizar una comparación con los valores establecidos dentro del marco del Código de ética

de las Personas Servidoras Públicas, ya que siguiendo la lógica propia de la jerarquía constitucional y teniendo en cuenta que la Constitución no sólo es depositaria de las normas fundamentales en las que descansan las instituciones del Estado, sino que también es la depositaria de los valores superiores en los que se fundamenta el Estado, los mismos deben de estar explícitamente especificados dentro de este último código. Para ello utilizaremos la teoría schmittiana de la Tiranía del Valor, ya que en ella se establece la necesidad de escalas de valor en las cuales existen valores que son jerárquicamente superiores y que se deben de ejercer bajo esta misma lógica.

Es importante aclarar que la Constitución mexicana no contiene dentro de su texto normativo formal de manera expresa los valores superiores, como es el caso de la Constitución Española o la Constitución de Polonia, que si contienen en el cuerpo formal una expresión explícita de los valores superiores, por lo que será necesario para esta investigación realizar un análisis hermenéutico de fuentes históricas primarias, en especial de los Diarios de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917 para acercarnos al aprehendimiento de estos valores y el establecimiento a través del análisis discursivo de las fuentes que dieron origen a la escala de valor depositada en esta Constitución y los cambios que se han dado con respecto a la misma a través de reformas constitucionales como lo son la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011.

Dentro de este primer capítulo se pretende establecer el enfoque metodológico con el que se analizará el problema de estudio, así como establecer primeramente ya desde el enfoque del institucionalismo histórico el análisis de «Constitución» que nos permitirá adentrarnos en capítulos subsecuentes a la problemática estudiada.

2.2 Teoría del valor y teoría de la Tiranía del Valor

Las concepciones éticas solo tienen lugar cuando el ser humano pasa de sobrevivir a vivir en armonía con sus semejantes, esto debido a que solo dentro de este entorno de seguridad se pueden dar la reflexiones e interiorización de su vida, pues la lucha por la supervivencia ha quedado atrás, y surge *el llamado moral* que se deriva de la responsabilidad, y la necesidad de hacer el bien, es decir, la superación del estado de naturaleza del que hablaban los liberales modernos como Hobbes para quien el hombre debe salir de ese estado para poder reunirse en sociedad y limitar sus acciones negativas con el fin de lograr una convivencia, o Locke, quien consideró al igual que Hobbes al hombre como un ser problemático en naturaleza, con la diferencia de que para Locke es posible aún en ese estado, la salida del hombre por medio de su razón.

Hans Kung (Proyecto de una ética mundial, 2006) refiere que “el hombre normalmente siente un inextinguible deseo de aferrarse a algo, a confiar en algo, [...] el hombre siente, en una palabra, el deseo de poseer algo semejante a una orientación fundamental ética”, para entender qué es esta fundamentación ética debemos en un primer lugar entender qué es un valor, porque siguiendo a Kung, ese deseo es sustentado en la confianza en algo, es decir, que el hombre necesita algo valioso para guiar sus acciones, de manera que los valores sirven como fundamento de la ética.

Diferentes autores han dado su visión sobre los valores, Max Scheler (Ética, 2001) por ejemplo, nos dice que los valores son cualidades materiales, es decir, lo bueno y lo malo, no pertenecen al mundo de las ideas, no son valores abstractos que usamos para referirnos a las cosas, son en sí mismos parte de aquellas cosas a las que se los nombramos, son cualidades que le damos a todo aquello que nos rodea, por lo que el valor no necesariamente tiene que

ser algo incomprensible o inmaterial, sino que una ley o un documento puede servir como valor.

Uno de los grandes problemas a los que se ven enfrentados los estudiosos de la filosofía del valor ha sido al subjetivismo, para tratar de evitar esta barrera que restaría científicidad a las teorías producto de estas reflexiones han optado por solucionarlo, y hasta el día de hoy se sigue solucionando, con un orden ascendente de valores según niveles, el mismo Scheler al hacer su jerarquía de valores empezó con el estrato más bajo con los valores útiles y siguió subiendo hasta lo *santo*.

Por otra parte Nicolai Hartmann habló de un sistema de conexión objetiva del mundo real en estratos, de los cuales el más bajo sería el inorgánico y el más elevado el espiritual, sin embargo como bien menciona Carl Schmitt en su libro «La tiranía del valor» ya “sean los valores tan elevados o santos como se quiera, sólo valen como valores para algo o para alguien”(Schmitt, 2012).

Los valores para Schmitt solo lo son en cierta ubicación y en cierto momento y “el valor más elevado tiene el derecho y el deber de someter el valor más bajo, y a su vez el valor como tal aniquila el derecho del no valor ya que “nadie puede valorar sin desvalorizar o poner en valor”(Schmitt, 2012).

Para Carl Schmitt el valor tiene su propia lógica, un valor es aquello que vale, debemos de aclarar en primer término que la concepción de valor ofrecida por Schmitt en su texto está extraída del concepto económico del valor, ya que como refiere Villacañas “la filosofía del valor aceptó un conjunto de herramientas que procedían de la psicología y la economía [...]

La clave de este proceso teórico fue que permitió extender el valor de la ciencia desde la economía a la antropología”(Villacañas, 2008).

Sin embargo, para Carl Schmitt la filosofía del valor representa una respuesta a la amenazadora crisis provocada por el nihilismo que dejó el siglo XIX, pues “fue un intento de afirmar al hombre como un ser libre y responsable, no por cierto a partir de un Ser, pero sí al menos a partir de la validez de aquello que se dio en llamar valor. A este intento se lo puede designar indudablemente como sustituto positivista de lo metafísico” (Villacañas, 2008).

“El valor no es sino que vale,” (Schmitt, 2012) pero a la vez representa un fortísimo impulso a la realización, sin embargo al preguntarse quién impone los valores el autor nos dice que es un proceso meramente subjetivo en el cual “la libertad puramente subjetiva de las posiciones de los valores conduce empero a una lucha eterna de los valores y cosmovisiones, a una guerra de todos contra todos” (Schmitt, 2012).

2.3 Gobernabilidad

Si bien este problema de investigación no tiene dentro de su formulación variables establecidas desde la noción de gobernabilidad, es importante entender qué es la gobernabilidad, ya que la noción de un Estado justo y por ende entendido como legítimo, roza tangencialmente las implicaciones que puede existir con respecto a esta última, pues si la aplicación no sólo de las normas constitucionales, sino de los valores depositados en ella no se lleva a cabo de manera eficaz ésta perderá su carácter de legítima y por ende perderá su consolidación como fundamento de las reglas de las instituciones estatales, mismas que deben su origen y misión a las tareas por las que fueron creadas, puesto que sin la existencia

de la Constitución, sería imposible la creación de las instituciones encargadas de llevar a cabo la realización de las mismas.

Para Camou *gobernabilidad* se trata de una dimensión específica entre la relación entre gobernantes y gobernados, que no es unilateral, sino que se debe desarrollar de manera conjunta para mantener niveles aceptables de gobernabilidad, por lo que tiene una relevancia práctica y no sólo teórica, de manera que es importante considerar las relaciones establecidas formalmente en la propia Constitución así como en las leyes específicas que enmarcan la creación y la misión de las instituciones, que si bien pueden ser comprendidas a través de la elaboración de diversos mecanismos cuantitativos que nos señalan el funcionamiento, eficiencia o eficacia de los actores gubernamentales, también es necesaria la comprensión de las instituciones desde su formalidad, pues estas tienen como regla superior, el compromiso constitucional.

Menciona Camou que distintos autores han dado diferentes definiciones de gobernabilidad, y en ella se ha dado principalmente en caracterizarla bajo los rubros de propiedad, cualidad o estado, dejando de lado cualquier otra noción, como lo son la *eficacia*, *legitimidad* y *estabilidad*, mismas que son componentes básicos de la gobernabilidad, por ello debemos considerar que las diferencias conceptuales que puedan surgir en las definiciones de gobernabilidad se deben a la combinación de tradiciones teóricas o valorativas, que no necesariamente atienden a la propia gobernabilidad.

Camou refiere que desde el inicio del pensamiento político han existido dos posturas opuestas predominantes sobre el gobierno; la primera está ligada a la esfera ética: y es la que se encarga de analizar y formular cuál sería el modelo de un *buen gobierno*, postura íntimamente ligada a la noción de justicia, pues a partir de ella, se debe elegir la forma de gobierno; en la segunda

la política se presenta desde la peculiaridad de la acción, y va ligada a la noción de un sistema de ejercicio de poder y está ligada a la noción de eficacia, donde lo bueno se determina bajo ese rubro.

Con respecto a las diferentes nociones de gobernabilidad Camou comienza a establecer una relación entre *Gobernabilidad y eficacia*, noción en la que el ejercicio del poder político pone énfasis en la eficacia/eficiencia que se ve reflejado en la gestión gubernamental. La *gobernabilidad* se presenta como una propiedad que se define por la capacidad de alcanzar objetivos prefijados al menor costo posible.

En esta primera definición de gobernabilidad la cuestión de los medios y los fines se ve fortalecida por la teoría de Maquiavelo y el realismo político, uniendo la noción de gobierno eficaz/eficiente a una opción de obediencia, en la que se puede decir que a “mayor probabilidad de encontrar cumplimiento (o al menos aceptación social) a una decisión política, tendremos mayor grado de gobierno, y, por tanto, mayor gobernabilidad” (Camou, 2013, pág. 19).

Con respecto a la segunda definición de *gobernabilidad y legitimidad: la tradición del “buen gobierno”*, está se encuentra ligada a la tradición de la justicia y la legitimidad de un ordenamiento político-social, es decir al bienestar general. Esta perspectiva se encarga de desentrañar cuál es la mejor forma de gobierno y establecer las condiciones necesarias para que este se pueda llevar a cabo. Dentro de esta perspectiva se encuentran autores como Platón, Maquiavelo, Bodin y Locke.

En la perspectiva de la gobernabilidad y la legitimidad desde el buen gobierno, destaca la conexión que se considera necesaria entre legitimidad y ejercicio de poder, por lo que la

governabilidad es una cualidad de la acción gubernamental; esta perspectiva ha puesto énfasis en las amenazas a la gobernabilidad provenientes de la exclusión, ya que se considera que la acción gubernamental demanda un criterio de utilidad colectiva, pues una de las tareas del gobierno es el cuidado de sus ciudadanos.

Camou habla de una tercera corriente que se ubica en un plano intermedio y se refiere a ella como *Gobernabilidad y estabilidad*, para esta visión “un sistema será más gobernable en la medida en que posea mayor capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y político” (Camou, 2013, pág. 21).

La estabilidad política es la capacidad del sistema para perdurar en el tiempo, esta estabilidad no implica un estancamiento, sino una adaptación del sistema para sobrevivir. Para ello debe de tenerse en cuenta la capacidad de una forma de gobierno de mantenerse en el poder, es decir, de ejercer la gobernabilidad de una manera adecuada.

Camou entiende la gobernabilidad desde un sentido amplio, la entiende como “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental” (Camou, 2013, pág. 22), ubicándola así en un plano de relación entre sistema político y sociedad, para él no se debe dar énfasis a ninguno de los componentes mencionados al inicio ya que todos ellos son necesarios para que exista gobernabilidad en un sistema político.

La gobernabilidad en ese mismo sentido se encuentra íntimamente relacionada con la axiología, pues esta se encuentra no sólo dentro de los cuerpos normativos e institucionales, sino que funciona como fundamento de la ética, que es privada y pública al mismo tiempo, y esta va ligada a la idea de la búsqueda de un buen gobierno, porque sólo un gobierno que

sea legítimo será aquel que realmente esté velando por el cumplimiento del bien común, por lo que ética y política son inseparables en el ejercicio de la vida pública y privada que se da en el Estado, pues como señala León Olivé

“aunque muchas veces las normas jurídicas se imponen de facto por un poder dominante (...) en el contexto plural de las sociedades modernas y que aspiran a ser democráticas, la estabilidad de los acuerdos exige que las normas jurídicas se fundamenten en normas éticas que sean consideradas como legítimas por los diversos grupos sociales” (Olivé, 2014).

Sin embargo, muchas veces en el ejercicio de la gobernabilidad los valores que se encuentran contenidos dentro de cuerpos normativos de las instituciones distan mucho de ser los valores compelidos en la Constitución y aceptados por la sociedad, de nuevo entendiendo que la Constitución tiene dentro de sí un contenido de ideales y de valores, es decir, que la Constitución puede contener valores que ya no valen o valores que siguen valiendo, pero no que son llevados a cabo o puestos en práctica por aquellos servidores públicos y ciudadanos que están encargados de su realización, es un deber que necesita ponerse en práctica para lograr los objetivos.

Es aquí donde nos encontramos que, la concepción jurídica “alejada del sentido moral de los valores que trascienden los derechos particulares, la multiplicación de los procedimientos y los reglamentos jurídicos lleva solo a un vacío” (Olivé, 2014), pues si alejamos las reglas del derecho de las propias de la ética y de los objetivos políticos concretos, estaremos alejando al Derecho de su contexto, pues el derecho sigue manteniendo como tarea, el compromiso de ofrecer reglas y obligaciones sustentadas no solamente en las cuestiones procesales, sino que también tiene como tarea la protección de aquello que debe hacerse y de aquello que no debe

hacerse para cumplir con lo primero, lo que es deseable y lo que no es deseable, en pocas palabras, el derecho sigue teniendo la difícil labor de proteger lo que es valioso.

Es por ello que en este proyecto se pretende analizar la problemática que existe en el desarrollo de la gobernabilidad en México, ya que como nación constituida en Estado, existe una jerarquía de valores determinada, que se encuentra prescrita en nuestra Carta Magna, sin embargo esta jerarquía se ve fuertemente trastocada si no es respetada, y si se entiende que una puesta en valor hace al valor algo inevitable, pues representa un cambio específico en el pensamiento y en la ejecución de las leyes, debemos de buscar mecanismos que nos permitan que los ideales presentados en la Constitución y los valores que están implícitos en los cuerpos normativos que surgen de ella sean los mismos para un correcto funcionamiento del Estado-Nación.

2.4 Instituciones

Resulta pertinente en un primer momento explicar por qué es necesario de hablar de institución-institucionalización. Una institución como conjunto de reglas, tanto formales e informales que tienen como objetivo desincentivar o incentivar ciertas conductas de los hombres en sociedad se distingue de cualquier actividad “circunstancial o episódica” (Vallês & Martí i Puig, 2015), permitiendo de esa manera que exista menos incertidumbre y menos necesidad de reinventar procedimientos para llegar al mismo resultado.

Según Vallês & Martí i Puig (2015) la institucionalización dentro de la práctica política estatal ofrece las siguientes ventajas:

- a) Ahorra esfuerzo social, los procedimientos son los mismos para garantizar resultados iguales.

- b) Se disminuye el riesgo de imprevisibilidad y la incertidumbre, ya que existen roles definidos para los actores en sociedad.
- c) Con la institución se distingue entre la función política y el ser humano individual que desempeña dicha función en un Estado, dotando así a la institución de una especie de vida propia con la cual sigue existiendo a pesar de las contingencias personales.

Las instituciones son vitales para el desarrollo de un gobierno y en general de las tareas del Estado, pues si bien una Constitución ya puede ser considerada como una institución, necesita de otras instituciones que la hagan materializarse, pero también las instituciones al menos las consideras como legítimas, deben su creación a la propia Constitución, de tal manera que las instituciones deben la cooperación pero también la consecución del buen gobierno para que estas sean realmente plausibles.

La cláusula que se busca a través del Estado de derecho es precisamente evitar que las instituciones violenten lo valioso, de tal manera que resulta necesario compaginar los valores institucionales que contiene la Constitución, con los de las instituciones gubernamentales, pues estas son consecuencia de la primera, y tienen como principal labor el llevar a cabo lo impuesto por las normas jurídicas, que evidentemente no pueden ser contrarias a la Constitución.

2.5 El institucionalismo histórico como enfoque de análisis

El análisis institucional y la genealogía de procesos de formación de las instituciones deben de ir acompañados de un componente histórico sustantivo, ya que sin él “los resultados importantes pasarían desapercibidos, las relaciones causales serían malentendidas e hipótesis valiosas probablemente no serían consideradas” (Pierson & Skocpol, 2008); las razones para

«tomarse en serio la historia» provienen de la visión de que la temporalidad de los acontecimientos tiene una *trayectoria dependiente* (Sewell, 2005), es decir un acontecimiento histórico tendrá posibles resultados en la secuencia de eventos posteriores a él en el tiempo.

En el campo de la investigación del constitucionalismo mexicano esto resulta importante debido a que como menciona García García (2013), el institucionalismo como instrumento teórico y empírico ayuda a explicar “la creación, el desarrollo, el funcionamiento y el cambio o extinción de las instituciones organizaciones”, que en el marco específico de este trabajo hace referencia a la figura de la Constitución o Constituciones que ha tenido México, pues siguiendo el institucionalismo histórico, las decisiones políticas que son tomadas en un tiempo determinado sirven para comprender gran parte de los fenómenos políticos que acontecen, siempre y cuando no exista un cambio radical que haya modificado en gran medida esa idea originaria.

En el caso mexicano, la Constitución cuenta con más de cien años de existencia, años en los que se ha visto sujeta a numerosas reformas, sin embargo, al seguir vigente, podemos inferir que el cambio no ha sido radical, pues cuando un país sufre un cambio de gran magnitud, es necesario iniciar la elaboración de una nueva Constitución, pues siguiendo nuestra línea argumentativa acerca del valor, se puede decir que cuando una Constitución es sustituida, es debido a que como institución ya no cumple con los objetivos, deseos o intereses más generales de los gobernados, es decir que la Constitución como institución ha dejado de ser valiosa y debe ser elaborada una nueva con lo que ahora es considerado como valioso.

Si los cambios radicales presuponen la elaboración de una nueva Constitución, porque esta ha dejado de valer, con las reformas no podemos señalar lo mismo, sino que debemos

considerar que en su interior se ha generado un posible cambio de lo que resulta valioso, de tal manera que una modificación en la escala de valor no necesariamente requiere una nueva Constitución y por ello resulta pertinente comprender qué interacción tienen los valores contenidos en ella a través de la escala de valor.

La propia historia constitucional mexicana muestra que la justificación que existe en la creación de las instituciones se fundamenta primeramente en orientar a los hombres en la búsqueda del bien común o en lo que en cierto momento histórico determinado se considera del interés de todos, de ahí que por ejemplo la Constitución de 1917 haya tenido como base políticas sociales y agrarias centradas en la creación de un modelo constitucional dirigido a la búsqueda de la igualdad, o que la Constitución de 1824 centrara las bases de la soberanía como factor de independencia del Estado frente a Nueva España, es decir, que dependiendo del momento histórico, lo determinado e instituido en la Constitución como valioso será una cosa u otra, buscando asegurar y proteger aquello que decidió el Constituyente como lo deseable para los individuos que conforman el Estado.

Como enfoque de análisis, el institucionalismo histórico tiene como características “el abordaje de las grandes preguntas del mundo real, el rastreo de los procesos a través del tiempo, y el análisis de configuraciones y contextos institucionales” (Pierson & Skocpol, 2008). Con el fin de entender que las instituciones son producto de los contextos en que se forman y que en estos contextos se incluyen factores políticos, sociales e históricos en los cuales las acciones de los individuos están orientadas a satisfacer normas y valores propios de los hombres, pero que no son fijos y pueden ser modificados por una fuerza política o simplemente porque dejan de ser relevantes para el tiempo en el que se encuentran, a menos que puedan continuar evolucionando y seguir vigentes por cierto tiempo.

Debido a ello el abordaje de este trabajo de investigación se hará desde el enfoque proporcionado por el institucionalismo histórico ya que este enfoque permite entender que “las instituciones sólo pueden ser entendidas como producto del contexto político, social e histórico y, por tanto, las acciones de los individuos están más orientadas a satisfacer normas y valores que maximizar beneficios” (Zurbriggen, 2006).

Los procesos de interacción de los distintos agentes, en el caso específico de los Constituyentes que se involucraron en la promulgación de las Constituciones Mexicanas hasta la institucionalización dada por la promulgación constitucional puede ser rastreada a través de las fuentes históricas primarias como los Diarios de los Debates de los Congresos Constituyentes y los testimonios que se conservan en los discursos y libros teóricos de las épocas, permitiendo con ello recolectar información de primera mano, no sólo del contenido jurídico de cada constitución, sino también del contenido dogmático y de las ideas que permitieron tales configuraciones.

En el caso específico de este trabajo de investigación este tipo de rastreo en fuentes que ahonden más en los ideales que se establecieron tras el contenido formal de la Constitución son relevantes ya que a través de ello y siguiendo la teoría schmittiana de la Tiranía del Valor permite un acercamiento y el establecimiento de las escalas de valor propias de la Constitución, ya que además de contener en ella la normatividad expresa de la que se desprenderán los códigos supeditados a ella, contiene en su conjunto una serie de valores que componen su contenido axiológico.

Es importante resaltar que este trabajo de investigación no está centrado en la cuestión *legalista*, la cual es sólo una de las formas en que se puede realizar el análisis constitucional, ya que si bien una parte de la definición institucional proviene del contenido del texto legal

–la Constitución– en donde “aparecen las reglas que señalan el campo de juego de las Instituciones del Estado” (Vallès & Martí i Puig, 2015, pág. 171) y gracias a ello se disminuye la imprevisibilidad y la incertidumbre con respecto al ejercicio de la función política, la respuesta a por qué se obedece a la misma está estrechamente vinculada a la cuestión de la legitimidad.

Desde finales del siglo XVIII la legitimidad del poder en los sistemas liberales se apoya en la existencia de una Constitución, donde esta debe de entenderse como *justa* y depende de “el ajuste de esta misma decisión a un sistema de valores sociales que van más allá de la propia ley escrita, incluida la constitución” (Vallès & Martí i Puig, 2015).

Dado que el institucionalismo tradicional tiene una orientación legalista y estructuralista en tanto que el estudio desde este enfoque se centra en la ley y en su injerencia en el desempeño de la actividad gubernamental, es menester señalar que:

“se considera a las instituciones como determinantes *ipso facto* de los desempeños de los actores, la posibilidad de predecir comportamientos sistémicos o individuales sea plausible a través del simple análisis de las instituciones formales que articulan los escenarios políticos. Bajo dicha perspectiva, variables de carácter cultural o incluso aquellas relacionadas con la articulación de estructuras institucionales informales son inobservadas y reducidas a lo contextual y aleatorio” (Basabe Serrano, 2007, pág. 179).

Resulta poco pertinente su uso como enfoque metodológico para los objetivos de esta investigación, ya que como se ha señalado por sus detractores el excesivo apego al

formalismo oculta en el análisis interacciones entre los actores, dando como resultado “el divorcio entre lo prescrito y lo observado” (Basabe Serrano, 2007) desde este enfoque.

Para lograr su objetivo el institucionalismo histórico tiende a mirar su objeto de estudio no como un punto fijo en el pasado, sino como un desarrollo histórico causal en el que todo el proceso tiene relevancia, para ello se apoya de fuentes primarias de carácter histórico, poniendo “foco en la substancia y [...usando un] eclecticismo teórico” (Pierson & Skocpol, 2008).

Los factores clave según Bedoya (2009) en el institucionalismo clásico son el conjunto de normas, valores y reglas de actuación que buscan determinar el comportamiento de los actores por lo que “no cuenta tanto quiénes son los actores, sus preferencias y sus estrategias sino cuáles son las normas que se han consolidado en un contexto dado, los valores predominantes en un sistema político o los procedimientos de actuación política y administrativa que se han establecido en un área política determinada” (Bedoya, 2009); sin embargo, el institucionalismo histórico tiene características conceptuales que lo diferencian con respecto a otros tipos de enfoques institucionales, las cuales son:

- a) Desde el institucionalismo histórico, las instituciones son el contexto en el cual los actores políticos definen estrategias y buscan intereses. Desde el tema que interesa a este trabajo de investigación, las Asambleas o procesos constituyentes son en sí el contexto en el cual los actores definen estrategias y buscan sus intereses, ya que el fin último de este proceso es que “la elaboración del nuevo marco jurídico refleje un intercambio constante de ideas y reivindicaciones entre las asambleas constituyentes, los poderes institucionales [...] y la sociedad” (Pisarrello, 2014, pág. 173).

- b) Para los institucionalistas históricos es importante cómo los individuos y los grupos definen sus intereses como problemática, por ejemplo podemos observar las discusiones entre liberales y conservadores en los debates constituyentes, en los cuales los intereses de ambos bandos forman parte de la agenda política de la configuración institucional de la propia constitución.
- c) Pese a que los intereses de los individuos y los actores son vistos como problemática, los actores políticos son vistos como seguidores de reglas. Por ejemplo, el propio proceso constituyente tiene dentro de sí mismo una serie de formalidades que deben de ser respetadas para que pueda culminar con la promulgación de una Constitución; en este contexto los actores políticos deben de seguir las reglas para que la institución se consolide.
- d) “Los institucionalistas históricos argumentan que las estrategias y los objetivos de los actores buscan ser compartidos con los contextos institucionales” (Bedoya, 2009), podríamos nombrar en este caso por ejemplo la creación de organismos autónomos y descentralizados como las comisiones de derechos humanos con el fin de proteger los mismos en un paradigma constitucional que así lo exige.

2.6 Principales limitaciones del enfoque del institucionalismo histórico

Siguiendo a Cristina Zurbriggen se puede hacer una división entre dos tipos de institucionalismo: el racionalista y el culturalista, en ambos tipos se distingue diferencias en la concepción del rol del agente, así como la concepción de las propias instituciones; así mismo los enfoques metodológicos son muy distantes, ya que si bien el institucionalismo de la elección racional puede ser usado como macroenfoque en él subsiste una concepción

teórica que permea en toda investigación que se realice a través de este enfoque, ya que sin ella las relaciones causales no podrían ser establecidas.

El primer tipo de institucionalismo abarcaría la elección racional y centra su atención en el agente, concibiendo a su vez a las instituciones como producto de actos necesarios para satisfacer sus intereses o como restricciones a los mismos, por lo que el punto de partida metodológico es el individualismo, pues el individuo es el decisorio de lo que vale.

A diferencia del enfoque del institucionalismo histórico, la elección racional es una teoría que:

“Se basa en la idea de que el juego político es el resultado de la interacción de actores autónomos que persiguen sus intereses y maximizan sus preferencias, siendo al mismo tiempo capaces de determinar los medios para alcanzar dichos fines. Para los defensores de la elección racional, las instituciones son importantes en tanto son asumidas como características de los contextos estratégicos, imponiendo limitaciones en interés del propio comportamiento” (Bedoya, 2009).

Las características más sustanciales del institucionalismo de la elección racional son:

- a) Los actores políticos son conocedores y ejecutores de un cálculo racional.
- b) Las preferencias de los actores son las hipótesis.
- c) Los actores en este enfoque son racionales y a partir de ello maximizan sus propios intereses.

Dentro del institucionalismo culturalista se encuentra el institucionalismo histórico y el sociológico y parte de la idea de que las instituciones existen independientemente de los individuos, y que estos a su vez son moldeados por la racionalidad institucional en sus

intereses y preferencias y si bien las instituciones dictan las reglas del juego político las preferencias de los actores se moldean “mediante la combinación de la herencia cultural, educación y experiencia” (Bedoya, 2009).

La gran diferencia que existe entre el institucionalismo histórico y el sociológico es que para este último las instituciones son más prácticas y contienen en ellas más repertorios simbólicos, así mismo son más cambiantes en tanto que adecuarse a comportamientos sociales esperados provoca según este enfoque un aumento de legitimidad social (Caballero Míguez, 2007).

El institucionalismo histórico por su parte otorga relativa autonomía a las instituciones políticas, ya que va:

“determinando, ordenando o modificando las motivaciones individuales. Las reglas, las normas y los símbolos limitan el libre juego de la voluntad individual y del cálculo racional, y gobiernan el comportamiento político. Las decisiones políticas tienen una finalidad, dirección y pertinencia, así como un patrón histórico de desarrollo que condiciona su accionar futuro. Por esta razón, la mayoría de los estudios desde el institucionalismo histórico, otorgan un papel central al legado institucional sobre las decisiones políticas” (Bedoya, 2009).

Autores como Paul Pierson y Theda Skocpol (2008) consideran que los problemas que aborda el institucionalismo histórico frecuentemente tienen como fuente la identificación de “variaciones del mundo real previamente no explicadas, o de notar que los patrones empíricos van contra la sabiduría popular o académica” (Pierson & Skocpol, 2008), lo que tiene muchas veces como consecuencia que los temas tratados desde este tipo de enfoque sean temas tan

diversos, al grado de que puedan ser catalogados dentro de distintos tópicos impidiendo con ello la interacción regular entre aquellos científicos sociales que emplean este enfoque, ya que distintos autores dentro del mismo enfoque pueden poner énfasis por ejemplo, en la relación entre sociedad y Estado y otros en elementos constitutivos de las instituciones como las normas, reglas, símbolos, ideas, rutinas y valores. Siendo estos últimos el punto central de la investigación aquí planteada.

Otra de las limitaciones que se le encuentran a este enfoque es que al no tratarse de una teoría definida, sino de un enfoque, carece de un modelo teórico- metodológico (Farfán Mendoza), sin embargo, es gracias a esta apertura que el institucionalismo histórico es capaz de adentrarse al análisis de diversos tópicos con una visión amplia, desde la cual se pueden analizar no sólo diversos fenómenos históricos sino el proceso que se da dentro de los mismos, ya que como menciona Pierson & Skocpol (2008) a diferencia del enfoque de la elección racional, o el enfoque conductista, el institucionalismo histórico no tiene como problema:

“La obsesión con una teoría única para su propio beneficio no es la única forma en que las agendas acumulativas de investigación pueden colocarse en el lugar equivocado. [...] la captura por una técnica, o confiar demasiado en un solo tipo de dato. [Ya que si bien] como los institucionalistas históricos, los conductistas se centran en general en problemas. Pero corren el riesgo de enamorarse de las encuestas sociales y las manipulaciones estadísticas que pueden operar en las respuestas de muestras al azar” (Pierson & Skocpol, 2008).

La propia visión del institucionalismo histórico como un desarrollo histórico causal y no como “la historia de la política termina coartada y congelada en momentos artificiales”

(Pierson & Skocpol, 2008), así como el alejamiento de métodos de investigación rígidamente atados a presunciones teóricas permite a este enfoque ser plural y sinérgico como enfoque de la investigación social.

2.7 Principales modelos de análisis del institucionalismo histórico

A pesar de que bajo el enfoque del institucionalismo histórico no existe una teoría fija se han creado diversos modelos explicativos del cambio y continuidades de las instituciones. Estos modelos planteados tienen como objetivo superar muchas de las críticas que se le han hecho al institucionalismo histórico, por ejemplo, la hiperestabilidad institucional que atribuye Guy Peters al enfoque o la *trampa de la aparente inmovilidad*, ya que si bien el institucionalismo histórico se enfoca más en ver lo que es y no en la predicción de los movimientos estos modelos sirven como base para las explicaciones causales de los distintos cambios institucionales a través de la historia.

2.7.1 «Coyunturas críticas»

El primero de estos modelos es el de las «coyunturas críticas», expuesto por Ruth Berins Collier y David Collier, este modelo implica que una institución permanecerá activa hasta que una fuerza -una coyuntura crítica- desvíe su camino, es decir la coyuntura crítica es un cambio significativo el cual puede ser hipotetizado para predecir distintos legados.

Las coyunturas críticas son puntos de quiebre históricos o puntos de inflexión en los cuales se dan cambios sustanciales dentro de las instituciones, podemos hablar de «coyunturas críticas» cuando se da el derrocamiento de un régimen a través de una revolución, en la cuál a través del derecho de la guerra se conforma un nuevo régimen institucional y se dan en medio de un cambio radical del escenario político, por ejemplo los discursos expresados por

las principales figuras de la revolución mexicana que tienen como tópico común una promesa de justicia social, como refiere Cuéllar Moreno “la responsabilidad revolucionaria estribaba en la confrontación del presente con un ideal por venir de justicia social”, que tenía como columnas las garantías individuales y sociales que se establecieron en la Constitución del 17, y que en su momento fueron el reflejo de un cambio radical dentro del escenario político nacional.

2.7.2 Path dependency o path dependence

Otro de los modelos utilizado por el institucionalismo histórico para explicar los cambios institucionales es el de *path dependency* o *path dependence* cuyo expositor es Pierson, y que tiene como base las «coyunturas críticas», sin embargo, en este modelo se establece que existe una relevancia causal de las etapas anteriores a los sucesos que determinan de una manera u otra los determinados cursos de acción.

Paul Pierson, identifica al menos dos concepciones sobre *path dependence*:

“a) una “versión amplia” en la cual *path dependence* hace referencia a la relevancia causal de las etapas anteriores en una secuencia temporal. Esto significa, a grandes rasgos, que lo que ocurre en una [sic] momento anterior, este afectará en los resultados en el periodo posterior. [...]

b) la “versión estrecha” la cual plantea que: «una vez tomada una opción, los costos de revertirla son muy altos. Habrá otras opciones, pero el auto resguardo de ciertos arreglos institucionales obstruye una fácil reversión de la opción inicial» (Trigo Soto, 2016).

Como ejemplo del uso de este modelo podemos nombrar el establecimiento de la concepción de soberanía desde los proyectos constitucionales novohispanos, concepción que permitiría en un primer momento la independencia de Nueva España, y que posteriormente seguiría teniendo relevancia en la configuración política y constitucional del México libre, ya que sin *la soberanía* la conformación del Estado Nación no podría ser la que conocemos hoy en día, sin embargo, a ella se han integrado cambios, como que en la Constitución de 1917 se establezca que esta *reside esencialmente en el pueblo*.

2.7.3 Punctuated equilibrium

Este modelo está desarrollado desde una visión biologicista y evolucionista, y en él se establecen que hay transformaciones o evoluciones que no se dan de manera gradual sino que “sino más bien los procesos de transformación morfológica se presentan en periodos cortos y de convulsión, por tanto el tiempo y el modo surgen como indicadores de cambio y transformación” (Trigo Soto, 2016), en este modelo *evolución* no corresponde a *progreso* sino que sólo corresponde a un proceso de transformación institucional.

Este modelo refiere Peña (2012) tiene en cuenta tanto las fuerzas tradicionales de la política, como los cambios en la opinión y la agenda pública, así como el peso de la información que adquieren los funcionarios y que pueden llegar a acelerar el cambio, y tiene las siguientes características:

- “a) El cambio en las políticas públicas se presenta como una serie de episodios desarticulados y abruptos, separados por momentos de estabilidad;
- b) Las decisiones se toman a partir de un esquema de racionalidad limitada, donde las emociones, valores y preferencias personales juegan un papel central;

- c) La hechura de las políticas públicas es el producto de la interacción entre fuerzas que, por un lado, buscan mantener el balance y el equilibrio en el que se vive y, por el otro, intentan terminar el status quo;
- d) La interacción entre fuerzas genera una diámica [sic] “stick-slip” que puede describirse como una dinámica de atascos y patinazos;
- e) En el cambio de políticas públicas, el procesamiento que hacen los funcionarios públicos de la información que reciben es fundamental;
- f) La información, bajo este modelo, tiene dos características: es incierta en su valor y ambigua en cuanto a su interpretación; y,
- g) El cambio se presenta cuando las señales contenidas en la información proveniente del exterior son demasiados fuertes o cuando se han acumulado demasiados errores que interrumpen el equilibrio existente” (Peña, 2012).

2.8 Institucionalismo histórico y concepto de constitución

Teniendo en cuenta que el institucionalismo histórico considera que las decisiones iniciales son la fuerza inicial de las instituciones y que “lo prosiguen hasta que una fuerza política, lo suficientemente poderosa (una “coyuntura crítica”), las desvié de él” (Losada & Casas Casas, 2008, pág. 191) resulta necesario examinar con detenimiento los cambios que se han dado a la concepción de Constitución, ya que esta se puede considerar como una decisión política fundamental, en la cual se encuentra inmersa la fuerza de las instituciones del Estado que surge de ella.

Bobbio refiere que uno de los problemas que hay que analizar con respecto al Estado y al poder es el de la legitimidad del mismo, ya que no basta que el poder sea efectivo, sino que debe de ser legítimo. Teniendo en cuenta que es el Estado quien tiene el uso exclusivo de la fuerza pública, de no existir una legitimidad de su poder, no hay por ende una legitimidad de su existencia y como se mencionó anteriormente, desde finales del siglo XVIII la idea de legitimidad va unida a la Constitución y al Estado de derecho, pero a su vez asumiendo el enfoque del institucionalismo desde el cuál las instituciones “no son sólo las reglas formales, procedimientos y normas; son también convenciones sociales” (Bedoya, 2009) que adquieren racionalidad a través de los procesos de interacción de distintos agentes, hasta que “alcanzan un nivel de consolidación o institucionalización que determinan la configuración de sus percepciones y sus intereses, y el tipo de interrelaciones que se producen en ellos” (Bedoya, 2009), el análisis de lo que a través de la historia se ha conceptualizado como Constitución resulta pertinente a este estudio.

2.9 Concepto de Constitución

Manuel Aragón (2012) refiere que la idea de constitución es más antigua que su concepto, que no surge sino hasta el Siglo XVIII, puesto que desde los griegos y los romanos se puede detectar la idea de que debe “existir en toda comunidad política un conjunto de normas superiores al derecho ordinario, cuyo objeto sería preservar la continuidad de la forma de organización que rige en esa comunidad” (Aragón, 2012, pág. 109).

Sin embargo, la palabra Constitución como ya lo mencionó Schmitt, “reconoce una diversidad de sentidos” (Teoría de la Constitución, 2011, pág. 35), que representa multiplicidad de significados y diversos matices, es por ello que resulta imprescindible para esta investigación, establecer claramente a cuál concepción de Constitución nos estaremos

refiriendo, para evitar caer en equívocos que puedan llevarnos a falsear las premisas y desviar esta investigación, ya que como menciona Lasalle “la verdadera cientificidad [...] no consiste en otra cosa sino en esa *claridad* de pensamiento” (Sobre la esencia de la Constitución, 2016, pág. 42).

Autores como Kelsen y Marcic consideran a Aristóteles como el primer teórico de la Constitución, en tanto que a lo largo de sus obras, y en especial en la *Política* y en *Ética a Nicómaco*, el estagirita esboza a la constitución como forma *esencial* del Estado, dentro del que deben existir tres elementos materiales: los hombres, el territorio y una estructura sociológica basada en el tejido económico y contiene “elementos sustanciales, ético-sociales e incluso económicos” (Lucas Verdú, 1994, pág. 19).

Es a partir de la noción de *polis* como “comunidad constitucional perdurable” (Lucas Verdú, 1994) que el filósofo desarrolla su teoría sobre la constitución en la cual, la Constitución se muestra como una *forma sustancial* del Estado, es decir, en ella está el verdadero ser de la *polis*.

Para Lucas Verdú, es con Cicerón cuando se “vislumbran inicios de la desustancialización del concepto de Constitución” (Lucas Verdú, 1994), ya que a pesar de la fuerte influencia de la tradición filosófica griega, Cicerón como buen eclético, incluyó en su concepto de Constitución la doctrina jurídica clásica de Roma, aunada a una posición iusnaturalista, lo que lo llevó a concebir la Constitución como la forma jurídica de unidad, y esta perdurará si existe un equilibrio de derechos y deberes, así como que la autoridad cuente con el poder para calcular su actividad, “de modo que el pueblo posea suficiente libertad” (Lucas Verdú, 1994, pág. 19).

La constitución de los antiguos es el nombre que recibe esta reflexión sobre la política que tiene su origen en los planteamientos platónicos y mayormente aristotélicos y que recibirá continuidad por los romanos, mismos que a su vez la nutrirán de su propia tradición jurídica, y es en sí “un gran proyecto de conciliación social y política” (Fioravanti, 2011, pág. 30), proyecto que se considera de origen racional y no como una instauración forzada de los vencedores, por lo que si existía un principal enemigo para este proyecto sería la figura del tirano.

Fioravanti sostiene que a diferencia de lo que muchos afirman, durante la Edad Media sí existió una constitución medieval, y si bien durante los 10 siglos que dura la Edad Media — desde la caída de Roma en el siglo V hasta la aparición de la soberanía en el siglo XV— no existió una forma típica de poder, la pluralidad de poderes como la Iglesia o el Señor territorial, configuran con la característica de *intrínseca limitaciones de los poderes públicos* a esta constitución, la segunda característica sería la de un *orden jurídico dado*, que tiene su raíz en la concepción de derecho natural.

La constitución medieval es en sí una continuación de la constitución de los antiguos, con las características propias del derecho natural promovido por los teólogos de la Iglesia, así el orden en dado, no por los hombres, que no pueden disponer de ello, sino por Dios, y deben de basarse en su ley eterna y la ley natural.

2.9.1 Diferentes perspectivas del concepto de Constitución

En su texto, *Teoría de la Constitución*, Carl Schmitt desarrolla una diferenciación conceptual con los distintos significados y sentidos que se le pueden dar al concepto de Constitución, el jurista refiere que en un sentido absoluto podemos identificar cuatro diferentes significados.

El primer significado corresponde a la situación concreta de la unidad política y ordenamiento social, en este significado “el Estado no *tiene* una Constitución <<según la que>> se forma y funciona la voluntad estatal, sino que el Estado es Constitución [...] un status de unidad y ordenación” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 36).

En un segundo significado la Constitución es una manera espacial de ordenación política y social, significa “el modo concreto de la supra- y subordinación” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 37), es entendida como forma de gobierno.

Un tercer significado nos habla del principio del devenir dinámico de la unidad política de la “formación y erección de esta unidad desde una fuerza y energía subyacente u operante en la base” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 38).

El cuarto significado en sentido absoluto es el de la Constitución como norma de normas, “un simple deber ser” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 40), de la cual todas las leyes y normas deben de referir.

Así mismo podemos encontrar en Schmitt, dentro del sentido relativo del concepto, una acepción positivista de Constitución que hace referencia a una normativa surgida de un acto constituyente, en un único momento de decisión y “contiene sólo la determinación consciente de la concreta forma de conjunto por la cual se pronuncia o se decide la unidad política” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 58).

Para Schmitt también existe un concepto ideal de Constitución, que con frecuencia se enuncia como la “verdadera” Constitución, sin embargo son razones de tipo político, lo que hace que se le de esta designación, ya que “la terminología de la lucha política comporta el que cada

partido en lucha reconozca como verdadera Constitución sólo aquella que se corresponda con sus postulados políticos” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 75).

Respecto a las diferentes acepciones del concepto de Constitución, Riccardo Guastini (2012) distingue cuatro significados principales. El primero de estos significados proviene de la filosofía política, y refiere a “cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal” (Guastini R. , 2012, pág. 94), desde esta perspectiva la Constitución es el límite del poder político dentro de una organización política liberal y garantista.

La segunda de estas acepciones se toma de la teoría general del derecho y designa “el conjunto de normas “fundamentales” que identifican o caracterizan cualquier ordenamiento jurídico” (Guastini R. , 2012, pág. 96). El tercer significado, se da en un sentido formal, y hace referencia a “un documento normativo que tiene ese nombre” (Guastini R. , 2012, pág. 94).

La cuarta acepción de Guastini, hace referencia a “un particular texto normativo dotado de ciertas características <<formales>>, o sea, de un peculiar régimen político” (Guastini R. , 2012, pág. 94).

2.9.2 Constitución formal y Constitución material.

Para Lasalle resulta pertinente, hacer la distinción entre Constitución y ley, y refiere que si bien una “Constitución debe tener fuerza de ley, tiene que ser también una ley, [...pero] debe de ser *algo más* que la ley” (Lasalle, 2016, pág. 44), la Constitución, es para el jurista, la ley fundamental del país que debe de tener un carácter sagrado, fijo e inamovible.

Esta *ley fundamental*, nos dice Lasalle, es una fuerza activa, “la cual hace que todas las demás leyes e instituciones jurídicas aprobadas en ese país con necesidad hace que sea lo que son” (Lasalle, 2016, pág. 47) , esta fuerza activa se traduce en relaciones fácticas de poder, y comprende el aspecto material de la Constitución que “se entiende como el conjunto de fuerzas sociales y espirituales que operan dentro del Estado y que confluyen en la creación de la Constitución Formal” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 137).

Lasalle, refiere que al transcribirse estas relaciones, y dotárseles de una expresión escrita, se convierten en Derecho, en Instituciones jurídicas y esto comprende la Constitución formal, que no es sino “la declaración solemne, de forma escrita, puntualizada y formalizada [...] de las condiciones que conforman ese entramado de fuerzas que se ha llamado Constitución material” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 137).

2.9.3 Poder constituyente

Ahora bien, para comprender el inicio de cualquier sistema jurídico, resulta primordial entender que no podemos buscar una norma última *ad infinitum* sino que “debe buscarse una autoridad normativa que no recibe su poder de una norma, sino que se basa en la aceptación, en la aquiescencia o, más idealmente, en la participación de los sujetos en el ordenamiento que va a crearse” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 133).

Los actos revolucionarios con los que se han establecido diferentes Constituciones no deben de ser considerados golpes de Estado, sino el inicio de un nuevo orden jurídico vigente, que

a través del *derecho a la guerra*, logra establecer el *derecho de la guerra*, ya que como refiere Guastini “la noción de poder constituyente [...] se define, simplemente, por oposición a la de poder constituido” (Guastini R. , 2012, pág. 103), el poder constituido está regulado por normas positivas vigentes, mientras que el poder constituyente tiene la capacidad de instaurar una primera Constitución.

No hay que perder de vista que, si bien el poder constituyente surge *extra ordinem*, existen límites jurídicos del Constituyente, el orden jurídico internacional y la limitación territorial que el ámbito geográfico le marca al Estado (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008).

De igual manera resulta pertinente revisar el concepto de legitimidad con respecto al Poder Constituyente para evitar equívocos, la legitimidad de la Constitución se da a través del acto constituyente, como decisión política fundamental, en tanto que “la fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 87). En el caso mexicano en donde la *maiestas populi* domina, “la validez la Constitución descansará en la voluntad del pueblo” (Schmitt, Teoría de la Constitución, 2011, pág. 138).

Pisarrello (2014) refiere que cada proceso constituyente compone en sí una singularidad dentro de la cual se expresa un grado de insatisfacción con el orden vigente , sin embargo las situaciones por las que pueden instaurarse los procesos constituyentes son muy variadas, pero su inicio tiene a coincidir con la convocatoria de la asamblea o congreso constituyente y el cierre de este fenómeno se da con la promulgación constitucional, sin embargo, no todos estos procesos culminan en cambios paradigmáticos dentro del texto constitucional, ya que

muchas veces sólo se trata de neutralizar fuerzas que se oponen o apoyan ciertos cambios o con la inclusión de normas de tipo más garantistas dentro del texto constitucional vigente.

2.9.4 Clasificación de las Constituciones.

Karl Lowestein realiza una clasificación de las Constituciones conocida como *ontológica*, y en ella clasifica a las Constituciones en nominales, normativas y semánticas; la escala propuesta por Lowestein hace referencia a la relación entre la Constitución formal y la Constitución real; donde la primera como menciona Lasalle, es sólo un trozo de papel que mantiene la capacidad regulatoria del Estado en medida de sus fuerzas reales, mientras que la segunda -la constitución real- a la que en la realidad tiene un poder.

Las constituciones nominales se encuentran “en aquellos estados en los que el constitucionalismo [...] se ha implantado sin una previa incubación espiritual o madurez política” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 200), que si bien es válida, carece de existencia en la realidad, “pues no regula de modo efectivo el proceso político” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 200) y le confiere una función educativa con miras a convertirse en el futuro en una Constitución Normativa.

Las constituciones normativas son aquellas donde su validez se extiende a la existencia, y sus normas “dominan el proceso político, o a la inversa, el proceso del poder se adapta a las normas de la Constitución y se somete a ellas” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 200), para que este tipo de constitución pueda existir es necesario que esté integrada a la sociedad, ya que debe ser observada por los destinatarios y detentores del poder.

Las Constituciones semánticas son instrumentos para estabilizar a los dominadores fácticos del poder político, ya que “formaliza una situación de poder político en beneficio exclusivo de los que disponen del aparato coactivo del Estado” (Cárdenas Gracia, 1998, pág. 93).

2.9.5 Constitucionalismo

Manuel Aragón refiere que en un sentido amplio se “podría entender la teoría o la práctica del Estado Constitucional” (2012, pág. 114), entendiendo que un gobierno constitucional es aquel en donde existen limitaciones efectivas de poder, el constitucionalismo es “limitación de la actividad gubernamental por medio del Derecho” (Aragón, 2012, pág. 114), ya que como Miguel Carbonell refiere “la fuentes del derecho y las normas sobre la producción jurídica se recogen en la Constitución, y lo mismo puede decirse de las formas del Estado y del gobierno, de la división de poderes, del federalismo, del presidencialismo, etcétera” (Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 129).

El constitucionalismo es pues teoría y práctica en donde se requiere de los instrumentos jurídicos que garanticen la aplicación de la Constitución, una cultura constitucional que obligue a su perpetuación y una actitud en el modo de hacer política, ya que “difícilmente podrá haber Estado Constitucional sin una constitucionalización de la política y, específicamente, de la política profesional” (Aragón, 2012, pág. 118).

Carbonell refiere que no puede olvidarse “que lo que la Constitución significa hoy en día y el papel que desempeña tanto en el sistema jurídico como, más en general, dentro del entramado de relaciones sociales de muchos Estados es el resultado de una serie de acontecimientos históricos que han ido decantando las concepciones originales y que, a través de no pocos retrocesos y altibajos, han configurado aquello que entendemos actualmente por Constitución,” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en

México, 2008, pág. 131). El Estado no es un ente estático, sino que se ve modificado por los actos que se gestan en él, y la Constitución como derecho positivo, “no es solamente norma, sino también realidad [...] en la cual el sistema constitucional se completa y se transforma a sí mismo” (Neves, 2015, pág. 90).

2.9.6 La constitución como institución

Vallès & Martí i Puig (2015) consideran que las Constituciones funcionan como un marco de relación en el cual se establecen las reglas del juego de las instituciones que componen el Estado, ya que en ellas se establece primeramente la configuración de cada una de las instituciones “de que elementoss componen, cómo actuan, con qué recursos cuentan, quién las gestiona” (Vallès & Martí i Puig, 2015, pág. 165), así como las relaciones entre ellas y cómo se da la relación de las mismas como el ciudadano, haciendo referencia a cómo estos participan de ellas y con ellas.

Sin embargo autores como Cea Egaña (1997) señalan qu desde otro punto de vista, las Constituciones pueden ser consideradas como instituciones en sí mismas debido a que las instituciones estan caracterizadas por:

1. El elevado nivel de autonomía.
2. El tiempo de existencia prolongado.
3. Su cohesión o internalización “en términos de ideales, objetivos, métodos y recursos compartidos” (Cea Egaña, 1997).
4. El cumplimiento eficiente y eficaz de los propósitos de la institución.

Las Constituciones cumplen con estas características y pueden ser pensadas como instituciones “legítimas y perdurables del ejercicio, control y responsabilidad del poder en el

Estado Nación” (Cea Egaña, 1997), que requieren de la legitimidad para ser fuertes y respetadas, “porque gobernantes y gobernados sin excepción significativa, se identifican con ella, más en su *telos* o espíritu que en su letra o contexto” (Cea Egaña, 1997).

Teniendo en cuenta que:

“La constante confrontación entre las demandas ciudadanas, por una parte, y las decisiones emanadas del poder público, por la otra, tienden a buscar algún arreglo, que termina resultando en una negociación entre ambas partes, negociación convertida en acuerdo político”

El análisis de institucionalismo histórico permite conocer cómo a través de la historia constitucional mexicana se ha ido conformando el entramado institucional que tiene como norma superior a la constitución.

Históricamente como menciona García García (2013)

“La institucionalización del Estado mexicano, formalmente fue coronada por la Constitución de 1824, y a partir de ahí hasta nuestros días la interacción entre la lucha social, decisiones políticas y propuestas institucionales, en constante ensayo error, ha sido la dinámica de la construcción del Estado Mexicano como el sustento del constitucionalismo, y al mismo tiempo, el tipo de Estado ha sido sustento de la dinámica institucional de cada momento histórico plasmado en sus Constitucionales y reformas” (García García, 2013, pág. 6).

Los cambios que se han gestado a partir de esta institucionalización pueden ser rastreados por medio del institucionalismo histórico para comprender no sólo cuáles han sido las coyunturas críticas a las que se han enfrentado las sociedades, el entramado político y las

constituciones, sino que permite a la par comprender la evolución de las mismas, y la dependencia de camino «path dependency» que se mantiene a lo largo de toda la historia constitucional mexicana, ya que la misma no puede ser analizada como eventos separados en donde cada constitución existente en México haya sido un evento desconectado de los que le precedieron y de los que le seguirán, incluso visto desde el punto de la reforma constitucional.

2.10 Conclusión

Para efectos conceptuales de esta investigación retomaremos “el «concepto positivo de Constitución» de Schmitt [que] puede encajar en el modelo axiológico de Constitución como orden, lo mismo puede decirse, [...] del concepto de «Constitución material» elaborado por Constantino Mortati,” (Comanducci, 2012, pág. 130) al encontrarse tras estos dos conceptos una decisión política fundamental.

Constitución será para los fines de esta investigación “una categoría normativa que constituye el criterio supremo de carácter axiológico con el cual se califica la legitimidad de las normas positivas del ordenamiento jurídico” (Ortega García, El modelo constitucional de derechos humanos en México, 2015, pág. 63).

El enfoque del institucionalismo histórico resultará necesario no sólo dentro del cuerpo de este primer capítulo para comprender los cambios y evolución del concepto teórico de constitución, sino que será el enfoque que cubrirá toda la investigación, ya que para poder llegar a comprender el fenómeno aquí planteado, es necesario en un primer momento conocer cuál ha sido la evolución teórica de la axiología, así como la evolución que se ha dado dentro de la historia de las ideas que componen la historia constitucional mexicana y como se han

ido incorporando en ellas la noción de valores hasta llegar a la escala de valores presente en la Constitución vigente.

Como menciona Carbonell, siguiendo a Schneider, “toda Constitución incorpora, en alguna medida, un ingrediente utópico, que sirve de marco de referencia de lo que una sociedad entiende como deseable para sí misma en el futuro” (Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, 2008, pág. 138), y es en este componente utópico existente en la Constitución, en su deber ser, donde la axiología se presenta como un camino para entender cuáles son los valores presentes en ella, pero antes de esta labor debemos preguntarnos por la naturaleza de la axiología y su relación con el derecho, en el marco de su operatividad y de sus alcances.

Ya que como señala Michael Núñez, “el ordenamiento jurídico-constitucional es una estructura que contiene los valores que la sociedad estima como buenos, a través de articulaciones normativas e institucionales, [...] las inspira la misma ratio, una razón de ser y se fundamentan axiológicamente” (Núñez Torres, 2006, pág. 109), por lo que, sólo teniendo clara la base teórica desde la que partimos, que no es sino la Teoría del Valor y en específico a través del uso de la Teoría de la Tiranía del Valor, no podremos comprender ni los alcances ni las implicaciones de esta axiología a la configuración de una ética pública.

3. Axiología Jurídica

La palabra axiología encuentra su etimología en el griego *ἀξιος* que significa 'valioso' y *λόγος* que significa 'tratado', también conocida como la teoría de los valores, la axiología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello en lo que depositamos la característica de valioso, es decir, en lo que es un valor.

Una de las discusiones que existen con respecto a la cuestión de la etimología de la palabra axiología refiere a que a pesar de uso del griego *ἀξιος* para nombrar a esta rama de la filosofía, el término del que hay que valerse para entender la concepción de valor debe de ser el del vocablo latino *valeo*, que se encuentra en distintos textos relativos a diversas ramas del pensamiento “distribuido como virtud, ser fuerte, vigoroso”.

Esta rama de la filosofía tiene como característica una doble naturaleza, en el sentido de que es tanto teórica como práctica, ya que hablar de valores supone no sólo la abstracción de conceptos, sino su aplicabilidad en el mundo tangible.

Si bien el concepto de axiología es de aparición reciente, pues aparece en 1902 en la obra *Lógica de la Voluntad* de Paul Lapie y en 1909 en la obra de *Axiologie in Umlauf* de Von Hartmann, la reflexión filosófica alrededor de los valores puede ser rastreada hasta la Antigua Grecia.

3.1 Concepto de valor

La concepción de valor ha cambiado conforme a las épocas y tiene diversas interpretaciones que dependen del autor que esté hablando de los valores, por tanto es una expresión equívoca en tanto que se emplea de manera indistinta, y como lo mencionamos anteriormente, resulta

equivoca sobre todo si se toma la concepción de ἄξιος, entendido como lo valioso cualquier cosa o persona puede poseer tal cualidad, ya que como nos dice Ruíz Rodríguez:

“cuando se trata del precio de una mercancía, se pregunta cuánto vale, dándole al respecto un significado meramente económico; en el mismo tono se habla de la bolsa de valores o, también, cuando se dice que una obra de arte es de gran valor o valiosa, o que ciertas acciones son valiosas, o que el hombre es valiente porque tiene mucho valor” (Ruiz Rodríguez, 2012, pág. 158).

Sin embargo, en la antigüedad con los griegos, cuando se hablaba de *valor* o de lo valioso, se hacía referencia a lo bueno, es decir al valor entendido en un sentido moral, ya que “lo «bueno» era considerado como la absoluta unidad de lo moralmente valioso en general” (Hartmann, 2011, pág. 85).

Platón tenía un lugar especial para las virtudes en su Teoría de las Ideas, ya que estas pertenecían a “los bienes que anhelamos tanto por sí mismos como por lo que de ellos se genera” (Platón, 2008, pág. 358a). Platón identificaba además, cuatro virtudes de las cuales todas las demás eran hermanas; la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, características que debía de poseer el hombre para ser un buen ciudadano y lograr vivir bien.

Aristóteles parte de la concepción de bien para desarrollar sus reflexiones en torno a las virtudes. El estagirita consideraba que “la virtud no es más que una facultad del alma” (Aristóteles, 2004, pág. 23) y vivir según piden las virtudes consiste en la felicidad. La virtud

en Aristóteles constituye un modo de ser que es la representación del término medio entre el exceso y el defecto.

Autores medievales, en específico Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona continuaron con las concepciones cristianizadas de Aristóteles y Platón respectivamente en cuanto a la concepción de los valores o virtudes.

San Agustín, siguiendo la línea platónica, “que [le insinuó] la búsqueda de la verdad incorpórea” (Hipona, 2010, pág. 230) consideraba que la virtud “es aquello por lo que se vive rectamente”, y representa esta un reflejo de Dios, en tanto que él es la única Verdad y Felicidad.

Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles busca la superación del concepto socrático de virtud y “en línea homogénea con el pensamiento bíblico-patristico, da prioridad virtuosa a la virtud moral o ética” (Rodriguez, 2006, pág. 417) y entiende por virtud un hábito operativo “por el que se vive correctamente” (Aquino, 2005, pág. 425).

En el Renacimiento, el humanismo situó al hombre en el centro de todo estudio, y “estableció la concordia entre la cultura clásica y el cristianismo” (Santidrián, 2007, pág. 15), el valor más alto en ese momento fue el hombre y su dignidad, como se puede apreciar a través de las lecturas de Pico de la Mirandolla en su *Discurso sobre la dignidad de hombre*, que pone en el centro de cualquier valorización al hombre como componente esencial e intérprete de la naturaleza, ya que considera que el hombre tiene un lugar destacado en la estructura creada por *Dios arquitecto*, porque el hombre es:

“familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas; que por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la

luz del intelecto, es interprete de la naturaleza” (Pico della Mirandola, 2009, pág. 11).

Kant en el siglo XVIII, en su obra *La fundamentación metafísica de las costumbres* desarrolla la idea de que “la única cosa que siempre tiene valor incondicional es una buena voluntad” (Korsgaard C. M., 2011, pág. 449), que debe de regirse por lo que conocemos como el imperativo categórico que establece “obra sólo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal” (Kant, *La metafísica de las Costumbres*, 2012, págs. 31-32); en este imperativo radica su formalismo ético y axiológico, en tanto el imperativo categórico es una ley estrictamente formal, que se rige por la razón y es “un test de la suficiencia de las razones de acción y elección que están incorporadas en nuestras máximas” (Korsgaard C. M., 2011, pág. 176)

A finales del siglo XVIII y en paralelo al desarrollo de la Economía Política, se da lugar a teorías del valor como la de Adam Smith o Marx, que giran en torno a las categorías económicas, haciendo la dualidad de uso-valor de cambio el tema central de estas teorías

Así en el Siglo XIX encontramos una dicotomía en el uso del concepto de valor “principalmente de dos modos, uno el categorial en la acepción de valor como variable (matemáticas, lingüística, medicina, biología, &c) y otro como idea o supuesto que vendrá de Kant (el valor absoluto de las personas) en las categorías llamadas humanas”.

Además de la dicotomía en el concepto de valor, el siglo XIX se plantea como un parteaguas en la concepción de los mismos, y es necesario detenernos y plantear la concepción de valor que llegó a modificar Nietzsche con la introducción del nihilismo y las transvaloración de

todos los valores, ya que para este autor “«valor» es esencialmente el punto de vista para el aumento o disminución de esos centros de dominio” (Heidegger, 2017, pág. 607).

Nietzsche consideraba que los valores superiores estaban encarnados por el cristianismo habían caído -no podemos olvidar su famosa frase “Dios ha muerto”- y esta transformación “que se halla detrás de la <<desvalorización>> de los valores supremos válidos hasta el momento se muestra en que es necesario un *nuevo principio de la posición de valores*” (Heidegger, 2017).

Para Nietzsche, según Heidegger, esta desvalorización es una destitución consiente por lo cual se requiere que los valores y las posiciones que se vayan a configurar con ellos tenga su origen “en un estado de conciencia nuevo y más elevado” (Heidegger, 2017, pág. 592).

Ruiz Rodríguez menciona que “muchos filósofos al abordar el tema de los valores no han resistido la tentación de formular una jerarquía o escala de los mismos” (Ruiz Rodríguez, 2012, pág. 167), pero si se tienen en cuenta los cambios en la concepción de valor introducidos por Nietzsche en su teoría, resulta un paso obvio y necesario que en las siguientes concepciones de valor, donde ya no existe un grupo de valores supremos y es tarea de cada filosofía atribuir significado a este espacio en blanco que ha quedado tras el abandono consciente de estos valores, se debe establecer también las relaciones propias de cada valor con el otro, de ahí que las escalas de valor o jerarquía de los valores no se traten de “una tentación” sino de una necesidad para establecer un modelo axiológico y por ende ético de la realidad.

Max Scheler

Tras los grandes cambios postulados por Nietzsche, Max Scheler en el siglo XX de la mano de una concepción fenomenológica de la ética y de los valores revoluciona las teorías de valor al considerar que estos son cualidad *a priori* de los bienes. Para Max Scheler, la esfera de la voluntad del hombre siempre va de la mano de la realización de los valores y hay una conexión de ellos entre “lo bueno” y lo “malo”, por lo que para este autor existe la posibilidad de una *Ética material*, empírica e inductiva y como los valores para él son cualidades de valor, estos tienen relaciones y conexiones más altas o bajas entre sí, dando lugar a la jerarquía de valores.

La ética de Scheler nos dice Frondizi “nace del deseo de continuar la ética kantiana, aunque superando su formalismo racionalista” (2015, pág. 113) a través de una ética material de los valores y un apriorismo emotivo, donde los valores son independientes de sus depositarios.

A comparación de Platón donde la captación de los valores se da en el intelectualismo, para Scheler la captación de valores se dará a través de *la lógica del corazón*, es decir la razón no tiene un papel primordial en la captación de los valores y es por vía emocional el medio de percepción, ya que “los valores constituyen un tipo de objeto completamente inaccesible a la razón. El racionalismo, tanto griego como moderno, los tuvo relegados a un plano inferior o pretendió asimilar a los entes de razón” (Frondizi, 2015, pág. 128).

Para Scheler, el amar o el odiar “forman la parte superior [de lo que él llama] nuestra vida emocional intencional” (Scheler, *Ética*, 2001) ya que para él la percepción de los valores no está exteriormente unida a un objeto de manera fortuita y mecánica, sino es el sentimiento el que se dirige al valor.

Nicolai Hartmann

Hartmann lector de Kant, Scheler, Platón, Aristóteles y Nietzsche, comenzó a desarrollar su propia teoría del valor, continuando con algunas de las concepciones schelerianas y rectificando otras; para él, el gran acierto de la ética material del valor es que logra unificar “dos líneas de pensamiento que parecía incompatibles entre sí: el apriorismo kantiano y las visiones nietzscheanas del universo del valor” (Hartmann, 2011, pág. 31), ya que esta ética del valor evitaba caer en el formalismo kantiano y en el marcado relativismo de la doctrina nietzscheana. Y como señala Javier Palacios “consigue una unificación de mayor alcance: consigue fundir en una sola la ética antigua con la moderna” (Hartmann, 2011, pág. 31).

Hartmann considera que los valores son esencias axiológicas que tienen representación del *ser ideal* y al igual que Scheler busca la concreción de una ética material del valor, sin embargo, a diferencia de este último, Hartmann plantea una antropología de la persona, donde ésta es el centro de la realización de los valores en el mundo.

Y si bien comparte con Scheler la noción, en la cual los actos de la vida emocional son lo que nos acerca al conocimiento de los valores, Hartmann

“subrayará el carácter enteramente apriorico del conocimiento del valor. A su juicio, no es de la experiencia sentimental de los bienes de donde extraemos el conocimiento de sus cualidades de valor y finalmente el de las esencias de estas últimas, sino, a la inversa, es preciso tener un previo acceso emocional a las esencias axiológicas” (Hartmann, 2011, pág. 28).

Dietrich Von Hildebrand

Hildebrand por su parte contribuye a la discusión filosófica entorno a los valores estableciendo una actitud apegada al socratismo-platonismo, en tanto que “el conocer los

valores es el fundamento de la virtud” (Von Hildebrand, 2006, pág. 20), así pues establece que los valores son objeto de conocimiento, pero también señala que este conocimiento de los valores se da en una categoría diferente al de la razón, que “se halla presidida por la evidencia de que la percepción de los valores, por infundada y diversa para unos y otros que pueda ser, es un dato tan originario e irreducible de la conciencia humana” (Von Hildebrand, 2006, pág. 12), esta percepción se da a través de una captación intuitiva de la conciencia “entre sentir el valor y ver el valor”, que para Hildebrand es un “genuino aprehender cognoscitivo” (Von Hildebrand, 2006, pág. 199).

Con respecto a los valores Hildebrand identifica tres categorías de importancia, que repercutirá en la cuestión de la escala de valor que él mismo establece, ya que considera que “la comprensión del valor fundamental condiciona con ello la de los otros valores” (Von Hildebrand, 2006, pág. 136). Las tres categorías de valor son:

- Los que produce satisfacción meramente subjetiva
- La de lo que es importante en sí mismo
- Lo objetivamente bueno.

Valoración de los valores

Como ya hemos revisado en las diferentes concepciones de valor, “el término valor depende fuertemente de su trasfondo teórico y su uso puede ser equivoco” (Piechowiak, 2017, pág. 670), y junto a su concepción, aparece también el concepto de valorización, que hace referencia a la acción de valorar.

Para Salazar Bondy (2010), la valorización supone la operación de un juicio preferencial que esquematiza de la siguiente manera:

- “1. La conciencia de determinadas propiedades comunes a ambos objetos, las cuales proporcionan la base de la comparación.
2. La referencia a una constelación de propiedades selectivamente consignadas en el patrón de valorización.
3. La determinación de las diferencias que ofrecen los objetos desde el punto de vista de sus propiedades.
4. La correspondencia fáctico-axiológica del caso” (Salazar Bondy, 2010, pág. 81).

En el aspecto jurídico Piechowiak, siguiendo a Ziembinski menciona que “los actos de valoración más importantes para la vida social y para el derecho [...] no son los actos de valoración individuales sino aquellos que son disposiciones realmente persistentes en el tiempo” (Piechowiak, 2017, pág. 669).

3.2 Axiología jurídica

La axiología jurídica es la rama de la filosofía del derecho encargada del análisis de los valores dentro del Derecho, “tiene por objeto responder a la pregunta acerca de cuáles son los valores reconocidos directa o indirectamente en el sistema jurídico” (Piechowiak, 2017, pág. 657).

Para este apartado debemos de tomar en cuenta que “el valor, en el sentido que aquí nos interesa, es un bien final, un fin en sí mismo que se encuentra ante nosotros como una meta que pide ser alcanzada mediante actividades orientadas teleológicamente. El valor, “debe de valer”, y por eso contiene una autorización de acción [...]” (Cervantes Andrade, 2016, pág. 160).

3.3 Justificación axiológica de las normas

Piechowiak refiere que “Justificar una norma es dar razones para reconocer una norma como válida” (Piechowiak, 2017, pág. 664), existen dos vertientes en las justificaciones de las normas como veremos a continuación, la primera es la justificación tética que se da

“Cuando [...] la norma N ha sido establecida y que ese acto de establecerla una vez realizado no ha sido abrogado por alguna persona que es una autoridad respecto de los destinatarios de esta norma”
(Piechowiak, 2017, pág. 665)

La justificación axiológica de las normas jurídicas es aquella que se da cuando

“a la luz de las valoraciones aceptadas por alguien, las conductas ordenadas por estas normas son reconocidas como buenas y las conductas prohibidas como males o -lo que es más común- las consecuencias esperadas se consideran que serán malas o buenas desde algún punto de vista a la luz de las valoraciones aceptadas por alguien” (Piechowiak, 2017, pág. 667)

Debemos de tener en cuenta que si bien hay una diferencia entre ambas justificaciones, no son de ninguna manera excluyentes, es decir, existen o pueden existir casos donde las normas tengan una justificación tética y axiológica al mismo tiempo, por ejemplo, en 1978 aparece por primera vez en un documento constitucional la alusión a los valores fuera del uso

económico del vocablo que ya estaba en uso en la Constitución de Weimar, ya que en el Artículo 1, punto 1 de la Constitución española de 1978 se marcaba que:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Constitución Española de 1978, s.f.).

En este ejemplo podemos observar que la Constitución Española tenía una justificación tética en tanto que estaba promulgada por un poder constituyente, el cual tenía la autoridad para dotarla de validez, como al mismo tiempo, contaba con una justificación axiológica, en ella explicita hacia ciertos valores que constituyeron los principios que en ella se debía de seguir, pues como menciona Zaglebesky “en abstracto, puede decirse que no hay regla que no responda a un principio y que no hay principio que no tenga un contenido de valor” (Cervantes Andrade, 2016, pág. 163).

3.4 Posturas en la axiología jurídica

“La meta-axiología del Derecho, que es una parte de la axiología del derecho en sentido amplio, trata con cuestiones relativas a la ontología y a la epistemología de los valores” (Piechowiak, 2017, pág. 657) es decir, esta parte de la axiología es la que trata de responder cómo es que existen los valores y si tenemos la posibilidad de conocimiento cuando estos están o no implícitos en el sistema jurídico y son relevantes, no sólo como menciona Piechowiak para la interpretación jurídica, *sino que son importantes para todo el desarrollo jurídico- político de un Estado.*

Las controversias que existen al aprehender los valores entre las diversas posturas como lo son el realismo y el anti-realismo y el cognoscitivismo y no cognoscitivismo sobre los valores

determina los modos en los que se establece los procedimientos que deben de seguir las normas que los contengan o no los contengan.

Existen cuatro grandes posturas con lo que respecta a la respuesta de esta pregunta, y se configuran entre sí, sin embargo Piechowiak considera que “desde un punto de vista práctico, en el terreno de la investigación jurídica podemos aceptar que hay una correlación entre el realismo y el cognoscitivismo, por un lado, y entre el anti-realismo y el no-cognoscitivismo, por el otro” (Piechowiak, 2017, pág. 658).

Teniendo en cuenta lo anterior, nos dedicaremos a esclarecer las diferencias entre estas posturas el cognoscitivismo y no-cognoscitivismo axiológico, ya que como hemos dicho anteriormente, la posibilidad de aprehender o no los valores resulta determinante de las consecuencias teóricas y prácticas que se desprenden de ellos.

El no-cognoscitivismo axiológico supone la incapacidad del hombre de conocer los valores y las relaciones de los mismos con la realidad, en esta concepción “ninguna valoración y ninguna preferencia valorativa puede ser verdadera o falsa, ni puede informar acerca de la realidad” (Piechowiak, 2017, pág. 655) en esta posición se sitúan los positivistas lógicos y los filósofos oxonianos.

Leo Strauss explica que desde el positivismo de la ciencia social, cuyo mayor representante encuentra es Max Weber, el rechazo a los juicios de valor entre diferentes valores o sistemas de valores se debe a que se considera que los mismos “son irresolubles para la razón humana” (Strauss, 2014, pág. 99), ya que su comprobación supondría un esfuerzo semejante a la elaboración de la *Crítica de la razón pura*, “exigiría una crítica a la razón valorativa” (Strauss, 2014, pág. 99), pero, que considerar “la creencia según la cual los juicios de valor

no están sujetos, en última instancia, a un control racional, alienta la propensión a realizar afirmaciones irresponsables acerca de lo correcto y lo incorrecto o lo bueno y lo malo” (Strauss, 2014, pág. 99).

Al contrario del no-cognoscitismo, el cognoscitismo axiológico consideran que sí existe la posibilidad de conocer qué son los valores y cuáles son sus relaciones con la realidad, y por lo tanto el anuncio que podamos hacer de los valores y sus relaciones puede ser verdadera o falsa, es decir se encuentran dentro del ámbito del conocimiento humano.

Siguiendo a Adela Cortina es importante precisar que en la actualidad el no-cognoscitismo y el cognoscitismo no pueden sólo tratar de aceptar la valoración como verdadera o falsa, sino que se involucra en estas concepciones la capacidad de argumentar racionalmente sobre la corrección de las normas, ya que después de Kant muchas de las concepciones, si bien no aceptan la posibilidad de valorar como verdaderos o falsos los enunciados axiológicos, sí toman en cuenta “la validez de una norma (su corrección racionalmente argumentable) y la vigencia de la misma (su consideración como vinculante para los sujetos morales)” (Cortina, 2008, pág. 108), y dado que estas cuestiones pueden considerarse parte de un saber práctico, son propias del cognoscitismo.

3.5 Escalas de valor

Ahora bien, como establecimos anteriormente, tras la conceptualización nietzscheana de los valores, resultó imprescindible para las teorías del valor posteriores establecer escalas de valor que permitieran conocer y comprender las relaciones y características de las relaciones entre los valores propuestos. Así mismo, no podemos olvidar que estas nuevas posturas referentes a qué era un valor nos obligan también a analizar y establecer las características propias de los valores. Como menciona Heidegger:

“El principio de una nueva posición de valores solo puede imponerse si se despierta y extiende un nuevo saber sobre la esencia de los valores y sobre las condiciones de la estimación de valor. La transvalorización de todos los valores válidos hasta el momento tiene que ejercerse y erigirse desde el estado de conciencia sumo de una conciencia propia de la esencia y de la posición de valores” (Heidegger, 2017, págs. 592-593).

Por su parte, Max Scheler consideró con respecto a las escalas de valor que “las relaciones más importantes y fundamentales entre las aprioricas consisten en una ordenación jerárquica entre los sistemas de cualidades de los valores materiales, que nosotros llamamos *modalidades de los valores*, y forman el auténtico *a priori material* para nuestra intuición de valores y preferencias” (Scheler, *Ética*, 2001, pág. 173), sin embargo el filósofo hace la especificación de que la clasificación más elevada en tanto esta se hace por las relaciones entre la esencia de los valores ha de ser independiente de lo que se percibe sentimentalmente del valor.

Para Hartmann hay una presuposición tácita de la idea de una jerarquización existente en lo que él llama “el reino del valor”, ya que sin este presupuesto resulta imposible hablar de las relaciones del valor, jerarquía que “sólo puede ponerse de manifiesto en el análisis del valor” (Hartmann, 2011, pág. 307). En este punto es importante recordar que Hartmann escribió sobre ontología y en su concepción ontológica y ética se premia el mismo principio, las relaciones son articulaciones absolutas, que en la cuestión de los valores, “trata de una articulación absoluta sobradel reino ético del valor, tanto de los objetos o situaciones objetivas como también de las personas y de sus conductas” (Hartmann, 2011, pág. 307).

Preocupado ya, no sólo por las concepciones éticas de los valores, Carl Schmitt, se adentró a la problemática del valor y las jerarquías que en esta se daban, ya que consideraba que tenían una repercusión en las concepciones jurídico-políticas que de la teoría del valor surgían, y consideraba que si bien:

“Max Scheler erigió un ordenamiento ascendente los valores según niveles, que va desde lo útil hasta lo santo. Nicolai Hartmann construyó el sistema de la conexión objetiva de un mundo real en estratos, de los cuales el más bajo sería inorgánico y el más elevado el espiritual. Pero sean los valores tan elevados o santos como se quiera, sólo valen como valores para algo o para alguien” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, pág. 137).

Schmitt plantea así uno de los grandes problemas a los que se ha de enfrentar la axiología. En este paradigma, donde no hay valores supremos inamovibles, existe la posibilidad de que cada valor, establezca sus escalas de valor y “el impulso hacia la validez del valor es irresistible y la contienda de quienes valora, desvalorizan, valorizan y ponen en valor, inevitable” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, pág. 138).

Teniendo en cuenta que para Schmitt una de las principales características de las jerarquías de valor, es en primer lugar una escala ordenada y subordinada entre los niveles que la componen, es decir, siempre existirá un valor que tenga una posición predominante sobre los demás y por lo tanto “el valor más elevado tiene el derecho y el deber de someter al valor más bajo y el valor como tal aniquila con derecho al no valor como tal” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012).

Siguiendo las reflexiones hartmannianas hasta cierto punto, pero dejando de lado el planteamiento ontológico del mismo donde las escalas de valor tienen esta cualidad orgánica en la que todo

está conectado y funciona entre sí, Carl Schmitt presenta la teoría del valor, conocida como La Tiranía del Valor; Schmitt establece que el valor que se encuentre en el rango más alto de la escala de valor, se convertirá en el ethos de una persona, logrando que todos los demás valores tengan que someterse al mismo.

A raíz de esta concepción comienzan a surgir con más fuerza críticas hacia la teoría del valor y la búsqueda de soluciones sobre esta problemática, especialmente en la esfera jurídica, debido a que Schmitt plantea:

“un jurista que se ventura a ejecutar valores de manera inmediata debería saber lo que hace. Debería de reflexionar sobre la procedencia y estructura de los valores y no permitirse tomar a la ligera el problema de la tiranía de los valores y de la ejecución no medida del valor. Tendría que tener en claro la filosofía moderna del valor antes de decidirse a valorar, transvalorar, valorizar y desvalorizar; y, en cuanto sujeto portador de valores y sensible a ellos, tendría que tener en claro la filosofía moderna de valor antes de dictaminar la posición de un orden jerárquico de valores subjetivos u objetivos bajo la forma de sentencias con fuerza legal” (*Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, pág. 147*).

3.6 Axiología como marco de la ética/ Deber ser y Justicia

Entendemos por ética, la rama de la filosofía que se encarga de las preguntas sobre el *deber ser*, es decir, la ética busca establecer cuáles son los parámetros de lo que es correcto e

incorrecto. Al igual que en la axiología podemos encontrar posturas no-cognoscitivistas de la ética, sin embargo, en este trabajo aceptamos como premisa, que efectivamente podemos conocer las cualidades del deber ser y también podemos argumentar a favor o en contra de ellas, posicionándonos así en una postura cognoscitivista de la ética.

Desde esta postura, la axiología está estrechamente relacionada con la ética, ya que configura parte fundamental de su contenido debido a que “valor y deber ser ideal van juntos indisolublemente. No por eso son idénticos. El deber ser significa dirección hacia algo; el valor, el algo mismo al que apunta la dirección” (Hartmann, 2011, pág. 210).

Por tanto, esta perspectiva resulta indisoluble el vínculo entre ambos y se debe de tener claro que cualquier planteamiento axiológico que se lleve a cabo tendrá sendas consecuencias e impacto en el campo de la ética, ya que como menciona Hartmann

“El mundo ético real no es únicamente el mundo del sujeto moral con sus actos; también es el mundo de las creaciones vivas de ese sujeto moral y de su crear fecundo. Pues el sujeto no está sólo, no existe de ninguna manera como sujeto aislado. Y toda la comunidad ya lleva consigo formaciones que han sido creadas bajo los puntos de vista del valor- desde las efímeras situaciones momentáneas hasta las formas comunes y duraderas de vida, desde la más personal relación sentimental hasta la vida histórica genuina de las naciones y de su ser comunitario”
(Hartmann, 2011, pág. 205).

3.7 Conclusiones del capítulo

Si bien la axiología entendida en su sentido más amplio es un terreno fértil en el cual problematizar, no sólo del contenido de los valores sino de los métodos que tiene a su disposición las demostraciones de los mismos, para efectos prácticos de esta investigación que tiene como finalidad conocer cuáles son los valores contenidos en la Constitución de 1917 resulta pertinente establecer la postura desde la cual se realizará este acercamiento.

De esta manera adoptamos una postura cognoscitivista, ya que consideramos que efectivamente podemos conocer los valores y acceder a ellos a través de la razón y la interpretación, y entenderemos a su vez a “las valoraciones [como...] actos de carácter epistémico” (Piechowiak, 2017, pág. 671), resultado en el caso específico de esta investigación del acto constituyente por el cual se promulgó la Carta Magna.

Así mismo, consideramos que el contenido axiológico de las normas está presente en las mismas, y nos adherimos a la consideración de Marcelo Neves, donde dentro de la legislación simbólica hay una confirmación de los valores sociales y ella puede implicar “«gestos de cohesión» en la medida que haya una aparente identificación de la «sociedad nacional» con los valores legislativamente corroborados, como en el caso de principios de «autenticidad»”.

También consideramos que para el presente trabajo es necesario establecer las relaciones dentro de una escala de valor y que será necesario tener en cuenta la conceptualización schmittiana sobre la tiranía del valor al momento de la revisión de documentos jurídicos como es la Constitución, ya que como ha quedado establecido en el capítulo, la relación entre axiología y ética tiene fuertes implicaciones en la cuestión del *deber ser* y la misma debe de ser tomada en cuenta en todo el proceso valorativo.

Inicio del

4. Recorrido histórico: la Constitución en México.

4. Recorrido histórico: la Constitución en México.

Una de las características del pensamiento novohispano, y del pensamiento hispanoamericano refiere Ambrosio Velasco (2009), es en general su carácter práctico, si bien se incluye en él la reflexión axiológicamente comprometida, la filosofía hispanoamericana es de carácter, sobre todo en su aspecto político ideológico, una filosofía del actuar.

Para lograr entender, la transformaciones sociales, políticas y jurídicas que hemos vivido como sociedad en México, resulta sumamente importante entender la tradición intelectual “como un entramado de teorías, interpretaciones, practicas, valores e instituciones que sobre un conjunto de problemas teóricos y prácticos se desarrollan históricamente a través de controversias internas y externas,” (Velasco Gómez, 2009, pág. 21) y tener en cuenta que todas las transformaciones en estas tradiciones intelectuales tienen consecuencias no sólo en el campo intelectual, sino en el práctico y en el institucional.

4.1 Proyectos constitucionales novohispanos

Durante la crisis de la corona Española en 1808 provocada por las abdicaciones reales comenzó a surgir en Nueva España la noción de crear una Junta o Congreso Nacional que se declarara depositaria de los Derechos de la Corona, teniendo como base que toda Nación en posesión de sus derechos naturales podía nombrar “otra dinastía que ocupe el imperio o darse la constitución que más les agrade,” (Gúzman Pérez, 2017, pág. 24). Con ello comenzó la búsqueda de la declaración de Independencia de la Corona Española con el fin de “adoptar la constitución más religiosa, más justa y más conforme a las leyes fundamentales del reino y de las circunstancias locales.” (Gúzman Pérez, 2017, pág. 25)

Si bien, esta primera intensión no fue de dominio público, las influencias (tanto de Rousseau con el Contrato Social, como del Espíritu de las Leyes de Montesquieu) motivaron a los intelectuales novohispanos en la búsqueda de su propia constitución comenzaron a hacerse conocidas en los círculos del virrey de Nueva España.

Pues como refiere Moisés Guzmán Pérez para los letrados novohispanos del siglo XVIII, *Constitución* era entendida de dos formas distintas; en un sentido físico- geográfico que hacía referencia a la “situación, positura y asiento de las cosas” (Gúzman Pérez, 2017, pág. 23) y, en un sentido político a la “ordenanza, establecimiento, estatuto, reglas que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de alguna república o comunidad” (Gúzman Pérez, 2017, pág. 23).

La corriente republicana tuvo fuerte presencia en la filosofía novohispana a través del pensamiento de Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, y de Suarez, mismos que defendían el origen popular del poder y que el mismo “debe ejercerse siempre con base en leyes que procuren el bien común” (Velasco Gómez, 2009, pág. 51), y que junto con el patriotismo criollo presente en el pensamiento de Fray Servando Teresa de Mier, Juan Torquemada y Francisco Javier Clavijero, dieron forma e influyeron en las ideas independentistas de Hidalgo y Morelos.

Ojeda Gastelúm refiere que ciertas fechas o sucesos permanecen grabados en la memoria colectiva de un grupo o comunidad: “la fundación de una nación o una ciudad, así como la guerra, un desastre o conmoción social, un inesperado triunfo, un acuerdo político decisivo o la acción de un personaje admirado por el sector social, puede dar pie a festejos y evocaciones e incluso a penetrar en el campo de los mitos y las leyendas” (Ojeda Gastélum & Lazcano Armienta, 2011, pág. 11).

4.2 Principalísimo constitucional independentista

En México encontramos que uno de estos sucesos que permanecen presentes en la psique colectiva es la Independencia, que comenzó con el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y que culminó con la entrada del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821; dicho movimiento no sólo significó la disolución de la dependencia del trono español, sino la creación de una nueva nación y con ello los primeros intentos para normativizar el acontecer político y social de una sociedad convulsionada por el movimiento armado que por fin tuvo la oportunidad de autodeterminarse.

Desde el punto de vista legislativo, para Guzmán Pérez el principalísimo constitucional mexicano comenzó por los distintos textos políticos realizados por los partidarios de la Independencia, y resulta vital entenderlo como una tradición puesto que son el “conjunto de proposiciones, principios, axiomas o verdades que son asimiladas y compartidas por las personas en un momento histórico determinado y que buscan normar bajo criterios morales la conducta de una nación, un pueblo o una comunidad” (Gúzman Pérez, 2017, pág. 33).

Dentro de esta tradición encontramos *Elementos constitucionales* (1812) de Ignacio López Rayón como primer texto constitucional, sin embargo, como primer documento constitucional surgido de la Independencia encontramos *Sentimientos de la Nación* (1813), escrito por José María Morelos y Pavón. En el podemos identificar con claridad las influencias mencionadas anteriormente, un iusnaturalismo racionalista (Villoro L. , 1985) con influencia de Grocio, Puffendorf y Heinecio, plasmado en la doctrina sobre la soberanía y el ejercicio del poder, en lo que Ambrosio Velasco (2009) identifica como humanismo republicano; las influencias del pensamiento francés de manos de Rousseau, Montesquieu,

la Enciclopedia y Voltaire y las visiones surgidas del patriotismo criollo, reflejado en el proyecto multicultural que reconocía a criollos, mestizos e indios como ciudadanos.

El 22 de Octubre de 1814 se declara el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fruto de la sesión legislativa convocada por José María Morelos y Pavón, esta primera Carta Magna tuvo como objetivo terminar con el Derecho a la Revolución (Cue Canovas, 2013), y sentar un precedente de derecho de la Revolución para acallar las voces que pretendían dar los contrarios al movimiento independentista de “mantener tenaces el odioso concepto que desde el principio quisieron dar a [la] causa, figurando a sus defensores como bandidos despechados sin plan, sin objeto y sin sistema, [que] turban la quietud de los pueblos para vivir del pillaje, protestando fraudulentamente la adquisición de prerrogativas ideales” (Pavón, 2013, pág. 143).

De esta Constitución de corte liberal, muchos académicos afirman que tiene una clara influencia de la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, sin embargo José Miranda y Cue Cánovas (2013) afirman que las semejanzas que se pueden rastrear en ellas son el resultado de la influencia de las ideas y de las Constituciones francesas de 1793 y 1795.

Los principios fundamentales en la Constitución de Anáhuac fueron: soberanía nacional, independencia de la corona española, protección mediante las leyes de la libertad civil, derechos individuales y la división del gobierno en tres poderes.

4.3 Modernidad política: liberalismo y conservadurismo en México

Como se ha mencionado antes, para entender la historia constitucional mexicana “no puede interpretarse el constitucionalismo mexicano exclusivamente con referencia a Cádiz. [...] la historia particular novohispana es igualmente fundamental para poder entender cabalmente

las raíces del republicanismo mexicano” (Guzmán Perez & Andrews, 2017, pág. 48). Las diferentes posturas ideológicas, y la influencia de Estados Unidos repercutió también de manera notable en la conformación del pensamiento sobre el cual se cimentarían las constituciones.

El periodo comprendido entre la Independencia y la Constitución de 1857 fue de experimentación constitucional “en el que la clase política mexicana se enfocaba en hallar una solución constitucional al problema de la legitimidad política” (Doyle, 2017, pág. 97) a través de diferentes fórmulas y planteamientos constitucionales, institucionales y políticos.

Sólo en este periodo se dieron 4 constituciones nacionales y se implementaron diferentes sistemas políticos “una monarquía constitucional (1821-1835) un triunvirato (1823-1824) una república federal (1824-1835, 1846-1853, 1855-1857) y una república central (1835-1846) y dos dictaduras breves (1841-1842, 1853-1855)” (Doyle, 2017, pág. 97), en donde todas ellas contribuyeron en diferentes niveles a la conformación no sólo de la Constitución de 1917, sino en la construcción filosófica, jurídica y política de México.

Los rasgos del liberalismo mexicano son distintos del liberalismo europeo, en tanto las situaciones socio-políticas y económicas de los que surgieron eran distintas, pues como país recién salido del colonialismo México “conservaba, muy a su pesar, todo un bagaje de contenidos coloniales y por lo tanto esencialmente tradicionalistas” (Rovira Gaspar M. d., 2010, pág. 141).

La filosofía mexicana del siglo XVIII, tuvo dos líneas de pensamiento, una escolástica innovadora, que permitió la apertura del pensamiento a los planteamientos modernos y una escolástica tradicionalista, sin embargo, cuando se empiezan a formular las líneas del

liberalismo en México, ambas se tratan de dejar de lado en un afán de romper con la tradición y abandonar todo aquello que no fuera surgido de esta nueva nación independiente. Rovira Gaspar, considera que este “interés por una total renovación filosófica y educativa dieron lugar a que nuestros liberales rompieran, totalmente con la tradición filosófica mexicana [... logrando que] la estructura del pensamiento filosófico decayera considerablemente” (Rovira Gaspar M. d., 2010, pág. 161).

Sin embargo, muchos de los representantes de la corriente de la escolástica innovadora o de lo que Saladino García (2009) llama la ilustración latinoamericana, lograron posicionarse en puestos que les permitieron influenciar de manera directa en la conformación de la ideología liberal mexicana, autores como Valentín López Farías, José Luis Mora, y Servando Teresa de Mier construyeron con sus aportaciones un proyecto humanista que “buscaba hacer realidad la práctica de los valores más caros de la modernidad como la fraternidad, la igualdad, la justicia, la libertad, la tolerancia” (Saladino García, 2009, pág. 212).

El discurso liberal mexicano presenta una reflexión filosófica de contenidos propios “es un pensamiento filosófico-político que puede calificarse, aunque parezca redundante de <<inmanentista>>” (Rovira Gaspar M. d., 2010, pág. 142) que buscaba resolver los problemas del hombre en el aquí y el ahora que se ven reflejadas en el utopismo constitucional, las teorías sobre la soberanía y las preocupaciones sobre las capacidades del Estado.

Dentro de la línea liberal se consideraba que son tres eran los ejes del liberalismo, la libertad económica, la política y la libertad religiosa, por lo que “los fines del gobierno son: asegurar la independencia de la nación, conservar la paz interior y exterior, proteger la libertad

individual, arreglar las relaciones mercantiles internas y externas y fomentar los manantiales de la prosperidad pública” (López Vela, 2010, pág. 146).

A la par de la línea de pensamiento liberal aparecía más de la mano de la escolástica tradicional la concepción del conservadurismo, y si bien “ambos [querían], pues, los beneficios de la modernidad, pero no la modernidad misma” (Pani, 2009, pág. 11), las concepciones tan distintas que se dieron a través de los debates confluyeron en la historia política del país.

Como menciona Quentin Skinner las “visiones confortantes por familiares poco contribuye a nuestra comprensión de los fenómenos políticos” (Skinner, 2009, pág. 15) y las etiquetas de *liberales y conservadores*, de *izquierda y derecha* en la historiografía constitucional de México están desdibujadas y debemos tener cuidado para no incurrir en la universalización que no permita ver los matices del pensamiento de los autores, resulta vital explicar de manera general qué es lo que se considera como propio de la visión conservadora del Estado.

“El conservadurismo y la derecha forman parte del utillaje mental y discursivo del Occidente postrevolucionario, y forman parte, por lo tanto, del proceso de construcción del Estado-Nación” (Skinner, 2009, pág. 32), en tanto es una postura que estuvo presente para debatir sobre los conceptos fundantes y fundamentales de la organización.

La historiografía tradicional considera que las posturas del conservadurismo pueden identificarse por la búsqueda de un centralismo, que se presentaría como la oposición del federalismo, sin embargo, la línea liberal “es compatible con los dos sistemas, siempre y cuando se parta del concepto de la idea de la nación única y soberana” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009,

pág. 93), así encontramos que el punto de inflexión de ambos pensamientos, no se da en el sistema de gobierno, sino que se encuentra en cómo se entiende y a quien se le entrega la potestad de esta soberanía.

Para los conservadores que seguían la línea marcada por la escolástica tradicional, la sanción de la soberanía popular era “proposición pecaminosa y herética, usurpadora de la potestad divina e inicio de numerosos males” (Ávila, 2009, pág. 43), como lo menciona Lorenzo de Zavala, los representantes de “los nombres de Voltaire, Rousseau, D’Alambert,, etc., eran pronunciados por los maestros como los de unos monstruos que habían enviado la Providencia para probar a los justos” (Rovira Gaspar M. d., 2010, pág. 161).

Ambas concepciones se configuran en consideraciones sobre lo que la Constitución debería de representar para el país, y era considerada en una doble vertiente, en la primera era “considerada como el marco legal necesario en el ejercicio del poder, por otro, la constitución como instrumento que posibilita la realización de la sociedad deseada” (Lepe Pineda, 2010, pág. 217).

4.4 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824

Tras derrocar a Iturbide y con ello el fin del Primer Imperio Mexicano, “el 27 de octubre de 1823 se reunieron 62 diputados con el fin de iniciar los trabajos preparatorios y, algunos días después, el 7 de noviembre, se designó como presidente del nuevo Congreso a Miguel Guridi y Alcocer, en ceremonia solmne en la que estuvo presente el Supremo Poder Ejecutivo” (Serrano Migallón, 2013, pág. 155) de lo que sería el congreso constituyente de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 .

Todos los involucrados tenían como interés principal “establecer una república con base en principios liberales y constitucionales” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 93) y pese a que en muchas de las historias políticas de México se hable de dos bandos bien definidos Liberales y Conservadores, las “ideas y consideraciones de corte conservador aparecían tanto en los planteamientos de los federalistas como en el de los centralistas” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 93), y se mezclaban de maneras muy heterogéneas en cada uno de los pensamientos de los involucrados.

En la Constitución de 1824, México toma muchas de las características jurídico-políticas que existen actualmente y para la historia constitucional “la constitución de 1824 constituye el momento de fundación de nuestra identidad política; es, al mismo tiempo, el primer ejercicio político de proyección ideológica para la construcción del futuro político de una nación que todavía estaba por construirse” (Serrano Migallón, 2013, pág. 159).

En este documento constitucional el país toma por primera vez su nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, y para muchos el hecho de que se conformara en una república viene del entendimiento del republicanismo “como ideal y objetivo para México es producto claro de la insurgencia” (Guzmán Perez & Andrews, 2017, pág. 66).

La noción de Republicanismo surgió entre muchos de los Constituyentes que participaron en la redacción de la Constitución Mexicana de 1824 por la influencia de los Estado Unidos de América pues consideraban que “las repúblicas constituían la forma de gobierno que más favorecía la revelación divina, por lo que la misma naturaleza prefería tal sistema” (Andrews, Reformas la Constitución de 1824, 2017, pág. 81), consideraban que con la implementación

de una República los ideales liberales se verían protegidos, y que toda libertad individual se vería apoyada y salvaguardada.

A su vez, el sistema federal de la Constitución de 1824 “tenía sus raíces primero en la administración y cultura política colonial y, luego, en la experiencia del gobierno de la Constitución de Cádiz a partir de 1820” (Andrews, Reformas la Constitución de 1824, 2017, pág. 76), logrando así la mezcla de dos tradiciones, las influencias del Norte a través de Jefferson y la Constitución de Virginia y las experiencias previas con la Corona Española y las dejadas por la Revolución Francesa.

Una de las grandes diferencias con los textos constitucionales anteriores era el uso de la fórmula “nosotros el pueblo” negando así “el reconocimiento como autor institucional explícito del texto fundador” (Guzmán Perez & Andrews, 2017, pág. 64) al Congreso Constituyente, pero enraizando la potestad soberana en el pueblo, en ese conjunto de individuos que formaban la Nación.

Encontrar el mejor gobierno y la mejor forma de estado fueron las principales búsquedas del Constituyente de 1824, pues ambas cuestiones tomaban especial relevancia en “la consolidación de la identidad nacional, las organizaciones políticas intermedias, el nexo entre gobernantes y gobernados” (Serrano Migallón, 2013, pág. 159).

Con respecto a la forma de gobierno, las discusiones entre los constituyentes se centraron en la conformación del poder ejecutivo, donde algunos como Ramos Arizpe, siguiendo el ejemplo de George Washington, apelaban por una presidencia unipersonal y un vicepresidente, mientras otros proponían un Poder Ejecutivo triunvirato.

Las discusiones se centraban así con el tema de pesos y contrapesos en la forma de gobierno, para impedir que los poderes públicos sobrepasaran sus límites constitucionales, porque si bien la Constitución del 1824 no establecía una declaración expresa de derechos, “si establecía un número importante de requisitos (o derechos procesales) para la impartición de justicia” (Andrews, Reformas la Constitución de 1824, 2017, pág. 88).

Pese a todo, las ideas conservadoras tuvieron su eco en la Constitución de 1824, pues en ella se estableció, que la religión oficial del país era la católica, limando un poco la aspereza con respecto al lugar de la potestad divina, porque si bien en ella se establecía la existencia de la soberanía popular, esta se encontraba bajo el manto de la religión católica y sus preceptos, la iglesia conservaba a su vez su soberanía eclesiástica.

Tras la promulgación de la Constitución de 1824 y por los siguientes 30 años, la crítica constitucional estuvo presente, y derivaba de la fe en la “magia de las constituciones”, esta visión utópica donde “si México podía establecer una constitución que rigiera la república de acuerdo con los principios liberales, la prosperidad y la paz estarían garantizadas” (Andrews, La tradición constitucional en México, 2017, pág. 73).

4.4.1 Escala de valor de la Constitución de 1824

Con respecto a la escala de valor que configuró en el contenido de esta Constitución encontramos que el valor superior fue el de la autodeterminación porque sobre el mismo descanso la noción de Nación a través de la figura de la soberanía estatal entendida como:

“Primero el reconocimiento del derecho exclusivo y universal del Estado a promulgar en su territorio normas jurídicas que vinculan a sus nacionales (soberanía territorial y personal)¹⁴, es decir el reconocimiento del poder de tomar la última decisión sobre personas y cosas en su territorio y de decidir sobre el estatus de las personas físicas y

jurídicas (soberanía interior). En segundo lugar, en las relaciones exteriores la no sumisión a otros Estados, pues a todos ellos les reconoce el derecho internacional igual autoridad: *par in parem non habet imperium*” (Hillgruber, 1/2009, págs. 15-16).

El siguiente valor de esta escala se encuentra en el criollismo, y es el de la igualdad, ya que después de haber establecido una nación, era necesario que se estableciera una noción de igualdad entre los ciudadanos que permitiera formar una identidad nacional que saliera de la dinámica de las castas presente en el Virreinato, prueba de ello son las expresiones utilizadas para apertura de la Constitución referida de “Nosotros el pueblo”.

En esta Carta Magna a diferencia de las posteriores, la noción de libertad no era tan importante y la misma tenía limitantes claras como una religión oficial, el catolicismo; la misma su vez no se pronuncia sobre las libertades individuales y sociales que en otros cuerpos constitucionales federales se establecerían más adelante, pese a ello se pueden encontrar en Constituciones Locales de la época posturas más liberales y vanguardistas en tanto a este valor, por ejemplo en la Constitución de Yucatán se establecía la libertad de culto.

Así mismo como lo que pretendía esta Constitución era el establecimiento de una Nación libre y soberana, el valor de la justicia no aparece referido en la misma, quedando sólo dos valores superiores, necesarios para la formulación de un Estado, el valor de la autodeterminación que permite constituirse soberana y libremente de otros Estados y el valor de la igualdad que permite conformar un Pueblo, una identidad nacional a través de condiciones de igualdad de participación en los asuntos públicos y sin las limitantes de las castas establecidas durante el virreinato.

4.5 Carta magna de 1836: Las Siete Leyes

Pese a que en la Constitución de 1824 se había establecido un sistema federalista, ciertos grupos consideraban que “no se podía transitar del autoritarismo colonial al sistema federal de forma drástica, por lo que la mejor opción para México era un sistema unitario” (Serrano Migallón, 2013, pág. 177).

Es por ello, que el documento constitucional conocido como las Sietes Leyes o Constitución de régimen centralista, es fruto de esta idea de que una buena constitución debe de “asentarse firmemente en el pasado, sobre las instituciones y costumbres de una sociedad” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 123), es decir, se debía de mantener la forma central sobre la que se había fundado el autoritarismo colonial para evitar desestabilizaciones en la vida de la Nación.

Desde los primeros años del Gobierno de Guadalupe Victoria, se hicieron patentes las dificultades que tendrían las instituciones y el régimen constitucional en general en el manejo de los problemas nacionales. El déficit del gasto público, el intento de reconquista española y una marcada reticencia hacia el titular del ejecutivo provocó que “la inestabilidad que se vivía en el país se acentuara y que el sistema constitucional comenzara a disolverse entre un cúmulo de acontecimientos que sucedieron a la elección de 1828” (Serrano Migallón, 2013, pág. 181).

El Congreso en 1836 estableció las Siete Leyes “en las que se sentaban las bases de lo que sería el nuevo régimen constitucional, que buscaba ofrecer soluciones a los problemas que enfrentaba el país con base en la realidad que en él se vivía” (Serrano Migallón, 2013, pág. 192), y que la Constitución de 1824 no había sabido dar soluciones.

Esta Carta Magna contemplaba derechos, y también establecía obligaciones a los ciudadanos, que tenían, entre otras cosas, que “profesar la religión de la patria (la católica), observar la Constitución y las leyes, así como obedecer a las autoridades” (Serrano Migallón, 2013, pág. 194), pero también establecía requisitos para ser considerado un ciudadano de la República, entre los que se encontraba “contar con una renta anual por lo menos de cien pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad” (Serrano Migallón, 2013, pág. 195).

Los requisitos para ser ciudadanos, inspirados por las ideas de Burke sobre la democracia y la participación política buscaban limitar el derecho de votar y ser votado a la clase más preparada; sin embargo, no por ello se debe de tildar de conservador esta cuestión ya que “la democracia y el liberalismo no son una ni la misma cosa” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 122).

La limitación de la participación ciudadana obedecía más a la idea de que la solución de los problemas nacionales no se daría en el ejercicio de la soberanía popular, aquí entendida como aquella que se le daba a todos los individuos, sino que “era necesario que la soberanía residiera en la Nación y cuyo representante único era el gobierno, regulado por una constitución y leyes justas” (Doyle, 2017, pág. 102).

Dentro de los lineamientos conservadores, ya presentes en la Constitución de 1824, se mantuvieron “los fueros, la intolerancia religiosa y el reconocimiento de la soberanía eclesiástica” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 127), pero ya no se trataba del conservadurismo religioso, sino del político que buscó acabar con la participación de ciertos grupos en las elecciones y en la toma de decisiones políticas.

Se estableció un Supremo Poder Conservador que “tendría facultades de control a fin de lograr que los principios teóricos de la división de poderes se hiciera posible” (Serrano Migallón, 2013, pág. 196), pues como se ha señalado, el sistema de pesos y contrapesos establecidos para la federación, se consideraba que había fracasado, y que sólo mediante un régimen centralista, estos poderes estaría funcionando de la manera correcta, ya que se consideraba que “los poderes no son en sí mismos sino garantía de la libertad” (Aguilar Rivera, Alamán y la Constitución, 2017, pág. 220).

Andrews considera que entre la Constitución de 1824 y la de 1836 no hubo “un rompimiento sustancial con el compromiso entre las ideas liberales y conservadoras establecido en la Constitución Federal” (Andrews, Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835), 2009, pág. 119), pero si se halla en esta última una representación del liberalismo centralista europeo, inspirado en autores como Burke y Constant, autores americanos como Hamilton y Madison, todo ello unido a la naturaleza híbrida de derecho natural que existía en México, que tenía como base el iusnaturalismo clásico, del Derecho Canónico y la antropología política anclada en el derecho natural moderno.

Este eclecticismo en la “tradición y posición filosófica [mexicana], crítica y valorativa empeñada en continuar y profundizar las ideas e intereses de algunos” (Núñez M., 2009) y nutrirse, también de manera escéptica su vez de ideas europeas y estadounidenses se refleja en las Constituciones de 1836 y posteriores.

4.5.1 Escala de valor de la Constitución de 1836

Dentro de los debates sobre la Constitución de 1836 y la búsqueda de nuevos poderes o formas de gobierno está presente el valor de la autodeterminación, pero no en el sentido de

soberanía que se había manejado en la Constitución de 1824, sino en el sentido de poder determinar formas de gobierno adecuadas para la situación de la Nación, pero con un control constitucional, pues en esta Constitución se establece que “en seis años, contados desde la publicación de esta constitución, no se podrá hacer alteración en ninguno de sus artículos”.

Como menciona María del Refugio González (1995) al referirnos a centralismo o federalismo tras la Independencia de México, aludimos a “dos modos de concebir la organización política y económica del Estado Mexicano” (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, págs. 1434-1435) y no a la constitución del mismo como ente soberano, si bien cada una de estas formas apareja no sólo una estructura estatal determinada, sino cómo se configura la escala de valor presente en el mismo.

La propia configuración de las Siete Leyes muestra una clara preocupación por la noción de justicia y las libertades individuales, estableciendo límites dentro de los cuales las segundas no pueden ser perturbadas más que por medios legalmente establecidos. En esta constitución se establecen de manera muy específica los procesos que deben de seguirse para conservar la idea de justicia tanto en el actuar de las autoridades, como en la elección de las mismas y en la búsqueda de los pesos y contrapesos entre poderes.

En ese sentido el valor de justicia al que aquí se hace referencia tiene que ver más con el acceso a la justicia, la administración de la misma y a las cuestiones procesales en torno a ella, ya que sólo a través de la legalidad y de cierta institucionalización estatal con límites claros al poder se puede dar cierta apertura al valor de la libertad en forma de ciertas libertades individuales entre las que se incluía: la libertad de imprenta, circulación de ideas y la libertad de tránsito.

El valor de la igualdad ya no se encuentra presente en esta escala axiológica debido a que, se requiere de cumplir con una serie de requisitos para mantener la cualidad de *mexicano*, y sólo pueden ser votados los miembros más preparados de la comunidad, esto se basó más en “la promoción de ciertos valores excluyentes que en la convocatoria de igualdad y de justicia ciudadana” (Alvarado Gómez, 2017, pág. 9), con la llegada al poder legislativo de los llamados *hombres de bien* y, con una oligarquía pautada mediante los requerimientos específicos para acceder a cargos políticos, es decir, si existe una noción de igualdad, pero sólo referida a igualdad entre iguales, entre los que se consideran los mejores.

4.6 Carta magna de 1843

Si bien con las Sietes Leyes “la nación mexicana adquiría un nuevo rostro marcado por su carácter unitario y central”, los problemas con los que había enfrentado el país desde su independencia de la Corona Española seguían siendo los mismos, la falta de una forma de gobierno definida que lograra el progreso nacional ocasionó molestia entre diferentes sectores.

A partir de la Revuelta Triangular surgida en agosto de 1841 en contra de Bustamante por “su debilidad, indecisión y una incapacidad para defender la independencia mexicana en contra de los franceses, para reconquista Texas e, irónicamente, para controlar las constantes revoluciones que amenazaban con desembocar en una guerra civil” (Doyle, 2017, pág. 107) se buscaba llamar a un nuevo Constituyente, con el fin de reformar de nueva cuenta la Carta Magna.

Bustamante en un “intento desesperado para ganar adeptos a su causa” (Doyle, 2017, pág. 108) restauró la Constitución federal de 1824, buscando obtener el apoyo de los federalistas radicales, sin embargo, esto no funcionó y Bustamante tuvo que dejar la presidencia en manos

de Santa Anna, quien fungiría como presidente interino. Este último, llamó a un congreso constituyente que debería de ser una nueva constitución centralista. Sin embargo, en el congreso había una mayoría federalista y se “debatía un proyecto constitucional muy distinto del que imaginaron”.

Debido a todas las situaciones ocurridas, al descontento social y a la nula capacidad de las distintas formas de gobierno que se habían propuesto en México a lo largo de los años, provocó que posteriormente “las expectativas de un imperio, de una república federal y una central [...se enfrentaran] a la alternativa entre la opción constitucional o la tentación de la dictadura” (Noriega & Pani, 2009, pág. 176).

Las *Bases orgánicas*, como se conoce a la constitución de 1843, fue un documento constitucional con el cual se desaparece el Supremo Poder Conservador, que había intentado limitar el poder ejecutivo y al poder legislativo, dando paso de nuevo a la división tripartita de poderes.

En ella, se establece que México es una república representativa y popular, en la que se consideraban mexicanos a todos aquellos nacidos en territorio nacional o extranjeros con carta de naturalización y ciudadanos sólo a aquellos que mayores de 18 años si estaban casados, o 21 si no lo estaban, con una renta anual de 200 pesos mínimo, por lo que aparece renovada la discusión entre soberanía popular y democracia.

En el entendimiento de muchos de los involucrados, sobre todo de la facción que se identificaban con los conservadores, la soberanía popular, era entendida como el principio primero de la democracia, y sólo esta forma de gobierno era la que le era propia. Sin embargo, otros autores como Mariano Otero argumentaban en contra, ya que, si el poder reside en el

pueblo, este puede decidir la forma de gobierno que más le convenga, ya que no es primer principio de la democracia o de alguna forma de gobierno.

Influenciados por las ideas de Alexis de Tocqueville aparecen en México, de la mano de una edición de *La democracia en América*, pero sólo del tomo I de esta obra “una fuente de inspiración para la protección de derechos y el control constitucional” (Aguilar Rivera, Ausetes del universo: Reflexiones sobre el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 1821-1850, 2017, pág. 35), que también tendrá un fuerte impacto en las formulaciones constitucionales de la época.

4.6.1 Escala de valor de las Bases Orgánicas

A diferencia de la Carta Magna de 1836, en las Bases Orgánicas la doctrina de los hombres buenos pierde fuerza y vuelve a darse una apertura ante la participación social, sin embargo, la misma sigue teniendo como base la igualdad entre iguales y no el valor absoluto de la igualdad entre los connacionales, ya que “las bases orgánicas aumentaban el poder del Clero, y cambiaban la forma de elección del Congreso de forma directa, así como del Presidente y los gobernadores; pero sin duda lo más significativo fue la desaparición del Supremo Poder Conservador” (Salazar Andreau, 2016, pág. 32).

El valor principal en esta escala de valor sigue siendo el de la autodeterminación en tanto que a través del mismo se busca afianzar la forma de gobierno centralista como una opción ante las crisis acontecidas en México tras la independencia.

El valor de la libertad, traducido en derechos fundamentales y libertades individuales, se encontraron de manera vaga y diseminada, y no eran un interés principal en el corpus constitucional, abocado una vez más a la justicia desde la legalidad y los protocolos normativos

4.7 Acta Constitutiva y de Reformas de 1847

Tras la promulgación de la Constitución de 1843, Santa Anna fue elegido presidente, pero ni la Carta Magna, ni su administración logró frenar la inestabilidad que se vivía, llena de “rebeliones constantes, las amenazas de Texas, los intentos de separación de Yucatán, desorganización administrativa y problemas financieros” (Serrano Migallón, 2013, pág. 225).

La inestabilidad provocó levantamientos, y Santa Anna en un intento desesperado trató de frenar al poder Legislativo, pero fracasó en este intento, lo que desembocó en el desaforo a Santa Anna y su exilio a Cuba, sin embargo, la amenaza de los estadounidenses y el intento de Paredes por instaurar una monarquía presentó la oportunidad para que Santa Anna regresara.

El Acta Constitutiva representa una continuación de la Constitución del 1824, ya que la misma se reinstaura en un intento de recordar a las distintas facciones que la finalidad de esta carta era la de establecer una Nación, que pudieran hacer frente en conjunto a amenazas externas. Pues se entendía que “cuando la república entera se alze(sic) como un solo hombre, y rostro á rostro encuentre á su enemiga, no será la que tiemble: jamás la victoria quedó por los más numerosos, sino por los que defendían la justa causa” (Orozco y Berra, 2011, pág. 461).

Sin embargo, se propuso un Congreso Constituyente con la capacidad de hacer las adecuaciones a la Carta Magna de 1824. Con el fin de adecuarla a la realidad mexicana, se estableció necesario que se restaurara el federalismo en México, pero que desaparecieran las dependencias y surgiera en cambio, la figura de los Estados.

Otros de los cambios importantes se dio en la concepción del mexicano y del ciudadano y por ende en la participación política del mismo, ya que el Acta Constitutiva consideró ciudadano a “todo mexicano, por nacimiento o naturalización, que hubiera llegado a la edad de 20 años y que no hubiera sido condenado en proceso penal a pena infamante” (Serrano Migallón, 2013, pág. 233).

Esta ampliación en la concepción de ciudadano, abrió también la participación política al grueso de la población, pues se otorgaba el “derecho de los ciudadanos de votar en las elecciones populares, de ejercer el derecho de petición y el de reunión para discutir los negocios públicos, así como el de pertenecer a la Guardia Nacional” (Serrano Migallón, 2013, pág. 233).

Se dio también en este documento una importancia mayor al control constitucional y para protegerlo “se otorgó al Congreso la facultad de declarar nula toda ley de los Estados que atacara la Constitución o las leyes generales” (Serrano Migallón, 2013, pág. 237), ya que creían que era un mecanismo para mantener la cohesión con los Estados.

Las vicisitudes pasadas por el pueblo de México en esta época llegaron a entenderse desde una óptica de la filosofía de la historia crítica, en donde la historia “nos enseña que esos sucesos no son casuales ni hijos tampoco de momentáneas circunstancias” (Lozano, 2011, pág. 851), pero gracias a este conocimiento podemos entender “sus más grandes catástrofes” (Lozano, 2011, pág. 851), y de ese conocimiento, mostrar que “somos los dignos hijos de los Padres de la Independencia: somos... «verdaderos y buenos mexicanos»” (Tornel y Bonilla, 2011, pág. 824).

4.7.1 Escala de valor de la Acta Constitutiva y de Reforma

En el Acta Constitutiva y de Reforma se vuelve a hacer patente el valor de la autodeterminación con el regreso del régimen federal al Estado Mexicano, el mismo bajo la figura de la soberanía entregada al pueblo, y sobre todo con la aparición de la figura del Estado.

El valor de la igualdad volvió a ser una realidad en su sentido más amplio con limitaciones, ya que se observaba en que los derechos otorgados a los ciudadanos eran generales, pero era posible perder esta condición de ciudadano por “ser ebrio consuetudinario, ó tahir de profesion, ó vago; por el estado religioso, por el de interdiccion legal; en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse, sin escusa legítima, á servir los cargos públicos de nombramiento popular”.

La libertad como valor se establece por medio de garantías de “las garantías de libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas” y si bien comienzan a marcar la entrada de algunas nociones liberales estas aun no permean de manera profunda el sistema jurídico mexicano.

Al igual que en las Constituciones pasadas, el valor de la justicia existe en virtud de hacer valer los valores anteriormente mencionados.

4.8 Carta magna de 1857

30 años de gobierno liberal habían sumido en un descontento general a los mexicanos contra este sistema que había prometido ser la solución para el avance social, sin embargo, “la dictadura de Santa Anna borra todo esto y opera como una suerte de motor rejuvenecedor del liberalismo” (Johansson, 2017, pág. 118).

Con la Revolución de Ayutla, comandada por liberales moderados y radicales, que tenían como principal objetivo derrocar a Santa Anna y regresar al país a la senda del liberalismo “se hacía hincapié en la necesidad de un nuevo contrato social y sobre todo de la voluntad de romper verdaderamente con el pasado y desbaratar los compromisos anteriores con el «antiguo régimen»” (Johansson, 2017, pág. 118).

A pesar de la búsqueda en común de liberales moderados y radicales, los fines últimos que ambos bandos buscaban distaban por mucho de ser los mismos. Los radicales buscaban “la instauración de una República federal y una constitución que permitiera la eliminación de las corporaciones y fueros, la desamortización de los bienes del clero y de las propiedades comunales” (López González, 2017, pág. 137).

En cambio, los liberales moderados proponían “un cambio paulatino que podría llevarse a cabo mediante reformas a la Constitución de 1824” (López González, 2017, pág. 137), puesto que consideraban que no era apropiado cortar de raíz la influencia del pensamiento en el que se habían sentado las bases de la Nación.

Sin embargo, fueron los liberales radicales los que lograron imponer su concepción de que debía de hacerse una nueva Constitución, de clara influencia del liberalismo europeo, representante completa de la modernidad, que dejaba fuera la tradición constitucionalista hispánica.

En ella se “grababa en el mármol constitucional los principales avances del liberalismo de cuño anticlerical” (Johansson, 2017, pág. 120), se establecía la tolerancia de cultos y se trataba de acabar con las ventajas de la Iglesia, misma que era considerada “como la principal institución responsable del atraso social-político del país” (Johansson, 2017, pág. 121), en

tanto que la cerrazón ideológica de la misma no daba paso a las ideas modernas de libertad e igualdad.

Estas reformas “ocurrieron en el contexto de la persecución contra los miembros del grupo conservador que había colaborado en la dictadura” (Hernández López, 2009, pág. 277), por lo que en esta Constitución se ve muy poca influencia de los conservadores en estos rubros.

Con el fin de conformar una nueva sociedad de individuos-ciudadanos y de prevenir la tiranía con un sistema de pesos y contrapeso funcional, se buscó “instaurar las reglas del juego político” (Johansson, 2017, pág. 124), ya que había resultado evidente con las Constituciones anteriores que la división tripartita de poderes no garantizaba en sí misma la efectividad de los contrapesos, y que era necesario que los ciudadanos se involucraran participando en las cuestiones políticas del país.

Esto dio paso a la preocupación mexicana de la soberanía efectiva, que entendía que “el pueblo es la totalidad concreta, viviente de los ciudadanos, y no una mera abstracción de uso político, la *soberanía*, a su vez deberá ser un derecho práctico y generalizado para el pueblo y no un mero postulado ideológico” (Lepe Pineda, 2010, pág. 212), que requería de un sistema mediante el cual los ciudadanos pudieran participar activamente.

Se da entonces, una “negación del derecho divino y una tajante afirmación de la soberanía popular” (Lepe Pineda, 2010, pág. 209), que requería de la construcción de ciudadanos. El principio de soberanía nacional derivaba en la representación, y para ello se necesitaba el ejercicio de la soberanía popular cuyo implícito presuponía una posición diferente. “El ciudadano estaba obligado a influir en el destino de la nación” (Luna Argudín, 2006, pág. 69) por medio del voto y la posibilidad de ser votado.

Se recupera la discusión sobre la democracia, pero se articula con otros postulados, ya no se plantea si el liberalismo es democrático, en tanto este permite distintas formas de gobierno, siempre que sean seleccionas por el pueblo ya que “todo poder y todo derecho reside originariamente en el pueblo” (Lepe Pineda, 2010, pág. 209); se apertura la discusión alrededor si el federalismo y la democracia son frenos ante el despotismo (Luna Argudín, 2006), se concluye que lo son, y que si no se permitiera la participación de todos los ciudadanos se podría caer en una oligarquía electoral

La Constitución de 1856 representa un salto del pactismo al iusnaturalismo y en ella “confluyen de manera contradictoria un notable esfuerzo por constitucionalizar los avances del liberalismo haciendo de este texto una de las constituciones más progresistas del país y, a la vez, una sorda lucha ideológica entre diputados moderados y radicales” (Johansson, 2017, pág. 115).

Sustentada bajo la idea de que los derechos del hombre son reconocidos por todo el pueblo mexicano, y que sólo mediante la formulación correcta de que la autoridad no debe de intervenir en la libertad se lograría el orden regular de la sociedad y que como admitía Zarco “al fin obra humana, distaba mucho de ser perfecta, y que por eso ella misma ofrecía los medios para su reforma” (Cosío Villegas, 2007, pág. 82).

La Carta Magna de 1856 se convirtió en un “símbolo del liberalismo mexicano” (Johansson, 2017, pág. 115), pero las críticas siguieron siendo duras porque “la forma democrática, popular y representativa que imaginó adecuada para el país, naufragó en el régimen personal y autoritario de Porfirio Díaz” (Cosío Villegas, 2007, pág. 24).

4.8.1 Escala de valor de la Constitución de 1857

Esta Constitución con inspiración de la de 1824, deja de lado el valor de la autodeterminación como valor supremo, pues considera que la formación de la nación bajo un régimen federal era el camino correcto para una buena gobernabilidad, de corte progresista esta Constitución introdujo a México el constitucionalismo liberal del Siglo XIX, bajo la autodeterminación en forma de soberanía, una vez más entregada al pueblo, ya que como refiere Francisco Zarco “cuando la Constitución a nadie excluye, cuando entrega el poder al pueblo para que el pueblo se gobierne a sí mismo, no hay pretexto para no aceptar el nuevo orden legal” (Zarco, 2013, pág. 159).

Establece como valor principal la igualdad traducido en “prerrogativas de la igualdad ante la ley, seguridad personal, respeto a la propiedad, portación de armas, libertad de imprenta y garantías en el proceso criminal” (Rabasa, 2006), que pretendían volver a dar cabida a todos los ciudadanos tras el fin del régimen centralista.

La novedad en ella es que, con el triunfo de los liberales, la incorporación explícita de los derechos del hombre y las libertades individuales, el valor de la libertad en un sentido amplio buscaba ser salvaguardo bajo el imperio de la ley en forma de garantías individuales protegidas por figuras jurídicas como el juicio de amparo.

La separación de la Iglesia y el Estado, el establecimiento de una libertad de culto aun de manera tibia en el artículo 123 constitucional y la expresión explícita de un liberalismo individualista en los derechos del hombre marcaron el comienzo de la apertura del Estado Mexicano a la razón liberal.

El valor de la justicia permea a los valores antes señalados en tanto que el mismo a través de la supremacía judicial debía proteger y velar porque estos valores fueran salvaguardados en el Estado.

4.9 Constitución de 1917

Desde la creación del México independiente se instauró dentro del Estado un sistema de pesos y contrapesos que buscaban dar una estabilidad y continuidad institucional, sin embargo, si revisamos la historia de México, veremos que son pocos los momentos de estabilidad, si bien, el Porfiriato “fue un periodo de Ejecutivo omnipotente, al punto que borró los otros poderes” (Bonifaz Alfonso, 2017, pág. 30), el descontento y el rompimiento del orden social permearon aún más la estabilidad.

La revolución como movimiento armado “se fincó en la presencia de miles de mexicanos que, a través del uso de la violencia, pugnaron por un cambio de gobierno y de la política predominante [...] y unos más por un cambio sustancial en la estructura social y el sistema de propiedad y de valores” (Ojeda Gastélum & Lazcano Armienta, 2011, pág. 12). Su rasgo dominante “auspició al calor de una crisis política ante el empuje de grupos sociales y culturales excluidos por el sistema porfirista [de lo más diversos], los cuales articularon un discurso y una práctica que pugnó por la construcción de una nueva legitimidad a partir de una modernización ideológica” (Ojeda Gastélum & Lazcano Armienta, 2011, pág. 16).

Sin embargo, todos estos actores que participaron de distintas maneras en la Revolución Mexicana terminaron coexistiendo, pues no sólo buscaban la legitimidad dentro del sistema, sino que su lucha buscaba la legitimación de las instituciones ante y para el pueblo; políticas porfiristas y usos sociales de las mismas continuaron pues resultaba imposible construir y fortalecer nuevas instituciones, sin rescatar en un principio las instituciones que aún

quedaban en pie, mezclando en ellas los más diversos puntos de vista dando como resultado una Revolución híbrida.

Marván Laborde (2017) considera paradójico que una revolución que se consideró a sí misma constitucionalista terminara con la redacción de una nueva Constitución, sin embargo, las revoluciones se diferencian de las guerras civiles, refiere María del Refugio González, por la manifestación de la búsqueda de una reformulación del orden jurídico vigente, pues constituyen con respecto al derecho “la modificación extralegal de los principios del orden constitucional existente”; se justifican así como la sustitución de un sistema arbitrario por uno más justo.

Teniendo en cuenta que: “toda Constitución es la expresión de las diversas fuerzas vivas que se mueven en el interior de una comunidad.” (Sánchez Ruiz, 2015, pág. 145), se explica que si bien en un primer momento la intención de Carranza ante el Congreso Constituyente de 1916 era el de reformar la Constitución de 1857, finalmente se promulgó una nueva Carta Magna.

La Constitución de 1917, producto de los debates tras el fin del movimiento armado revolucionario, esta forjada dentro de una tradición constitucional multifacética “producto de un continuo intercambio de ideas y confrontaciones violentas” (Andrews, La tradición constitucional en México, 2017, pág. 17) y no se debe entender, como mencionan Moisés Guzmán Pérez y Catherine Andrews como producto “de un pensamiento liberal uniforme copiado del modelo estadounidense o español” (Andrews, La tradición constitucional en México, 2017, pág. 17).

La filosofía de la época nutrió las confrontaciones intelectuales, pues como menciona Nicol, para ese momento la filosofía en México “[había] adquirido una conciencia histórica, que no viene sólo de los libros, sino de una real experiencia histórica” (Nicol, 1998, pág. 62), esta conciencia histórica aunada al positivismo imperante de la época dio como resultado la búsqueda de una Constitución que se reconociera como practicable, “al liberalismo utópico y anárquico había que oponer un liberalismo realista y de orden: un conservadurismo liberal” (Zea, 1985, pág. 237).

Esta nueva Carta Magna contiene claros referentes al positivismo (2017), que tenía una gran influencia en la burguesía porfiriana que buscaba los “ideales de libertad económica y progreso científico” (Nicol, 1998, pág. 56), las características antimetafísicas del positivismo influyeron en el cambio de concepción de derechos naturales que hasta el momento se había mantenido en las constituciones mexicanas, y dio pie a la aparición de las garantías individuales, en las cuales los derechos de los hombres eran reconocidos en forma positiva por el Estado. Sin embargo, la influencia del positivismo no se quedó en ello pues las polémicas “tiene varias aristas y toca cuestiones como la soberanía, la división de poderes y la organización del gobierno representativo” (Marván Laborde, 2017, pág. 169), pues las diferentes concepciones de los diferentes grupos sobre el equilibrio entre libertad y orden distaban mucho entre sí.

Si bien, como menciona Rafael Rojas “las querellas letradas que produjeron esos choques discursivos, en la esfera pública y en el campo intelectual, contribuyeron a un acotamiento ideológico del liberalismo” (Rojas, 2014, pág. 320) resultando en mixtura o inversiones de los fines liberales, la inclusión de la crítica conservadora y socialista, dieron por resultado

una mezcla entre constitucionalismo iusnaturalista y positivista que tenía como fin la protección de la libertad individual (Barrón, 2017).

La Constitución de 1917, cien años después de su promulgación, sigue siendo el texto vigente, si bien ha tenido una larga lista de reformas, las ideas centrales han permanecido y con ellas las concepciones filosóficas de aquellos que han contribuido a su formación, ya que tuvo como finalidad la construcción de una sociedad más justa, libre, igualitaria y con la capacidad de autodeterminarse. Buscar la historia de las ideas filosóficas en los textos constitucionales, representa una forma de acercarnos a la filosofía viva de México, que sigue conservando, ese carácter de filosofía práctica que da Ambrosio Velasco al pensamiento hispanoamericano.

En la actualidad, son muchas las preguntas y los desafíos que se nos siguen planteando desde la historia constitucional: ¿Cómo explicar los fracasos constitucionales? ¿Requerimos una nueva Carta Magna que represente los principios que ahora son nuestros? ¿O es el sistema político que se forma al margen de la constitución lo que no permite un adecuado funcionamiento del texto Constitucional?

Sin duda aún queda un largo camino por recorrer para poder responder estas preguntas, sin embargo, al día de hoy la siguiente reflexión no pierde vigencia “ningún pueblo es completamente independiente, mientras no piensa y siente como un solo ser, como un ser original. Es necesario mantener vivo en todos los mexicanos, lo mismo que en el opulento prócer que en el más miserable de los proletarios, lo mismo en el niño que en el anciano, el amor a la patria” (Lomelí Vanegas, 2016, pág. 45).

4.10 Reforma constitucionales

Las reformas de Estado tienen como finalidad actualizar las instituciones o marcos jurídicos dentro de un Estado para contribuir a que los mismos se transformen y desempeñen una actividad estatal eficaz y eficiente que contribuya a la concreción del bien común y a la justiciabilidad de los derechos de los ciudadanos. Las mismas son necesarias porque la propia concepción de Estado trae consigo la noción de transformación debido a uno de los componentes del mismo que es la población.

Durante los debates constituyentes de 1916-1917, los diputados mexicanos comenzaron a concebir un concepto de Estado que va más allá de la visión hobbesiana en la cual el Estado, está ahí como un Leviatán para evitar los conflictos violentos entre los hombres; la concepción propuesta por los mismos también superó la visión liberal de un Estado que existe para otorgar y proteger la libertad de todos los hombres, para el constituyente originario “el Estado es la organización creada por un pueblo para realizar sus ideales de justicia para todos los hombres”, envolviendo al mismo con una concepción de Estado social.

Es un hecho que, a raíz de cualquier conceptualización del Estado, el mismo no puede permanecer inamovible por lo que, en muchos puntos de la historia el mismo ha tenido que reformarse para que sus instituciones y las funciones de estas se adecuen a la realidad social que se gesta dentro de ellos. Para que ello pueda ocurrir hay dos caminos que difieren enormemente entre sí: la revolución y la reforma.

Cuando hablamos de las revoluciones nos referimos a movimientos convulsos y violentos que tienen como objetivo la restructuración de la base en la que se establece cómo se concibe no sólo el Estado, sino el fin teleológico del mismo y los principios y valores que lo sustentan, pues en las revoluciones hay una manifestación de la búsqueda de una reformulación de un

orden jurídico establecido por otro que se considere justo y tienen como fin la modificación extralegal de las bases jurídicas-constitucionales de un Estado.

Ahora bien, ya que “los medios violentos para que el pueblo ejercite el poder constituyente no son de ninguna manera aconsejables” (Burgoa Orihuela, 2017, pág. 542), se han tenido que establecer mecanismos institucionales, legales y legítimos que permitan las modificaciones a los principios, las funciones y las normas de un Estado y si bien “la restricción, supresión o sustitución de estos principios sólo incumbe al pueblo en ejercicio del poder soberano constituyente que es titular” (Burgoa Orihuela, 2017), en el caso específico del Estado Mexicano que es democrático se han establecido mecanismos para que los representantes democráticamente elegidos puedan llevar a cabo reformas que permitan la adecuación de la política, las instituciones y el orden constitucional para que permita concretar los ideales de justicia e igualdad, que representan la voluntad legisladora del constituyente del 17.

Podemos definir las reformas de Estado como “un cambio en las relaciones entre diferentes actores, agentes económicos, políticos y administrativos” (Conteras Acevedo & Sánchez Trujillo) dentro de un Estado, este tipo de reformas integran una gran cantidad de elementos y tienen como objetivo mejorar la gobernabilidad del Estado , pues con ella se buscan fortalecer al Estado, la democracia y dar soluciones eficaces y eficientes a las demandas sociales de un momento determinado, por lo que tienen como consecuencia:

1. La transformación del papel del Estado;
2. La restructuración del aparato institucional;
3. La consideración de que la burocracia del Estado es un agente principal en el cambio.

Sin embargo, las reformas de Estado, y sobre todo las que tienen como base reformas a la Constitución:

“tienen, a su vez, una importante y significativa limitación, sin la cual toda alteración que dicho ordenamiento experimentase sería indebida, absurda y aleatoria: la de que la motivación de la enmienda constitucional esté radicada en auténticos factores reales que reclamen su institución y regulación jurídicas y auspiciada por designios de verdadera igualdad y justicia en cualquier ámbito que trate (económico, religioso, político, etcétera), y no basada en conveniencias de grupos que ocasional transitoriamente detenten el poder” (Burgoa Orihuela, 2017, pág. 530) .

Una de las formas previstas por el Congreso Constituyente de 1917 para mantener la vigencia de la Carta Magna fue la posibilidad de iniciativas de ley y de reformas constitucionales; en el capítulo II, sección II se establecieron los medios necesarios para realizar estas reformas, y también se buscó establecer mecanismos necesarios para que las reformas constitucionales tuvieran un peso real. Ya que desde el inicio del Constituyente la mayor parte de los diputados se mostraron de acuerdo alrededor de la idea de que en la Constitución como ley suprema no es menester establecer especificidades normativas que deben de contenerse dentro de los cuerpos normativos menores.

En este sentido las reformas substanciales “se vinculan con el contenido de la acción pública, redefiniendo sus fines, objetivos y alcances” (Di Blasi), es decir, son todas aquellas reformas que busca cambiar la visión estatal por completo, redirigiendo con ello la actividad del Estado a la concreción de las metas fijadas en ellas, este tipo de reforma representan cambios paradigmáticos dentro de los Estado, y podemos ejemplificar en México la reforma

constitucional de 2011 en Materia de Derechos Humanos, ya que la misma representa un cambio paradigmático no sólo en la protección más amplia de lo que antes se conocía como garantías individuales, sino toda una restructuración del aparato gubernamental en tanto que el mismo debe conceder la protección más amplia por parte de cualquier servidor público de los derechos humanos.

Autores como Rabell García consideran que “no necesariamente la reforma de Estado es sinónimo de reforma constitucional o requisito indispensable para concretarla” (Rabell García, Núm. 126 / 2009), sin embargo, dado que la Constitución es la norma fundamental que es base no sólo de toda la normatividad del país, sino que la misma es contendora de los principios y valores que deben de regir la vida pública y política del país, cualquier cambio de una manera u otra debe de estar reflejado en ella; esto sin embargo ha traído grandes críticas al engrosamiento constitucional, pues muchos teóricos consideran que las reformas constitucionales han llevado a que la misma contenga códigos normativos específicos que no deberían de encontrarse en ella.

4.11 Conclusiones

Conocer cómo se fue dando la conformación de las instituciones constitucionales en México es de gran relevancia para este trabajo, ya que sólo de esa manera podemos entender como las ideas ha ido generando pautas no sólo en el pensamiento filosófico- jurídico, sino como estas ideas se han ido institucionalizando en las organizaciones, instituciones y estructuras propias del Estado.

La Constitución de 1917 ha sufrido diversas modificaciones, tales que existen dogmáticos que consideran que han sido suficientes para considerarla otra Constitución a pesar de que hace algunos pocos años se celebró el centenario de la misma.

En el siguiente capítulo nos ocuparemos por medio de la hermenéutica a describir y establecer los valores y la escala de valor presente en esta Constitución, así mismo analizaremos si existe o no un cambio axiológico tras la Reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos, ya que la misma ha significado un gran hito con respecto a cómo se establece la justiciabilidad de los Derechos en México y ha venido a modificar no sólo la parte técnica de la aplicación del derecho, sino también ha influenciado en la concepción de los ciudadanos acerca de su Constitución.

5. Análisis histórico hermenéutico de la axiología de la Constitución de 1917

5.1 Introducción

El Constituyente del 17 tuvo como tarea inicial realizar a la Constitución de 1856 una revisión, para que “en una forma expedita y práctica, expida modificaciones, discuta y apruebe las reformas y haga de nuestra Carta Magna, una ley congruente, racional y de aplicación positiva” (Palavicini, 2014, pág. 751). Sin embargo, en afán de consolidar la Revolución Mexicana a través de la letra de la Constitución las modificaciones realizadas al proyecto carrancista de reforma Constitucional llevaron al final a la promulgación de una Constitución completamente diferente, ya que para ser nueva y arraigarse en palabras de Hilario Medina:

“ha debido partir de la organización política que la República vino practicando con amor desde el triunfo definitivo de la Reforma hasta la caída de Madero; ha debido acoger ese pasado histórico doloroso y sangriento de la Constitución Mexicana, en el que cada artículo, cada renglón, cada palabra, han costado ríos de sangre” (Medina, 2015, pág. 33).

A pesar de que Carranza había entregado al Constituyente un *Proyecto de Reformas en el Congreso*, los debates que siguieron en el mismo, las necesidades sociales así como la incorporación de los valores que eran propios del espíritu revolucionario tenía como objetivo estratégico establecer el orden político y su permanencia sobre las bases revolucionarias, llevando así a la creación de un cuerpo constitucional que “queda como un programa por realizar, como un supremo ideal que es digno de llevarse adelante” (Medina, 2015, pág. 33).

Dentro de los Diputados Constituyentes podemos encontrar a algunos, como Palavicini que tenían como agenda sólo la reforma de la Constitución de 1856 siguiendo al pie de la letra el proyecto carrancista y que urgieron a él bajo el supuesto de que la reforma de todos los artículos de la Constitución llevaría a que el proceso de revisión instaurado dentro del Constituyente tomara más de 150 jornadas de trabajo, lo que a sus ojos no era posible ya que sólo contaban con dos meses para la promulgación de la Constitución.

Pese a argumentos de esta índole, la mayor parte de los Diputados Constituyentes consideraron que era necesario realizar un trabajo de restructuración profunda, y se adhirieron a las fechas establecidas. El Congreso Constituyente de México de 1917 estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, aceptando la gran carga de trabajo y las jornadas de discusión necesarias para la revisión de cada uno de los artículos constitucionales, ya que sólo de esta manera la Constitución contendría dentro de sí el verdadero espíritu de la Revolución Mexicana y sería reflejo de las necesidades, ideales y valores que la sociedad mexicana compartía, logrando así el triunfo definitivo de la revolución, el Constituyente ante el pueblo sería quien:

“elaborarían una Constitución digna, la Constitución que viniera a calmar un tanto el cansancio, aquella fatiga que desde 1810, desde iniciada la revolución viene pensando sobre los verdaderos hijos del pueblo” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 41).

La restructuración nacional que se buscaba tenía como base la construcción de instituciones sociales capaces de encausar “las energías patrias por un sendero de progreso, de armonía y de paz” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 41), y para ello se requería de estructuras jurídicas que permitieran cimentar las bases de un

nuevo Estado para favorecer la integración política y social de todo el pueblo mexicano que tanto se había buscado con anterioridad.

Pese a ello, dentro de algunos sectores de la sociedad mexicana, así como algunos sectores académicos, la afirmación de que la Constitución de 1917 era una constitución completamente reformada y nueva era una mentira, pues estos consideraban que las reformas realizadas a los artículos no eran suficientes para establecer como supuesto el triunfo de los ideales revolucionarios plasmados en la letra de la ley, sin embargo Palavicini, que en un principio propugnaba sólo por seguir el proyecto carrancista afirmaría que se trataba de una nueva constitución, ya que se encontraba:

“Formada por 128 artículos, quedan muy pocos si haber sido reformados, mientras se han suspendido los demás por diversas razones, y entonces esperamos que los que no estén enamorados crónicamente de la mentira, nos darán la razón” (Palavicini, 2014, pág. 760).

5.2 Valores axiológicos en la Constitución de 1917

Como se mencionó anteriormente las Constituciones son depositarias de ideales y de valores a través de los cuales se busca cimentar las instituciones de un Estado; en ellas existe un fuerte contenido axiológico, en los cuales “los bienes constitucionalmente tutelados son entonces «valores concretos», objetos o situaciones que el Constituyente ha estimado valiosos, a los cuales atribuye cualidades que para él hacen deseable su realización, disponiéndola por lo tanto con el mayor vigor jurídico” (Sánchez Gil, 2015, pág. 648).

El texto constitucional es pues la ley fundamental en la que no sólo establece en el Estado la organización política, social y jurídica a través de las cuales se consagran y garantizan ciertos

derechos, sino que su contenido responde “a la consecución de muy diversos «estados finales» ideales, proyectados a partir de la experiencia histórica para ser introducidos en el mundo real” (Sánchez Gil, 2015, pág. 648).

Los valores constitucionales a diferencia de otro tipo de valores se pueden nombrar como *valores superiores* en tanto que estos están dentro del Derecho para guiar y establecer coerciones al comportamiento humano, pero a su vez “se trata de un «orden de valores superiores», en cuanto dichos «modelos» deben imperar a lo largo y ancho del ámbito jurídico” (Sánchez Gil, 2015, pág. 649), por lo que cualquier acción surgida de este ámbito tiene necesariamente que adherirse a ellos, y ya que una de las características de los valores es que los mismos deben de *hacerse valer*, los mismos funcionarán como principios de optimización tanto en el ejercicio jurídico como gubernamental.

La objetividad de estos valores constitucionales deriva de que no rigen relaciones subjetivas, sino que a través de su positivación buscan regir en la realidad, pues son “fines supremos del ordenamiento totalmente considerado” (Sánchez Gil, 2015), no se trata así de casos esporádicos o especiales, sino que son fundamento de las instituciones y del propio comportamiento del hombre en sociedad como contrato social.

Sin embargo, no hay que olvidar que el Derecho está condicionado por “los «valores culturales» de una época y sólo en base a este condicionamiento se pueden formar normas jurídicas fundamentales pero surgidas histórico-culturalmente como «forma concreta de una cultura jurídica»” (Serrano Villapañe).

Como se mencionó anteriormente a diferencia de la Constitución Española o la de Polonia, la Constitución de 1917 carece de postulados explícitos acerca de los valores que están

contenidos en ella, sin embargo, el hecho de que se encuentren implícitamente en la constitución no les resta valor, ya que de igual manera suponen estados ideales que deben de ser llevados a su realización en el mundo real.

Debido a que los valores no se encuentran de manera explícita en la Constitución, en este trabajo se usó la hermenéutica en el sentido de interpretar para develar el contenido de los mismos como herramienta para acceder a su conocimiento acudiendo a fuentes históricas, en específico a los Diarios de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917 porque en este documento permite conocer el desarrollo de las discusiones que derivaron en el establecimiento de la Constitución del 17, teniendo que perspectiva de los Diputados Constituyentes “las leyes deben ser lo suficientemente sabias para que lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la realización de la magna obra civilizatoria” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 547).

5.3 La promesa revolucionaria de Justicia Social

Fruto de las situaciones que hicieron estallar la Revolución Mexicana y apoyado por aquellos que se consideraban así mismos anarquistas pero que se unieron al Partido Liberal Mexicano, el Constituyente de 1917 tuvo hacia el pueblo un compromiso con la Justicia Social,

La noción de justicia social aparece en la doctrina en 1843 a manos de Luigi Taparelli, que diferenció a la misma de la justicia conmutativa y de la justicia distributiva, en tanto que la justicia social, es un tipo especial de justicia que se da entre los hombres, más allá de las relaciones con el Estado. De base iusnaturalista, y de inspiración tomista, este concepto aparece en el mundo no sólo para ser base de lo que sería la Doctrina Social de la Iglesia,

sino también para pretender expresar las condiciones de justicia necesarias entre los hombres en sociedad, ya que la misma es “justicia entre hombre y hombre” (Fernández, 1955) e implica una perfectísima igualdad.

Dentro de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, el concepto fue adoptado y utilizado por el papa Pío XI para establecer la base de lo que se considera una justa repartición, en tanto que la justicia social es la “justicia de privado a privado, no es justicia pública de súbditos para con la autoridad, o de ésta para con los súbditos” (Fernández, 1955), y está vinculada con el derecho comunitario, entendido este último como el derecho de acceder a los bienes terrenos, y la misma debe fundarse en los supuestos de que todos los hombres requieren armonía y la satisfacción de sus necesidades, cuestiones que sólo se alcanzan a través de la distribución del bien común. Dentro de las concepciones de la Doctrina Social de la Iglesia, la justicia social sigue manteniendo vigente su origen iusnaturalista, y corresponde a una noción de equidad.

Concepciones más contemporáneas de justicia social, consideran a la misma como la justicia encargada de hacer valer la igualdad fundamental entre los hombres y cerrar el paso a las inequidades reales, por lo que “si la justicia social es justicia genuina y sus demandas son genuinas” (Burke, 2011, pág. 25), el precio para que estas demandas se convierten en una realidad debe de ser pagado, por lo que establece que la misma requiere de ciertos elementos necesarios para materializarse en sociedad y estos son la solidaridad y subsidiariedad.

Autores como Rubio y Rubio consideran que el “bien común y justicia son, así los dos lados de una misma medalla: Valor justicia realizado=Bien común” (1945, pág. 192), y

la justicia social, entendida en lo referente a todo lo relacionado al orden social “en último término se funda en la noción de bien común, siendo justo socialmente, en consecuencia, todo aquello cuyo ser o no ser esté de acuerdo con las exigencias del propio bien común” (Rubio y Rubio, 1945, pág. 212).

En México, los discursos expresados por las principales figuras de la Revolución Mexicana tienen como tópico común una promesa de justicia social, como refiere Cuéllar Moreno “la responsabilidad revolucionaria estribaba en la confrontación del presente con un ideal por venir de justicia social” (2018), ideal que se vio impulsado dentro del Constituyente de 1916-1917 y que se vertebró a través de las garantías individuales y sociales que se establecieron en la Constitución de 1917.

La promesa de justicia social no tiene su base en las ideas liberales que en el momento del estallido de la Revolución Mexicana eran bandera de los pensadores políticos liberales en las cuales “la única alternativa posible [...] era el liberalismo concebido esencialmente en términos de democracia política (no económica), de justicia administrativa (no social)” (Ferrua, 2012, pág. 34), sino que tiene su base en las ideas de corte comunistas y anarquistas impulsadas por los hermanos Flores Magón o por el anarquista Praxedis G. Guerrero, que tenían como bandera ideológica “la libertad económica, política y social del pueblo mexicano” (Ferrua, 2012, pág. 117), y que fueron impulsadas desde la propaganda liberal en las distintas publicaciones que estos hacían, y que se presentaron en torno a la bandera del Partido Liberal Mexicano; las razones para adherirse a este grupo escribe Ricardo Flores Magón es que de haberse pronunciado como anarquistas “nadie, a no ser unos cuantos nos habrían escuchado” (Ferrua, 2012, pág. 37).

Las diferentes influencias de estas ideas dentro del Partido Liberal Mexicano influenciaron la propaganda liberal y llevaron a que:

“Los revolucionarios mexicanos nunca creyer[an] realmente en la libertad; eran partidarios de la justicia social. De igual manera, nunca apostaron a favor del individuo o del ciudadano; se inclinaron por las masas (por las masas organizadas)” (Condés Lara, 2015, pág. 516).

El propio Carranza como C. Primer Jefe en el Constituyente de 1916-1917 declaró en su discurso del 1 de diciembre de 1916 que los pueblos latinoamericanos desde su independencia han oscilado entre dos extremos: la dictadura y la anarquía, pero en ambos extremos se encontraba la idea de que a la libertad liberal y al individuo, como menciona Condés Lara (2015), se le puede asociar “con las desigualdades del Régimen de Porfirio Díaz o, en otro polo, con anarquía e incapacidad para transformar la realidad social” (pág. 516).

Por lo que para establecer un régimen que cumpliera con esta promesa de Justicia Social, tendría primero que establecerse un nuevo régimen parlamentario, que bajo la promesa de que este sería un buen gobierno, la sociedad civil lo aceptaría bajo el supuesto de que:

El “progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político; porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione el derecho de los demás” (Sesión Inaugural. 1º de Diciembre de 1916, 2016, pág. 400)

La Constitución del 1917 se presenta ante nosotros no como un dique sino como un cauce, que con la positivación de los ideales y valores surgidos y defendidos por las distintas facciones revolucionarias, establecía en ella las directrices de la actividad del gobierno, el “amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades que se componen el agregado social, es incuestionable que el primer requisito que debe de llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre” (Carranza, 2014).

México fue pionero en el constitucionalismo social al incluir en el cuerpo de nuestra Carta Magna garantías individuales y sociales, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del Congreso Constituyente y del establecimiento de las garantías que tenían como objetivo “igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad” (Taparelli, 1843), es decir, cumplir con lo que se establece en la doctrina de la Justicia Social, los reclamos por la misma siguen surgiendo de la profunda desigualdad que se vive en nuestro país.

En ese sentido “los derechos sociales se sustentan en la protección de la seguridad social de los individuos, buscan satisfacer ciertas necesidades básicas y comunes a todos los individuos” (Lucho González & Cepeda Rincón, 2018, pág. 224) y su propio fundamento los vincula de manera inmediata a la justicia social, que es definida por León Olivé como “la distribución de beneficios y cargas en una sociedad de seres racionales” (Olivé, 2008, pág. 126), distribución que es necesaria en tanto que “no basta que el hombre nazca en condiciones de igualdad y libertad, sino que es necesario que se establezcan derechos que lo protejan en su interacción social” (Lucho González & Cepeda Rincón, 2018, pág. 224).

Carranza expresó en sus discursos que la base del funcionamiento de la justicia estribaba en una correcta gestión administrativa ya que esta permitía “asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley” (Carranza, 2014, pág. 24). Esta gestión administrativa a la que hizo el llamado tenía una característica peculiar que aún sigue estando muy lejos de aplicarse en la realidad, pues para Carranza era una necesidad “llamar al pueblo a participar, de cuantas maneras sea posible” (2014, pág. 24) en esta actividad.

Para cumplir con los objetivos de la nueva Constitución y poder garantizar los derechos otorgados en la letra de la ley, se llevó a cabo la creación de diversos organismos estatales que tuvieron como misión materializar la distribución de beneficios y cargas, pues todo Estado debe contar con cierta cantidad de instituciones u organizaciones para llevar a cabo la gestión pública, mismas que conforman lo que denominamos administración pública.

5.4 Escala de valor

Para muchos autores la Revolución es un proyecto inacabado, que si bien consiguió a través de la promulgación de la Constitución de 1917 establecer dentro de la Ley suprema los valores e ideales por los que se buscaba la reforma del Estado de Derecho Mexicano, la reforma a la ley no traería inmediatamente cambios sustanciales, para ello se requeriría de un largo proceso que incluye no sólo la discusión en el Constituyente, sino proyectos políticos de carácter social de espíritu reformador como el que emprendería Vasconcelos con respecto a la educación, el cual como miembro de Administración Pública en su figura de Secretario de Educación Pública, impulsó diversas gestiones para consolidar el derecho a la educación, y por tanto cumplir con una de las variables de la justicia social de su época.

En palabras de Praxedis G. Guerrero:

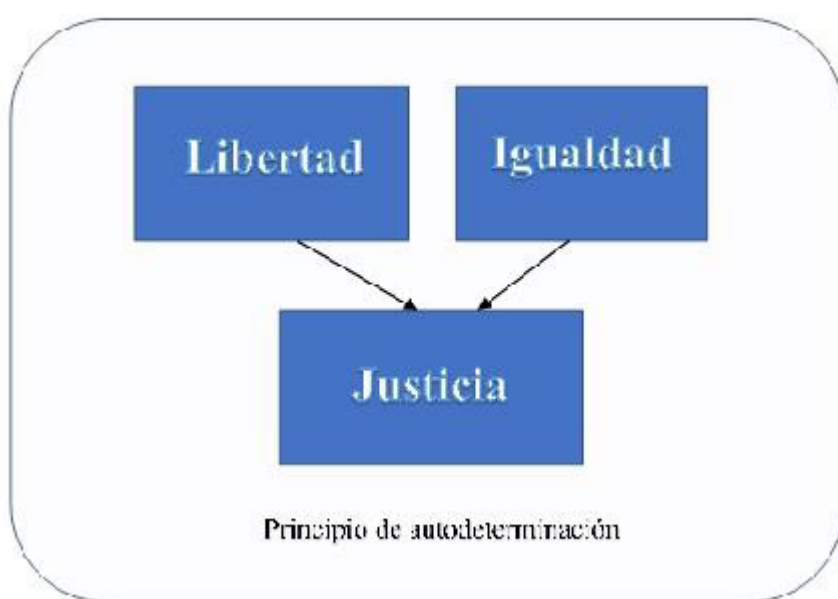
“No crea que la revolución acabará con la caída de Díaz. Escuche bien durará por muchos años, se tendrá que luchar mucho; el pueblo se despertará y se volverá ambicioso [...] debemos imprimirle a la revolución una directiva social; si el pueblo de México no siente de inmediato los beneficios de este movimiento, caerá en poder de un caudillo cualquiera que tratará de establecer una nueva dictadura” (Ferrua, 2012, pág. 76).

Es innegable que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 expone dentro de la misma los principios modernos en torno a la libertad e igualdad, sin embargo el equilibrio de estos valores es antitético ya que “la libertad individual entendida en el marco liberal es incompatible con la visión de la igualdad” (Lucho González & Cepeda Rincón, 2018, pág. 230) entendida como en el marco de la justicia distributiva. En este sentido y siguiendo la promesa de justicia social revolucionaria al momento de establecer la escala de valor de la Constitución de 1917 se deberá valorar cuál de los valores es el supremo, pues de ello dependerá su relación con los otros valores, en el sentido de que el mismo deberá de valer sobre los demás.

Uno de los grandes cambios que intentaron darle a la Constitución del 17 fue separarla de la Constitución de 1857, ya que se consideraba a esta exclusivamente liberalista “porque representaba a la escuela liberal francesa de 1830, según la cual el hombre era libre de hacer todo lo que quisiera”, para los Diputados Constituyentes era menester proteger la igualdad y la justicia por lo que habría que limitar la libertad, pues sólo de esta manera se podía dar “al pueblo la justicia de que tiene hambre y sed”, así como sólo así se podría establecer una igualdad de condiciones para los ciudadanos.

Las protestas de los representantes obreros se hicieron oír en el Constituyente, al exclamar que estos, al igual que los periodistas jamás habían visto justicia, ni se les había tratado como iguales y que se debía de entender que debía ser prioridad de esta Constitución proteger a todos aquellos que no estaba en igualdad de condiciones. Podemos establecer de todo ello la siguiente escala de valor:

Escala de valor de la Constitución de 1917



Todas estas consideraciones sobre qué era lo más importante y sobre qué base se debía de dar la normatividad interna permiten establecer una escala de valor en la cual la igualdad y la justicia son los valores predominantes, ya que las condiciones a través de las cuales los derechos naturales de los hombres deben de ser garantizados por el Estado, estableciendo condiciones de igualdad y libertad para todos ellos, buscando un equilibrio entre lo social y lo individual.

La igualdad en ese sentido, pretende establecer la guía para el reconocimiento de la condición intrínseca del hombre, en la cual, como *iguales*, todos poseemos los mismos derechos, y la dignidad debe de ser reconocida ante cualquier eventualidad, es por ello, por ejemplo que para el Constituyente resultaba necesario establecer que al ser todos los hombres iguales, estos debían de gozar de todos los derechos y libertades, y se establecía la abolición de la esclavitud y la libertad y garantía de derechos para todos en el territorio.

El siguiente valor de la escala es el de la libertad, entendida esta tanto en su concepción de garantía individual y social, la libertad tiene como límite el otro y no puede bajo ninguna circunstancia romper el estado de igualdad que debe de existir entre los hombres para formar una sociedad, es por ello que por ejemplo, el artículo 7mo. establece que los límites a la libertad serán “el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”, y el artículo 16 establece a su vez que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones a menos que exista un procedimiento fundado en su contra.

En la parte inferior de la escala encontramos el valor de la justicia, que tiene como característica que está ahí para garantizar, en caso de daño, condiciones en las que se pueda restaurar tanto las condiciones de igualdad para los hombres como las libertades de los mismos. Se trata de un valor muy complejo pues el mismo no sólo contiene ideales acerca de lo que debe de ser la justicia, sino que establece mecanismos a través de los cuales se debe de recuperar el equilibrio cuando se rompa, por lo que actúa como mediador entre los valores anteriores, que por su naturaleza antitética requieren de la justicia para restablecer el equilibrio, un ejemplo de ello es la mención que se hace con respecto al artículo 7 en el cual se establece durante su discusión que es menester del Estado cuidar de las condiciones de

justicia cuando exista un supuesto delito protegiendo ante todo la igualdad de derechos y las libertades individuales.

Por último, dentro de la escala encontramos a la autodeterminación como principio, la misma fue base para todos los cambios que se dieron a la Constitución de 1856 y que dieron paso a la creación de la Constitución de 1917. Este principio está depositado en los derechos de los ciudadanos a tomar parte en los asuntos políticos del país (Art. 9°), y tiene su mayor reflejo en el artículo 39 a través del cual se establece que “la soberanía nacional reside originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”.

Ahora bien, podría parecer que antes incluso de los valores ya mencionados fuera más relevante la autodeterminación como valor, como se estableció en relación a la escala axiológica de la Constitución de 1824, en donde se convirtió en el valor supremo en tanto permitía la formación de una nueva nación, sin embargo, el contenido de la autodeterminación cambia en la Constitución de 1917 porque en la misma se establece que esta funciona como un principio que existe para salvaguardar los valores de igualdad, libertad y justicia, por lo que permite modificaciones a la forma de gobierno para que este sea considerado *bueno*, pero no la conformación de un nuevo Estado.

5.5 Valor de la igualdad

Hablar de igualdad y libertad como parte de la justicia social es hablar de valores antitéticos en tanto que los mismos pueden llegar a restringirse entre sí, pero que en el caso específico de la Escala de valor de la Constitución de 1917 se encuentran en el mismo nivel, por lo que, la justicia como valor que los sostiene tiene que funcionar como valor que permite mediar y llevar a la realidad una verdadera justicia social.

Existe toda una corriente teórica que equiparan la justicia con la igualdad, y que señalan que una verdadera justicia social debe de ser entendida como la búsqueda de igualdad no sólo de oportunidades para todos los hombres, sino de una igualdad que fuera capaz de transformar el tejido social para convertirlo en una verdadera sociedad.

Durante el Constituyente de 1917, el establecimiento de mecanismos que permitieran que la igualdad fuera una realidad era una prioridad, en tanto que para los diputados Constituyentes su tarea era “que la Constitución de este Congreso le dé al pueblo mexicano, sea salvadora; que de una vez por todas, ratifique cuales son las necesidades efectivas del pueblo, y de ninguna manera vaya a darle una ilusión con principios enteramente falsos” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 551).

Prueba de esta búsqueda de igualdad entre los ciudadanos es que durante la 8va. Sesión ordinaria del Constituyente se presentó una moción por el C. Luis Espino —que si bien no se aprobó pues fue presentada fuera de tiempo, si fue apoyada dentro de la dinámica del Constituyente— para suprimir el uso de grados militares, ya que el uso de jerarquías que diferenciaban a unos Diputados de otros iba en contra de la tarea que les había sido encomendada, por lo cual al título de diputado solo “se le antepondrá la honrosa designación de ciudadano” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015).

Esta búsqueda de igualdad se normativiza en el artículo 12 en el cual se establece que en México “no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”, todo esto con el fin de que todos sean iguales y no exista distinción entre ciudadanos, logrando así una igualdad en el trato entre ciudadanos, ya que se considera una condición necesaria para el ejercicio de las garantías establecidas en la Constitución.

Dentro del Constituyente surge la idea de que para proteger las instituciones sociales es necesario “garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 545), estableciendo así una igualdad de condiciones, estos derechos están contenidos dentro de las garantías individuales citadas en el primer artículo de la Constitución.

Cabe aclarar que si bien dentro de muchas concepciones doctrinales se considera que las garantías individuales más que ser de carácter igualitario son de índole liberal, la formulación de las mismas en el artículo 1° era la de la búsqueda de las mismas condiciones para todos los hombres, de ahí que revista de gran importancia la frase “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución”; Martínez Rafael propuso que al contenido de este artículo se agregara que las garantías no eran de ningún modo renunciables, pues de este modo se cerraba la puerta a las infamias que pudieran darse contra el hombre.

Incluso durante el trascurso del constituyente hubo un suceso en el cual un gendarme no permitía a las personas que no vestían apropiadamente ingresar a las sesiones ordinarias que eran de carácter público, a lo cual los diputados expresaron que creían injustificado que no se permitiera la entrada a gente humilde “toda vez que, siendo este un lugar de educación cívica, el venir aquí podría servir de instrucción para el porvenir”. 14-2

La educación establecida en el artículo 3° representa también la búsqueda de condiciones de desarrollo óptimas para todos los ciudadanos, al establecerse esta laica y gratuita buscaba afianzar el desarrollo natural de la sociedad mexicana sin los límites que se imponían a la naturaleza del hombre desde la educación religiosa, la educación laica y racional promueve “la evolución integral y armónica de cada uno de sus elementos en pro del mejoramiento

progresivo de la comunidad” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 547).

5.6 Valor de la libertad

Una de las ideas que tienen más difusión con respecto al contenido de la Constitución del 17 es que se trata de una Constitución de origen liberal, y que por ende los preceptos que la sostienen tienen ese mismo corte ideológico, sin embargo, dentro de la concepción de liberalismo en México se unieron diversas ideologías, y si bien el liberalismo mexicano sí tiene influencia de las ideas liberales de las revoluciones europeas y de la estadounidense, también lo tiene de la concepción socialista y anarquista, que propugnaba en primer lugar la búsqueda de una igualdad que se anteponía a las cuestiones de índole liberales individuales.

A pesar de ello, el valor de la libertad se encuentra muy presente dentro de la conformación de la Constitución, ya que por ejemplo en el artículo 2 se estableció una condena a la esclavitud, puesto que los Diputados Constituyentes consideraban que “la libertad es la síntesis de todos los derechos naturales” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 545), y que en ella se encuentra la condición necesaria para el disfrute de todos los derechos del hombre, de índole individual que se verían cobijados por la Constitución, como lo sería la libertad de culto, de expresión, la libertad de decisión con respecto a la elección del trabajo, la libertad a la manifestación de ideas, de reunión y la libertad de tránsito.

La libertad como valor en la Constitución de 1917 está vinculada a un iusnaturalismo, dentro del cual las garantías mínimas que debe de ofrecer el Estado son el único medio de que los hombres puedan desarrollarse en sociedad, sin embargo, bajo el marco de que cualquier tipo de manifestación de la libertad tiene como límite el otro y que si:

“la misión del poder público es procurar a cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás; y de este principio, aplicando el método deductivo, llega a la conclusión de que es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar la conservación de la sociedad o a estorbar en su desarrollo” (Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I, 2015, pág. 545).

5.7 Valor de la justicia

El valor de la justicia es el valor que se encuentra debajo de la Igualdad y la Libertad en la escala axiológica en la Constitución de 1917, y si bien prácticamente desde las teorías positivistas en el cualquier ordenamiento jurídico, la marcan como valor superior en tanto fin último del derecho, y tal y como refiere Rubio y Rubio existe de manera a priori una relación entre el ser y el deber ser, lo que lleva que aquellos valores que se consideren de forma positiva tienen referencias con respecto a lo justo, este valor está determinado por el contenido de sus superiores, y por tanto para la realización de los primeros, este debe de funcionar como medio, en ese sentido:

- a) Es justo todo ser de algo debidamente positivamente.
- b) Es injusto todo ser de algo no debido
- c) Es injusto el no ser de algo debido
- d) Es justo el no ser de algo no debido

El valor de la justicia se presenta así no sólo como un valor recurrente en cualquier Constitución de distintos momentos históricos determinados, sino en general como fundamento del derecho, y todo acercamiento a los valores contenidos en los ordenamientos jurídicos se da a través de la idea de justicia y es a través de la Teoría de la justicia en donde es posible encontrar “elementos valiosos para comprender la asimilación de la formulación

contemporánea de la introducción de determinadas concepciones éticas en el Ordenamiento jurídico y sobre todo, a través de que vía se proponen las inclusiones y omisiones” (Llamas Cascón, pág. 20).

En el Constituyente de 1917 podemos observar con claridad diversos mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico destinados a que se conservara la justicia en la sociedad, entre ellos por ejemplo los mecanismos destinados a procurar justicia como los establecidos en los artículos del 13 al 18, en donde se concibieron los mecanismos a través de los cuales se llevarían a cabo los juicios, y por lo tanto se procuraría justicia.

La justicia en la Constitución de 1917 aparece como una forma de restablecer el equilibrio, planteando con ello, qué es lo que corresponde a cada individuo, cómo y cuáles son los medios disponibles para la salvaguarda de sus bienes, su integridad, sus garantías individuales y sus derechos.

Ahora bien, su materialización y su realización depende en gran medida de los valores que se encuentran arriba de ella, en tal sentido que “la situación de la justicia como valor mediador y armonizador compromete desde el individuo como ser aislado hasta el conjunto del Estado como gran cuerpo social” (Llamas Cascón, pág. 87) que debe de cumplir en lo individual y lo colectivo con un papel específico que permita se materialicen los valores constitucionales en lo factico.

La justiciabilidad del propio valor de justicia exige no sólo la concreción de un fin teleológico, sino que implica capacidades jurídicas, políticas y bienes materiales que permitan que la misma se concrete, por lo que se requieren de la formación de estructuras mínimas en el Estado, necesarias para que este valor pase a realizarse.

Por lo que, si la promesa de justicia social revolucionaria implicaba algo no sólo se trataba de la justicia, por sí misma, sino que implicaba un *qué*, un *a quién* y un *cómo*, establecido primeramente de la valoración entre igualdad y libertad, que daba contenido a la justicia, pues se debía de conocer si resultaba más importante proteger la libertad o la igualdad como valores superiores en la Constitución, conformándose así no sólo como un valor, sino como un valor mediador de los valores en la escala de valor constitucional.

5.8 Principio de autodeterminación

Como se mencionó anteriormente, uno de los componentes de la escala axiológica de la Constitución de 1917 es el principio de autodeterminación, entendiendo por principio un mandato de orden general que tiene como función ser guía de los valores concretos, y si bien expresa elementos esenciales del Estado como lo son, en este caso, la propia soberanía, la elección de forma de gobierno y del orden social a establecerse su paso a la realidad depende de las posibilidades jurídicas políticas y fácticas en un momento determinado, es decir, como principio de optimización, la autodeterminación “trataría de incrementar la densidad de esta red compleja de interacciones, y de hacer de modo que la canalización de las demandas procedentes de la sociedad oriente las decisiones políticas en un sentido que incrementen la autodecisión política del sistema en su conjunto” (Letamendía, 2003).

5.9 Valores axiológicos en la reforma Constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos

En México la Constitución es la norma suprema y fundamental del país, pues ella es “la base sobre la que se sustenta todo el derecho positivo, al establecer normas torales que rigen la vida del Estado, su organización y las relaciones de las autoridades entre sí y frente a los gobernados” (Burgoa Orihuela, 2017); aun con la incorporación del control difuso de

convencionalidad tras la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en la contradicción de tesis 293/2011 la supremacía constitucional en el bloque de constitucionalidad que tras la reforma al artículo 1ero incorpora los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos que hayan sido ratificados por México.

La propia reforma antes mencionada muestra la necesidad de incorporar cambios que con solidez jurídica permitan concretar los valores y principios establecidos en la Constitución a través de reformas de Estado, con respecto a las que están sustentadas en reformas constitucionales. Borgua Orihuela menciona que se debe seguir el principio de rigidez constitucional, refiriéndose al conjunto de formalismos que es necesario cumplir para llevar a cabo una reforma. Estos formalismos tienen su fundamento constitucional en el artículo 135, que establece:

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Por lo que corresponde al Constituyente permanente llevar a cabo las reformas necesarias para que la ley suprema del Estado este acorde a las necesidades sociales de un momento

histórico determinado, pero “los citados órganos no pueden cambiar la esencia de la constitución al punto de transformarla en una nueva mediante la alteración, supresión o sustitución” (Burgoa Orihuela, 2017) de los principios contenidos en ella. De esta manera:

“El concepto de «reforma» entraña necesariamente una modificación parcial, puesto que si fuere total, se trataría de una sustitución o transformación. Una reforma es algo accesorio a algo principal, que es precisamente su objeto; por consiguiente, cuando se elimina lo principal, la reforma no tiene razón de ser” (Burgoa Orihuela, 2017).

El constituyente retiene esta función de reformar debido al principio de soberanía, que, si bien reside originariamente en el pueblo, esta misma es la fuente del poder público, que como mencionamos anteriormente en México toma formas muy específicas porque el país es un Estado democrático, pero la democracia de este es representativa; por lo que las reformas de Estado serían equiparables a lo que Diego Valadés refiere como “reforma institucional para la consolidación democrática” (Valades, Constitución y reforma de Estado, 2003, pág. 126).

La naturaleza misma de los Derechos Humanos aun es discutida por muchos teóricos, sobre ella podemos decir que tiene una base racional, ya que como menciona Pablo de Lora “los derechos humanos presuponen que podemos aportar razones de nuestra conducta” (de Lora, 2005, pág. 144), que a diferencia de otro tipo de derechos, tienen desde la visión occidental, un carácter de universal, y desde las prácticas institucionales el carácter de perfeccionables.

Villoro menciona que “podemos decir que «los derechos humanos» son el reconocimiento por el Estado de necesidades y valores del hombre que permiten su constitución” (Villoro L.

, ¿Crisis del Estado-nación?, 2006, pág. 253), pero aún quedan al aire la fundamentación de los mismos.

La reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos trajo consigo un cambio en el paradigma constitucional; visto desde una perspectiva axiológica historicista los cambios que se dieron con ella tienen un gran impacto en cómo se configura la escala de valor en la actualidad, ya que si bien como menciona Campa Mendoza, la Constitución de 1917 fue “una de las Constituciones más adelantadas a su tiempo, donde ya se contemplaban garantías individuales, sociales que incluyen los Derechos Humanos.” (Campa Mendoza, 2017, pág. 24), la escala de valor establecida a través del Constituyente no corresponde a la que se estableció en las Declaraciones de Derechos Humanos a través de su propio constituyente.

Un acercamiento hermenéutico a los debates de los primeros constituyentes y a la Carta Magna nos aproxima a la comprensión de que muchos de los valores que se expresan y proyectan a través de la misma, constituyen el núcleo de los mismos que se encontraban ya impresos en las ideologías y preocupaciones que llevaron a los constituyentes al desarrollo concreto de esta publicación, pues como menciona Villoro “una nación es un proyecto compartido. Como todo proyecto, implica la elección de valores comunes; no son siempre conscientes, pero permanecen como supuestos de la asociación” (Villoro L. , ¿Crisis del Estado-nación?, 2006, pág. 251).

La historia de las ideas de la doctrina constitucional en México es muy rica y variada entre épocas, y en ella podemos identificar que, si bien “el Constituyente de 1917 no pensó en derechos humanos, la concepción de las garantías individuales refirió sin duda a esos

derechos básicos inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo” (Armegol Alonso, 2014, pág. 156).

Al igual, durante la constitución de las Declaraciones de Derechos Humanos se buscó introducir dentro de sus preceptos valores específicos, que sus constituyentes consideraron los adecuados para resolver las problemáticas a las que se enfrentaban los países después de las guerras mundiales.

La positivación de los valores emanados de la Revolución mexicana y los introducidos en la constitución a través de la reforma del 2011, constituyen para la axiología la posibilidad de visualizar los valores objetivos que la Constitución prescribe a la sociedad, ya que “un bien objetivo será perseguido por todo aquel que haya tenido conocimiento de él, no a causa de cualquier hecho circunstancial por el que esa persona, o cualquier persona, esté de tal modo constituida que desee su fin, sino simplemente porque el lleva de algún modo incorporada la obligatoriedad de ser perseguido” (Mackie, 2000, pág. 44).

5.9.1 Valores axiológicos en las Declaraciones de Derechos Humanos

Alfonso Charcon Mata en su texto *El concepto de dignidad humana como fundamento axiológico de los derechos humanos* esboza una teoría fundacional de la base primordial de los derechos humanos desde una visión axiológica, que como toda teoría axiológica, culmina en una concepción ética, sin embargo, se aventura a seleccionar sólo un valor, en su caso la dignidad humana como fundamento de todos los derechos humanos, lo cual resulta ser algo muy arriesgado, e incluso confuso, en tanto que, el concepto de dignidad humana encierra cierto halo de ambigüedad.

La misma naturaleza de los valores, como representantes del “*deber ser*”, y no del “*es*” en tanto que “emanan del deseo de ser, de las posibilidades o potencialidades más propias del ser humano, aquellas que lo realizan en su propia “humanidad”, en su propio ser” (González, 2006, pág. 37) nos impediría identificar a la dignidad humana con un valor, ya que equivale a restarle a la misma su cualidad inherente al ser humano, pues en tal caso, la dignidad representaría sólo un fin de los derechos y no el fundamento de los mismos.

Díaz Revorio en un afán de encontrar concordancia en los valores superiores establecidos de manera explícita en la Constitución Española, refiere que los valores contenidos dentro de la Declaración de Derechos Humanos son la justicia, la paz, la dignidad y la libertad, y a través de estos valores se debe de dar la configuración del Estado de Derecho y del Estado Social, que ya se ha establecido sin triunfo en España.

Sin embargo, como se establece en el trabajo *Derechos Humanos y Constitucionalismo: una perspectiva desde la axiología*, y al contrario de lo que establecen los anteriores autores:

“la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Preámbulo que tiene como objeto proteger *el valor de la persona humana* a través de la concreción de la libertad, la justicia y la paz, todo ello a partir de la existencia de una *dignidad humana* que funge como fundamento del reconocimiento de todos los hombres como miembros de la familia humana” (Cepeda Rincón & Lucho González, Derechos Humanos y Constitucionalismo: una perspectiva desde la axiología, 2018).

Es decir, la libertad, la justicia y la paz sólo son condiciones necesarias, y no valores sobre los que descansa el fundamento de los derechos humanos; la dignidad humana, es más bien

la identificación *esencial* que debe de haber para distinguir a la familia de lo humano, y diferenciarla de cualquier otra categoría.

Desde ese aspecto resulta imposible establecer una escala de valor para los derechos humanos, ya que los mismos contienen en sí un valor absoluto, que debe de ser protegido ante todas las adversidades; lo que sí es posible establecer dentro de esta categoría de análisis es la conceptualización de la Tiranía del Valor, ya que como establece Schmitt el valor superior debe de ser válido y hacerse valer sobre todas las cosas, de ahí la explicación de que los organismos supranacionales pongan tanto énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos dentro de los Estados y para ello se hayan valido de la creación de órganos judiciales —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos— con el fin de hacer valer los mismos

Ahora bien, adicionalmente al problema de establecer una fundamentación axiológica de los derechos humanos seleccionando una escala concreta de valores, encontramos que muchas veces el valor proclamado en el discurso no se traduce siempre en prácticas políticas consecuentes, sobre todo en el tema de lo público, que ya no versa sólo de la intervención estatal, sino en estas nuevas formas de discurso y de práctica activa de la ciudadanía como sociedad civil, llevándonos a la falta de una justificación de la praxis de los derechos humanos, es decir a una falta de justificación de la ética que corresponde a nuestro actuar dentro de esta esfera pública, en lo común a todos.

Los derechos humanos, de inspiración kantiana, tienen su origen en las concepciones sobre los Derechos del Hombre y el Ciudadano planteadas en la Revolución Francesa; sin embargo, los derechos humanos tienen en sí la idea de un constitucionalismo global que “evoca sin duda la vieja utopía de un Derecho cosmopolita, de una paz perpetua bajo un gobierno

mundial asentado en el respeto universal de los derechos humanos y en la cooperación entre los pueblos” (Prieto Sanchís, 2007, pág. 234).

En México la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos trajo consigo cambios no sólo en la *praxis* del derecho, ya que, desde el punto de vista axiológico, esta reforma incorporó los valores propios que les dieron sus legisladores a través de las normas contenidas en los tratados internacionales. Con ello, también se incorporaron criterios y principios que protegen los valores de los derechos humanos a través de sus normas, pues a raíz de la reforma “no sólo se estableció un catálogo de derechos, sino que el binomio derecho-obligaciones creado por sendas normas jurídicas, no le [son] atribuidos a los individuos, sino a los Estados” (Estrada, 2016, pág. 92).

Autores como Díaz Revorio asumen que los valores contenidos en la Declaración de Derechos Humanos son la libertad, la justicia, la paz y la dignidad; ya que para este autor “sintetizan todos los derechos fundamentales” (Díaz Revorio, 2018). El aceptar estos preceptos como valores le permite afirmar que existe una coincidencia con el artículo 1.1 de la Constitución Española puesto que, estos coinciden parcialmente con los valores del derecho europeo.

Con respecto a la dignidad como valor, Díaz Revorio señala que se trata de un valor estrechamente ligado al Estado de Derecho y al Estado social, pues en él se encuentra el elemento esencial de los derechos fundamentales. La libertad como valor, se presenta para este autor, sobre todo entendida como libertades fundamentales, bases de la justicia y la paz. Si bien considera que la justicia entendida como valor presenta cierta ambigüedad “que permite sus relaciones con ciertos tipos de Estado, o con ninguno” (Estrada, 2016, pág. 92), para dotarle de cierto sentido debe de estar en relación a los otros valores mencionados por

el mismo, siempre y cuando se sitúe en el marco de un Estado democrático y social de Derecho.

Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Preámbulo que tiene como objeto proteger *el valor de la persona humana* a través de la concreción de la libertad, la justicia y la paz, todo ello a partir de la existencia de una *dignidad humana* que funge como fundamento del reconocimiento de todos los hombres como miembros de la familia humana.

La libertad, la justicia y la paz son en esta Declaración condiciones necesarias para el libre desarrollo de la personalidad, es decir, bajo esta perspectiva, dichas condiciones —que bien podrían ser valores—, pasan a convertirse en principios establecidos en el contenido normativo de los derechos humanos para que *el valor de la persona humana* sea protegido. De tal manera, que la libertad, la justicia y la paz —como condiciones necesarias—, no representan en *stricto sensu valores* incluidos en la Declaración, sino que son parte del

“ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción” (Declaración Universal de Derechos Humanos).

Diversos autores consideran que dentro de los derechos humanos existen valores como el de la dignidad humana, sin embargo, diferimos de esta concepción, ya que remitirnos al concepto de valor, es remitirse a algo que debe *hacerse*, y aceptar que la dignidad humana es un inherente, equivale a establecer que esta *no es un valor*, porque la dignidad humana hace referencia a lo que es digno del hombre y no en sí al valor del hombre o de lo humano, por tanto, su carácter de inherente o intrínseca al hombre depende del valor de lo humano, lo digno es lo que es otorgado en tanto *valor de lo humano*, sino que se presenta como una característica deseable y no intrínseca del hombre, ya que:

“el valer implica desde luego, [...] un fortísimo impulso a la realización, el valor ansía sin lugar a dudas su actualización. No es real, pero está referido por cierto a la realidad y acecha en pos de la ejecución y cumplimiento”
(Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, pág. 126).

Para llevar a cabo el cumplimiento de los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establecieron en ella, al igual que en las Constituciones, una serie de normas y principios que se engloban en la noción de derechos humanos, noción que se encuentra a partir de la reforma de 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º Constitucional.

Con la introducción de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, también tuvieron que ser incorporados los principios establecidos por los legisladores de los derechos humanos que, según su valorización, son necesarios para el cumplimiento de los valores que fundan y fundamentan las normas que protegen y garantizan a los derechos humanos.

Esta serie de principios funciona como mandatos de optimización, y tienen como objetivo la concreción de los derechos humanos en cualquier régimen de Derecho. El principio de universalidad en los derechos humanos tiene como objetivo el reconocimiento de todos los hombres como nacidos libres sin distinción alguna con respecto a los accidentes que les puedan ser propios, como color de piel, nacionalidad, sexo o posición económica; así mismo, este principio es la base para que los Estados adquieran obligaciones no sólo con sus ciudadanos, sino con todos aquellos hombres que se encuentren en sus límites territoriales, esto con el fin de que en donde se encuentren se vean velados los derechos que se consideran propios de los seres humanos.

Carbonell menciona que a partir del principio de universalidad los derechos humanos adquieren las características de *no negociabilidad* y *no alienabilidad*, que por una parte implican que los mismos están “fuera del alcance de la lógica neoabsolutista del «mercado» que todo lo traduce en términos de productividad y ganancia” (Carbonell, Los derechos humanos en México. Régimen jurídico y aplicación práctica., 2015, pág. 68) y, por otra, que nadie puede oponerse a que un derecho humano sea ejercido.

Los principios de interdependencia e indivisibilidad hacen referencia a la obligación estatal de no dar preponderancia a ninguno de los derechos humanos, ya que todos se encuentran relacionados y deben de ser aplicados sin una jerarquía, por lo que existe una exigencia a los Estados para que todos los derechos humanos sean garantizados y protegidos al mismo tiempo, es decir no se puede vulnerar un derecho humano en pos de garantizar otro, ni se puede suprimir uno sin afectar a los demás.

El principio de progresividad hace hincapié en el deber de los Estados, implica la gradualidad del proceso en la protección y promoción de los derechos humanos, y en México está

vinculado al “mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarios en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos” (Décima época, Segunda sala, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 215, p. 1298.)

Desde una consideración axiológica, los principios de los derechos humanos, incluido el de la dignidad, presentan como novedad que el establecimiento del *valor de la persona humana*, rompe la estructura clásica de los valores, pues se asume que tal valor es válido para todos los sistemas axiológicos cuando en realidad:

“la identidad de los valores y de su jerarquía no es motivo tampoco para concluir que deben valer para «todos los hombres», o al menos para todos los miembros de un pueblo, iguales leyes normativas morales: antes bien, con los mismos valores morales y con idéntica jerarquía pueden darse leyes diversas” (Scheler, *Ética*, 2001, págs. 310-311).

5.9.2 Mundialización y universalización

Diversos autores concuerdan en que una de las grandes problemáticas sobre los valores que tienen gran repercusión en cómo ellos deben de funcionar como fundamentos de los derechos y del actuar, versa sobre la problemática que se da entre mundialización y universalidad. Baudillard refiere que “la universalidad es la de los derechos humanos, las libertades, la cultura y la democracia. La mundialización es la de las técnicas, el mercado, el turismo y la información” (Baudrillard, 2010, pág. 42) y *si bien entre ambos términos podemos encontrar*

similitudes, esta analogía entre los mismos es engañosa y puede llenar equívocos conceptuales que terminen por afectar la dimensión práctica de los mismos.

Los conceptos de mundialización y de universalización representan para los valores extremos en la forma de contemplar en mundo, ya que el primero sólo los ve como cuestiones técnicas que no tienen valor, porque considera que no tienen un uso verdadero y efectivo en el mundo real, mientras que la universalización de los mismos representa en el plano axiológico una meta común e ideal de realización del ser humano, pues la “universalización [es] una cultura de la trascendencia, de la reflexión del sujeto y del concepto, una cultura con tres dimensiones: el espacio, lo real y la representación” (Baudrillard, 2010, pág. 44). Dimensiones que si bien complejas son proyecciones singulares de un todo, que encierra la vida humana, en su dimensión subjetiva y social.

El "deber ser" como frontera utópica de la realización del ser humano resulta de una conceptualización del ser humano que no es perfectible, sin embargo, una de las principales características que tiene en sí mismos los Derechos Humanos en su practicidad es esta noción de perfectibilidad, y si son los derechos humanos perfectibles debe de serlo también el sujeto que ve en ellos su máxima realización en el plano ideal de lo que es ser humano.

La axiología representa para los derechos humanos una base firme, pero esta debe de entenderse en su totalidad, como una concepción multiobjetiva, la cual es imposible sustentar en un sólo valor, y el universo de valores que sostienen esta idea de derechos humanos, reconoce en sí misma la conceptualización de algo anterior, de algo que es propio y natural para el ser humano, a saber, su dignidad.

En la actualidad desde el campo de la ética, (no quiero decir práctica, porque toda ética que no sea práctica no es ética) han surgido distintas voces que en un afán de establecer escalas de valor seculares intenta aglomerar distintas concepciones del mundo en una "ética mundial", pero como se comentó anteriormente "[...] la universalidad parece en la mundialización. La dinámica de lo universal como trascendencia, como fin ideal, como utopía, deja de existir en su forma cuando se realiza. La mundialización de los intercambios acaba con la universalidad de los valores. Es el triunfo del pensamiento único sobre el pensamiento universal" (Baudrillard, 2010, pág. 42).

5.9.3 Praxis de los Derechos Humanos

Dejando clara esta cuestión conceptual entre lo que son los valores que sostienen a los derechos humanos y sus alcances y consecuencias en cuanto objeto estudio de la axiología, resta exponer, que la relación intrínseca que existe entre la axiología y la ética, no sólo se da a nivel conceptual, sino que es una forma viva, en la que los valores propios de los seres humanos son aplicados al tratar de responder a la pregunta siempre cercana de la ética: ¿qué debo de hacer en esta situación?

Con respecto al orden constitucional y sus alcances, los problemas de su aplicación se hicieron presentes desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución de 1917, Carranza se pronunció de la siguiente manera: “ahora sólo nos queda la obligación de ir a la práctica de la ley suprema que acabáis de sancionar, llevándola en nuestras manos como la enseña que nos hará grandes, justos y respetables entre los demás pueblos de la tierra...” (Campa Mendoza, 2017, pág. 118).

En el caso específico de los Derechos Humanos y la reforma constitucional de 2011 que confiere a todos los tratados que versen sobre derechos humanos un rango constitucional, el problema de la praxis de los mismos puede llevar a justificaciones o argumentos que se alejen de concepciones axiológicas, ergo éticas y que caigan de una manera u otra en concepciones positivistas del derecho, en las cuales la validez jurídica se da en una separación de la concepción axiológica del hombre y se deba de cumplir con lo escrito, sólo porque está en letra. Y ya que “la reforma constitucional en materia de derechos humanos introdujo amplias responsabilidades y obligaciones a todos aquellos que [forman] parte del aparato gubernamental” (Arroyo Vieyra, 2014, pág. 50), quien quiera dar respuesta al correcto ejercicio de los poderes “está necesariamente sujeto a elaborar principios prácticos” (MacCormick, 2003, pág. 161), que no son otra cosa que valores.

Sin tener como base de la praxis de los Derechos Humanos los valores, las concepciones que surgen terminan en un desconocimiento -un no-reconocimiento- de una concepción antropológica del hombre, pues si sólo se tuviera como base de la praxis una concepción positiva del derecho y sólo hay coerción por el castigo a imponer, la naturaleza humana, su ser y su deber ser, son dejados de lado, ya que “si tuviera que tratar a otra persona como un ser incapaz de actuar tal como exige el respeto a sí mismo excepto bajo la presión de la coacción externa o de halagos y recompensas suministradas por mí, negaría *prima facie* a ese otro la oportunidad de respetarse a sí mismo en tanto que ser moral autónomo” (MacCormick, 2003, pág. 178).

5.10 Las dos escalas de valor

Como se explicó anteriormente, la Reforma Constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos sí trajo un cambio en cómo se da la escala de valores de los mismos con respecto

a la establecida previamente en la Constitución de 1917, lo que nos lleva a los dilemas de supremacía constitucional que han sido tratados de solucionar con el principio de convencionalidad.

Con respecto a la superioridad de los valores o cuando se habla de la jerarquía axiológica de unos sobre otros se trata del reconocimiento de un valor como más valioso que todos los demás, en el derecho cuando:

“se dice que entre dos o más normas hay una jerarquía axiológica cuando una de ellas expresa un valor superior a las demás. Esto puede suceder porque la norma axiológicamente superior está constituida por valores éticos o principios de justicia que dan forma sustancial a una parte del ordenamiento jurídico o a todo” (Ortega García, El modelo constitucional de Derechos Humanos en México, 2015, pág. 98).

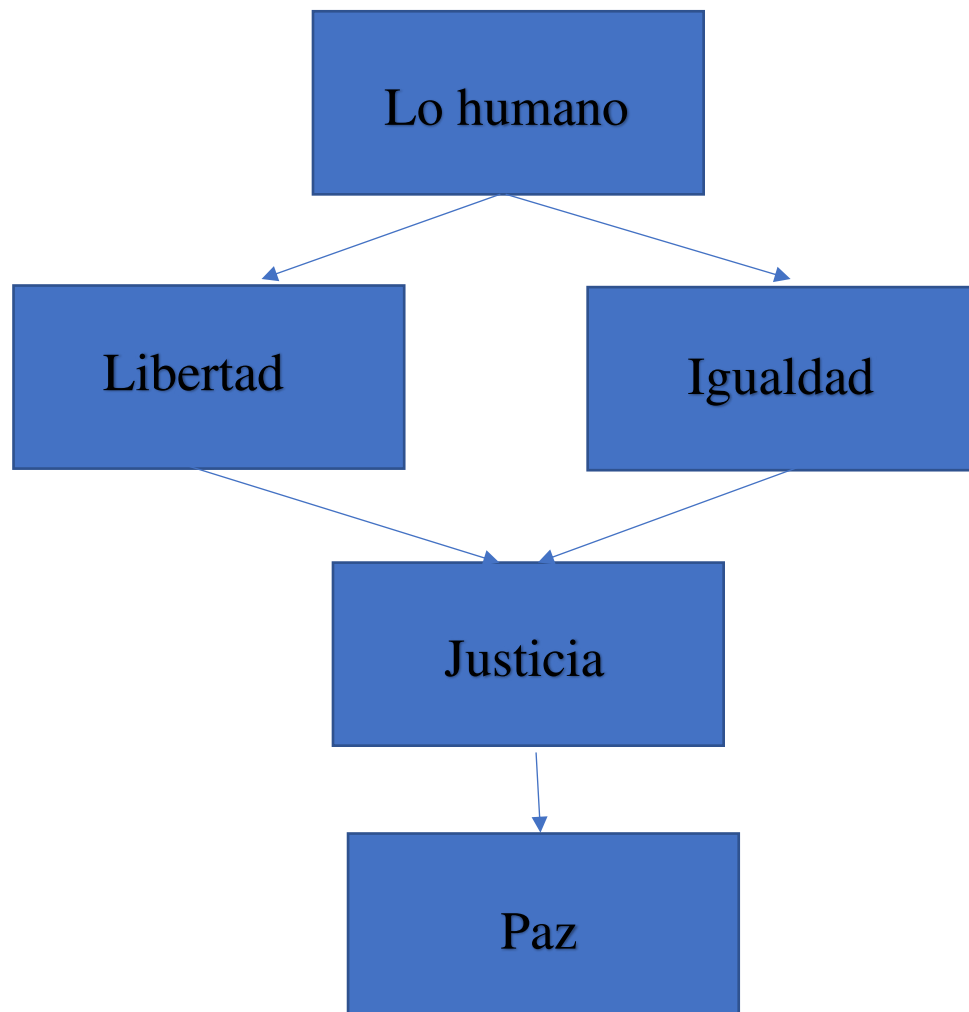
Con respecto a cuáles valores predominarían en nuestro caso, autores como Ortega García considera que siempre hay un reconocimiento de un valor superior a otro, y que en el caso específico de los valores contenidos en los derechos humanos “—independientemente de la fuente formal que los reconoce— constituyen un acervo de valores que goza de supremacía axiológica frente a la Constitución y a las demás normas del ordenamiento jurídico” (Ortega García, El modelo constitucional de derechos humanos en México, 2015, pág. 97).

Este autor considera que los valores que predominan en cualquier ordenamiento jurídico serán siempre los de los derechos humanos, ya que “el fundamento de su existencia reside en el hecho mismo de que emanan de valores morales a los que se considera supremos” (Ortega García, El modelo constitucional de Derechos Humanos en México, 2015, pág. 97), sin embargo a esto, debemos de realizar un análisis de la modificación del artículo 1ero de

nuestra Constitución para establecer si es que en este momento el valor predominante en la escala axiológica de la Carta Magna es *el valor de lo humano*.

Por lo que la escala de valor constitucional con la reforma de derechos humanos quedaría de la siguiente forma:

Escala de valor constitucional tras la reforma de 2011



Principio de Universalidad

Principio de interdependencia

Principio de indivisibilidad

Principio de progresividad

En lo más alto de la misma encontramos el valor de *lo humano*, que al menos desde la perspectiva de los derechos humanos corresponde a hacer valer toda una idea del hombre occidental, que tiene como base la idea de la dignidad humana como criterio primero para la universalidad de derechos, derechos de corte iusnaturalista, que son propios del ser humano por serlo.

En un segundo escalafón de la escala encontramos el valor de la igualdad y la libertad, que mantienen la relación antitética que se presentaba desde la escala de valor de la Constitución original de 1917, estos valores se consideran aquí el fundamento de la igualdad social y el desarrollo de la libre personalidad de todos los hombres, por lo que es a través de ellos que se llega a justiciabilizar lo humano.

Al igual que en la escala anteriormente establecida, encontramos a la justicia como valor mediador de la igualdad y la libertad, en tanto que la misma deberá de servir para que en un primer momento estos valores se lleven a cabo y que por ende el valor superior que es lo humano se logre materializar.

Por último en esta escala de valor encontramos a la paz como un valor, y como una condición base para que los valores superiores se concreten, pues recordemos que la intención de las primeras Declaraciones de Derechos Humanos eran establecer condiciones de paz que permitieran que se llevara a cabo un desarrollo de los individuos en los Estados.

Otra de las grandes novedades que se dan con la incorporación de los derechos humanos al plano constitucional es el cambio en los principios de optimización que se aplicarán dentro del marco jurídico, en ese sentido, encontramos que el principio de autodeterminación se deja

de lado y ya no juega un rol importante, porque será el propio contenido de los derechos humanos lo que dictará las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el valor de lo *humano*, para explicar esto con más claridad el principio de autodeterminación permitía que en caso de ser necesario y solicitado se pudiera cambiar la forma de gobierno, mientras que los Tratados Internacionales y documentos sobre derecho humanos establecen a la democracia como forma de gobierno necesaria para que estos puedan ser una realidad.

En lugar del principio de autodeterminación encontramos los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que pretenden lograr el disfrute pleno de los derechos humanos, y establecen guías necesarias para la actividad estatal, tanto la jurídica como la política, en ese sentido, estos principios hacen hincapié en los deberes del Estado para una cobertura real y total de los derechos humanos, logrando con ello que el valor de lo humano se haga valer.

5.11 Conclusiones

Los principios de los derechos humanos —dignidad humana, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad— son de una naturaleza unificadora y totalizadora que no permite, teórica y prácticamente, desvíos en su objetivo de hacer partícipes de estos a todos los hombres, convirtiéndose en absolutos con fuerza de ley. A raíz de ello han surgido visiones en las cuales los derechos humanos “constituyen un nuevo *ethos* basado en el deseo de unificar el mundo, así como el intento de indicar los valores y los disvalores que todos los Estados debería asumir como criterio de discriminación de sus acciones” (Díaz Revorio, 2018, pág. 78).

Ahora bien, con respecto a la correspondencia de los valores de los Estados con los valores planteados originalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

desarrollados y difundidos a través de los posteriores instrumentos, se puede decir que no existe una correspondencia axiológica, debido a que cada Constitución, la misma Declaración y cada instrumento de derechos humanos, son producto de valorizaciones independientes que son realizadas por sus legisladores, de tal manera que a pesar de que en todos los casos, se contengan a los derechos humanos, la valorización puede dar como resultado una interpretación equivocada de los preceptos originalmente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de aceptar los valores contenidos en las normas y principios requeridos para la concreción del *valor de la persona humana*.

Aceptar este tipo de interpretación, en la cual la “jerarquía *axiológica* es una relación de valor instituida (no por las mismas fuentes, sino) por el intérprete, precisamente mediante un subjetivo juicio de valor” (Guastini R. , 2013, pág. 139) podría resultar que en un primer acercamiento a los valores establecidos en los derechos humanos, estos correspondieran con los valores propios del Derecho establecidos en las Constituciones de los Estados, sin embargo, las jerarquías axiológicas pueden ser diferentes y sólo serán fruto de una apreciación subjetiva, y en virtud de la *tiranía del valor*,

“la posición de los valores es por consiguiente nula si no se impone; la validez tiene que ser continuamente actualizada, esto es, se la tiene que hacer válida para que no se disuelva en una vacía apariencia. Quien dice *valor* quiere hacer valer e imponer. A las virtudes se las practica; a las normas se las aplica; las órdenes se ejecutan; pero los valores se ponen e imponen” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, pág. 132).

Los mandatos contenidos en los derechos humanos y los principios establecidos por los mismos, en virtud de su propia naturaleza resultarán haciéndose valer en la realidad jurídica de los Estados por encima de los valores contenidos en sus cuerpos normativos, es decir, sobre la valorización del Poder Constituyente, de tal manera que se da un conflicto axiológico, puesto que “la ejecución de la Constitución a partir de una ejecución de normas y decisiones debe ser trasformada en una ejecución de valores” (Schmitt, La tiranía de los valores, 2012, págs. 109-110).

Si bien, como menciona Prieto Sanchís, “tras el constitucionalismo y los derechos humanos o fundamentales [...] late, en efecto, la filosofía de los derechos naturales y del contrato social” (Prieto Sanchís, 2007, pág. 226), los valores de los derechos humanos tienen como objetivo hacer valer el *valor de la persona humana* partiendo de la valorización de sus legisladores, estableciendo sus particularidades a través de las normas y principios, del mismo modo los Poderes Constituyentes de los Estados buscaron imponer su valorización a través de la Constitución, pues en ella también se establece lo que es valioso.

De esta manera, la aparición de los derechos humanos en los tratados internacionales y la incorporación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos locales no solamente contiene el problema de la convencionalidad, ni de los ámbitos de validez formal, sino que el problema de fondo recae en la facultad volitiva de la valorización que en ambos casos se realizó, puesto que la “experiencia valorativa originaria en la cual la cuestión central se plantea en términos de la constitución de los propios modelos y patrones” (Salazar Bondy, 2010, pág. 175) fue realizada previamente.

La apertura del Derecho local de los Estados ha dado como resultado que las modificaciones constitucionales, como lo menciona Mandujano Rubio, desemboquen en una gran paradoja

para los Estados de Derecho, en donde se debe “cumplir con el principio de legalidad, y a la vez realizar los valores tan abstractos y de dimensiones poco precisas que incorporan los derechos humanos” (Mandujano Rubio, 2018, pág. 117).

Todo ello ha logrado que la práctica judicial adquiriera una gran dificultad, ya que por los mismos principios de los derechos humanos de interdependencia e indivisibilidad, “los derechos humanos no están ordenados por relaciones jerárquicas o de prioridad, sino que están dispuestos en un plano de paridad o equidad, al menos formalmente” (Mandujano Rubio, 2018, pág. 119), y requieren de esta práctica para su correcta aplicación y concreción.

Las distintas concepciones sobre los derechos humanos han impactado en el ámbito axiológico, en el caso mexicano, por ejemplo, el artículo 1º Constitucional, el cual marca que la discriminación está prohibida porque atenta contra la dignidad humana; la jurisprudencia reconoce a la dignidad como un *valor supremo* “en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna” (Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, p. 1529, jurisprudencia, civil.).

Lo anterior ha sido señalado como un escape al positivismo jurídico, pues la naturaleza de la dignidad humana permite caer en un equívoco al respecto de la naturaleza de la misma, ya que si está sólo es reconocida, no le es propia al hombre, es decir, se mantiene la postura volitiva de que debe ser reconocida, partiendo del supuesto de que a pesar de inherente, necesita la positivización para su protección, por tanto a pesar de ser inherente no es reconocida *a priori*, de manera que los derechos humanos son los principios que la

determinan con base en el *valor de la persona humana* expresada por los legisladores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La jurisprudencia también considera a la dignidad humana “como un principio jurídico que permea todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental [...] una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona”, convirtiendo a la dignidad humana en un concepto jurídico indeterminado, y no concibiéndolo como la cualidad intrínseca del hombre a partir de la cual se le garantizan y protegen sus derechos humanos.

En virtud de lo mencionado en la jurisprudencia mexicana, la dignidad humana pasaría a ser parte de los valores constitucionales, y a su vez funcionaría como principio, derecho fundamental y norma jurídica, lo cual no es posible por la resolución de la Contradicción de Tesis 293/2011, en la que se señala un catálogo de derechos que “no puede ser estudiada en términos de una jerarquía” (Contradicción de Tesis 293/2011), pero a su vez se afirma que “cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional” (Contradicción de Tesis 293/2011), con ello se buscó garantizar la *supremacía constitucional* del artículo 133, sin embargo, esto en el ámbito axiológico y normativo sí representa una jerarquía, porque la jerarquización se establece cuando existen dos grupos o más grupos valiosos, pero que al final se opta por uno, dejando en un nivel inferior a que no fue elegido.

Con la Contradicción de Tesis 293/2011, queda claro que “las valoraciones están sujetas a un principio de oposición estricta en virtud del cual la afirmación del valor de un objeto y la afirmación simultánea del valor contrario referente al mismo objeto son incompatibles” (Salazar Bondy, 2010, pág. 41), de ahí que la *supremacía constitucional* del artículo 133

fuera protegida por el artículo 1° con la restricción a los derechos humanos expresamente restringidos, con ello también queda evidenciada la protección a la valorización del Poder Constituyente en México frente a la propia valorización contenida en los tratados internacionales.

Ahora bien, estos cambios en la escala axiológica constitucional tienen una repercusión en la vida política y jurídica del país, por lo que, tienen una repercusión inmediata en cómo las instituciones del Estado deben de actuar y cómo se ha establecido anteriormente, estos valores deben de tener impacto en cómo se da la vida pública y afectan directamente en cómo se configura la ética y los códigos de los servidores públicos, es por ello que en el siguiente capítulo se analizará cómo las cuestiones axiológicas terminan estableciendo, al menos dentro del Estado Mexicano, Códigos de ética que tratan de orientar a los servidores públicos para que sus actos sean acordes a la escala axiológica presente en la Constitución.

6. La práctica de los valores en la ética

6.1. Introducción

En México la noción de derechos humanos ha empapado todas las áreas de la vida, ya que los mismos, velando por la dignidad humana, se han convertido no sólo en materia de protección del Estado, sino en un ideal que se debe de conseguir, adicionalmente a ello “la aceptación de los derechos humanos supone entonces la de un orden ético del que se deriven los principios de justicia que debe de cumplir el orden jurídico” (Villoro L. , 2000, pág. 303), por lo que a partir de la reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos se han tenido que establecer mecanismos encaminados a concretar ese orden ético, que es a la vez jurídico y que representa cierta directriz para la justiciabilidad de los derechos humanos.

La introducción de la ética en el servicio público, y la focalidad que en los últimos años ha conseguido la ética pública, está vinculada a los múltiples escándalos sobre corrupción e impunidad que se han presentado en diferentes gobiernos alrededor del mundo y al establecimiento de indicadores como lo son el índice de percepción de la corrupción, que permiten acercarse a la realidad vinculada al servicio público, pues estos fenómenos han demostrado que existen servidores públicos que practican conductas antiéticas, que van no sólo en contra del bien común, sino de las tareas que les son conferidas por la Administración Pública.

El establecimiento de mecanismos dirigidos a fortalecer las instituciones, como los mecanismos anticorrupción y contra la impunidad, han tenido como eje central el establecimiento de principios y valores éticos que recuperen la legitimidad de las instituciones y los servidores públicos, fomentando a que los mismos se comprometan y

realicen de una forma adecuada las tareas que les han sido encomendadas y que están destinadas al bien común.

Es por ello que adicionalmente a los principios constitucionalmente propios de la Administración Pública —eficacia, objetividad, honradez, imparcialidad y eficiencia—, la misma debe de compartir en su actuar los valores y las expectativas con los ciudadanos que tiene a su cargo, ya que de no ser así un sistema o una institución puede funcionar, pero carecerá de legitimidad en el Estado, pues sus prácticas no estarán dirigidas a concretar el ideal del bien común y los intereses colectivos de una comunidad. Dichos valores deberán ser la base del comportamiento ético de los servidores públicos.

La noción de una infraestructura ética que soportara las acciones de las administraciones ha devenido en cambios en el campo del derecho administrativo y la administración pública como lo son las incorporaciones de las nociones éticas dentro de cuerpos normativos específicos a través de Códigos de ética o de conducta encaminados a fomentar y estructurar dicha infraestructura en el ámbito administrativo.

Lo anterior ha implicado cambios profundos en las concepciones del derecho administrativo, pues por una parte implican cimientos a las instituciones iusadministrativistas vinculados a la dignidad de la persona humana y a toda una concepción antropológica de la misma, en la que sus derechos humanos deben de ser protegidos y respetados, así como a la noción de obligación en el servicio público, en el cual el fin teleológico del propio Estado y por ende de la administración son las personas y su bien común, ya que en este sentido “el Estado se presenta ante la sociedad como una organización a su servicio, lo que permite que en vez de sostener el dualismo (de raíz liberal) y hasta la confusión (de los autoritarismos o

populismos) sociedad-Estado, se pueda hablar de comunidad en el marco de una relación servicial” (Coviello, 2015, pág. 74).

Si bien la noción de protección del Estado de Derecho y el principio de legalidad van más vinculados a la naturaleza propia del Derecho, los mismos han contribuido a establecer en los Estados modernos mecanismos de responsabilidades administrativas a los servidores públicos, lo que permite por una parte la protección de los intereses legítimos de los gobernados, los intereses públicos y el bien común, contribuyendo de esta manera a esta teleología, puesto que “el comportamiento ético estatal será el de las personas que forman parte de la organización de sus poderes y entidades” (Coviello, 2015, pág. 76).

En este apartado se analizará la introducción de los códigos de ética para los servidores públicos que han tenido lugar en México, ya que representan en sí mismos un esfuerzo por poner en marcha dentro del Estado mecanismos que fomenten y concreten los valores establecidos como superiores en la Constitución, que deben de ser guía de toda actividad estatal, y cómo a pesar de ello, aún queda un amplio campo de reflexión de cómo deben de funcionar los mismos en el sentido de que para que estos funcionen deben de ser interiorizados, pero a la vez los actos que vayan en contra de los mismos son exigibles dentro de la Administración Pública.

6.2. La ética pública

Desde la Antigüedad podemos encontrar distintas reflexiones en torno al *ethos* del hombre, es decir su modo de ser, entendido metafóricamente como su morada, en la cual distintos “valores se erigen como los principios a partir de los cuales guía su acción” (Méndez Aguirre, pág. 137); la ética ha sido desde la Antigua Grecia la rama de la filosofía encargada de las preguntas sobre el *ethos* y el *deber ser*, pues a través de la misma se han establecidos

parámetros de lo que en cierto momento histórico se considera correcto y/o bueno o incorrecto y/o malo, situación que resulta necesaria en las sociedades y el Estado.

Las nociones del *ethos* que alimentaban las reflexiones éticas en la Antigüedad estaban vinculadas a las virtudes, entendiendo estas como aquellas características o modos deseables de ser que debían de tener los hombres tanto en la esfera personal, como en la esfera pública, es decir, en la *polis*, ya que se consideraba que el *ethos* de la *polis* no era bueno de por sí, sino que “el ethos individual de una sociedad es el que determina la educación de los ciudadanos, el que forma el carácter de cada uno a su imagen y semejanza” (Jaeger, 2010, pág. 909), por lo que no se concebía una división entre la esfera pública y privada de la vida, existían en ese sentido hombres virtuosos y aquellos que no lo eran, independientemente de si formaban parte de la estructura gubernamental o no.

Las concepciones sobre el *ethos* en la Edad Media se centraron en las reflexiones alrededor del individuo como problema filosófico, en ese sentido “la reflexión sobre la acción humana, inauguró la disciplina de la ética filosófica en la Edad Media, una disciplina cuyas reglas remiten a unos principios fundamentales de explicación del hombre” (Ramón Guerrero, 2002, pág. 161), todo ello enmarcado en el modelo de vida y los principios propios del Evangelio, ya que si bien figuras como Tomás de Aquino y Agustín de Hipona tenían una fuerte influencia de la Filosofía Griega en especial de Aristóteles y Platón, el cristianismo que profesaban los llevaba a contemplar la vida ética como un modelo de imitación a la vida de Cristo persiguiendo en el mismo el modelo de la virtud, pues como señala Holbach “en lugar de fundar la moral sobre las relaciones palpables existentes entre los hombres, la ha fundado sobre las relaciones que ha supuesto que existen entre los hombres y los poderes desconocidos” (D'HOLBACH, 2017, pág. 25).

Durante la Modernidad encontramos múltiples reflexiones acerca de la ética y el *ethos* del hombre, la mayoría de ellas centradas en un antropocentrismo fruto de todo el movimiento renacentista y a través del cual surgieron corrientes como el humanismo y sobre las que se sentaron los cimientos de la Ilustración durante la cual, se planteó una ética ilustrada que “responde a las exigencias de un hombre moderno y a una sociedad en la que conviven distintas ideas de vida nueva” (Martínez Ferró).

Para responder a las cuestiones en torno al relativismo y las distintas formas de vida desde el punto de vista ético aparecen en la Ilustración pensadores como Kant quien establece lo que se conoce como el Imperativo Categórico a través del cual se establece la máxima “obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza” (Kant, *La metafísica de las Costumbres*, 2012, págs. 31-32).

En la Edad Contemporánea con el retorno al problema de la opción y de la responsabilidad han surgido diversas corrientes que pretenden establecer cuál es el mejor camino para el *ethos* del hombre, por ejemplo, a raíz de la necesidad de las ramas de la ética como lo es la bioética y la búsqueda de principios a través de los cuales se puedan tomar decisiones aparece el principalismo ético, que tiene como directrices el principio de la beneficencia, el de la maleficencia, el principio de justicia y el de autonomía, en ese sentido “el principalismo ético es propio de sociedades pluralistas en las que se registra un politeísmo valorativo” (Méndez Aguirre, pág. 143), ya que permite que en cada caso específico se realicen valoraciones autónomas de los dilemas éticos que las ocupan.

Así mismo fruto de la especialización de las ramas del conocimiento han surgido subramas de la ética que pretenden abarcar en ellas tópicos especializados, como lo son la bioética o la ética pública. La ética pública como rama del conocimiento aparece de la dicotomía de lo público y lo privado (Cepeda Rincón & Lucho González, Una ética pública desde el origen de la Administración Pública, 2017), pues si antes se tenía la consideración de que el hombre era virtuoso en sí mismo, y por tanto lo era en todas las áreas de la vida, ahora se configura la necesidad de una ética propia del servidor público y del gobernante, pues esta noción de ética pública surge de que:

Un porcentaje de la sociedad tiene la percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental debido a los problemas de corrupción, opacidad, arbitrariedad en la toma de decisiones, una deficiente cultura de rendición de cuentas y transparencia en el sector público. Todo ello repercute de manera sustantiva en la imagen y desempeño de la Administración Pública Federal en su conjunto, lo que hace necesario mejorar la organización, la administración y la operación de sus instituciones, sus recursos y su gestión, dando continuidad a las mejoras emprendidas en los tiempos recientes (Bentazos Torres, pág. 20).

Es importante establecer antes de entrar al tema de la ética pública que la Administración Pública tal y como fue planteada por Jean Bonnin corresponde a una extensión de la naturaleza humana, entendiendo al hombre como un ser social, por lo que debe de existir una relación armónica de todo el aparato administrativo y sus instituciones iusadministrativistas con el hombre, por lo que, desde la concepción propia de la administración pública siempre ha existido una noción sobre el actuar ético que debe de ejercerse por parte de los servidores públicos, puesto que existe un modo de ser, que corresponde en este caso al *ethos* de la

Administración Pública y al mismo tiempo a su teleología que es el bien común (Cepeda Rincón & Lucho González, Una ética pública desde el origen de la Administración Pública, 2017).

Por lo que al hablar de una ética pública debemos de tomar en consideración los elementos políticos y sociales que se configuran en la misma, ya que como refiere Adela Cortina “la ética es un tipo de saber normativo, esto es, un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos” (Cortina, Ética, 2008, pág. 22), todo ello siguiendo valores aceptados como *lo bueno*, pues no existe ética que se vincule a una *asepsia axiológica* (Cortina, Ética, 2008).

En adición a lo anterior, la ética pública se encuentra estrechamente vinculada a los actos administrativos, la responsabilidad de los servidores públicos y a las funciones públicas que los mismos deben de cumplir, por lo que:

La persona servidora pública debe, necesariamente, ajustar su comportamiento a una serie de reglas, normas y lineamientos de tipo ético y moral. En consecuencia, las y los servidores públicos deben ser un ejemplo comportamiento ético y moral, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de pertenecer a la función pública, se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía (Bentazos Torres, pág. 20).

Con respecto al derecho administrativo y el derecho en general, la ética pública ha tenido como reto “el reconocimiento formal de la existencia de valores y principios éticos en la vida pública” (Lima Torrado) y su incorporación a códigos éticos e incluso a normas jurídicas como lo son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin embargo,

dentro de las perspectivas del derecho se ha comenzado a dar esta apertura a través de la Tesis de Vinculación, en la que se establece que “entre el derecho y la moral existen conexiones posibles y contingentes (cosa que cualquier positivista decente también reconocería), pero también, al menos algún nexo necesario” (Aguilera, pág. 156).

La incorporación o el reconocimiento de valores dentro de las normas se ha dado con base en el iusnaturalismo procedimental de Fuller, quien estableció que dentro de las normas o códigos deben existir valores que son compartidos por la comunidad y que representan el deber ser de todo el Estado, pues consideró que:

a diferencia del jusnaturalismo tradicional y del positivismo incluyente, que consideran que ese nexo —necesario conceptualmente para el primero y sólo posible y/o contingente para el segundo— se obtiene al nivel de la validez jurídica de cada una de las normas que conforman un sistema jurídico [...] al nivel más básico de la determinación de la existencia del derecho o de un sistema jurídico (Aguilera, pág. 156) .

Lo anterior ha derivado en la existencia de Códigos de Éticos específicos para la Administración Pública y su vinculación a normas jurídicas para que a través de las responsabilidades derivadas de los actos administrativos se hagan valer ciertos modos de ser —cierto *ethos*— y ciertos valores que a él van emparejados, quedando así superadas tanto las tesis que propugnan la radical separación entre Derecho y Moral como aquellas que hablan de una relación entre ambos sistemas, pero reduciéndolo a un mínimo ético, por lo que “el principal reto hoy es, también, la realización social efectiva de esos valores, principios y normas éticas” (Lima Torrado, pág. 87).

6.3. Código de ética de los servidores públicos

Como se mencionó anteriormente, uno de los grandes cambios tanto en el derecho administrativo como en la Administración Pública en general, ha sido la incorporación nociones éticas en ellos a través de los Códigos de Ética y los Códigos de Conducta, los cuales se consideran como instrumentos fundamentales, pues pautan la actuación de los servidores públicos, ya que “en los códigos se señalan los valores que debe poseer todo servidor público para hacer de ellos principios de su actuar” (Diego Bautista), por lo que los mismos tienen como finalidad la normalización de un *ethos* específico del servidor público.

La diferencia que existe entre un Código de ética y un Código de Conducta es que el primero se considera un Código General para la función pública y “establecen los valores que deben ser inherentes a todo político o funcionario de la administración pública, independientemente del área en la que éste se desempeñe” (Diego Bautista), mientras que con respecto a los códigos de conducta son aquellos que “atienden a la especificidad de las funciones que realice la institución a la que se pertenezca” (Diego Bautista), en ellos se vinculan los actos administrativos propios de cada función pública en determinada entidad o institución de la Administración Pública a una conducta ética por parte del servidor público. En este sentido:

“Un Código de Ética aporta una serie de ideas y conceptos que ayudan a entender la diversidad de criterios morales, y a partir de estos conceptos es posible cimentar una ética más acorde con los valores, principios y costumbres de una determinada comunidad política, traducido en la capacidad de la persona servidora pública para crear, pensar y desarrollar actitudes más acordes con su visión en la impartición y

administración de justicia, siempre en respeto de los Derechos Humanos” (Bentazos Torres, pág. 30).

En el año 2015, en México se expidió por acuerdo el Código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, este documento pretendía regir la conducta de los servidores públicos en las dependencias y entidades pertenecientes a la Administración Pública Federal, y se encontraba integrado por las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos, por lo que se pretendía que el Código de ética constituyera como:

“un elemento de la política de integridad de los entes públicos, para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Será el instrumento que contendrá los principios y valores considerados como fundamentales para la definición del rol del servicio público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas, para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público.

El Código de Ética establecerá mecanismos de capacitación de las personas servidoras públicas en el razonamiento sobre los principios y valores que deberán prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de la función pública en una situación dada” (ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.)

Este Código establecía como principios para todo servidor público los principios constitucionalmente establecidos en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y contaba a la vez con 11 valores que se consideraban clave en el actuar de los servidores públicos, los cuales eran:

1. Interés Público
2. Respeto
3. Respeto a los derechos humanos
4. Igualdad y no discriminación
5. Equidad de género
6. Entorno cultural y ecológico
7. Integridad
8. Cooperación
9. Liderazgo
10. Transparencia
11. Rendición de cuentas

En febrero de 2019 se abroga el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, y también por acuerdo se emite el Código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, que tiene su fundamento en los artículos 1, 26 y 37, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los artículos 6, 7 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 7, fracción I, 9, fracción X y 29, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Este Código a diferencia del anterior, establece en el mismo una vinculación más estrecha con la función pública, y lleva la directriz de la política adoptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción, por lo que a través del mismo se

buscan crear bases mínimas para que “todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público” (ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.), para ello se asume a los servidores públicos como *líderes* en la construcción de una nueva ética pública y establece un parámetro a través del cual todas las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal deberán elaborar Códigos de Conducta específicos.

Así mismo este Código de ética mayormente vinculado a las cuestiones de responsabilidades administrativas se aleja de la típica formulación de un Código de ética, en primer lugar porque considera que es deontológico, constriñendo así la ética pública a la mera ética profesional, desvirtuando la búsqueda de un servidor público virtuoso no sólo en su espacio de trabajo sino en el Estado en general y, en segunda porque se aleja de la formulación orientadora y educadora que debe de tener un código de ética para la concreción de un *ethos* en sociedad, volviéndose coercitivo al vincularse por ejemplo al derecho administrativo sancionador, pues en el mismo se establece que “la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad, interpretará para efectos administrativos el presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo” (ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.), el propio artículo 28 del Código de Ética muestra una doble naturaleza en cuanto a las cuestiones de ética pública, pues en él se dispone que:

“ARTÍCULO 29. Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer del conocimiento de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética:

I. El Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al contenido de este Código, y,

II. Los Órganos Internos de Control en las dependencias o entidades y las Unidades de Responsabilidades en las empresas productivas del Estado, serán quienes determinarán si se actualiza una falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en derecho correspondan conforme a las leyes aplicables” (ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.).

Otra de las particularidades de este Código es que se mantienen los principios constitucionales de la Administración Pública, no obstante, estos principios son establecidos como propios de los servidores públicos, es decir como principios de optimización de las funciones de los servidores públicos al establecer que:

“ARTÍCULO 7. El Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas jurídicas, con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando el profesionalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y liderazgo.

ARTÍCULO 8. El Principio de Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que promueva la máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de respeto.

ARTÍCULO 9. El Principio de Lealtad buscará que las personas servidoras públicas correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a todas las personas, garantizando la integridad; los valores de interés público y entorno cultural y ecológico, así como las reglas de integridad de cooperación y desempeño permanente con la integridad.

ARTÍCULO 10. El Principio de Imparcialidad buscará fomentar el acceso neutral y sin discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno.

ARTÍCULO 11. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disciplina, así como el valor de cooperación” (ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.).

Dentro de este Código de Ética no existe una expresión explícita de los valores, pues se habla de *valores vinculados a los principios constitucionales* sin definir a los mismos, considerando a estos como una “cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona servidora pública es apreciada o bien considerada en el servicio público” (ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.), esta indefinición de los valores puede llevar a la asepsia axiológica o al subjetivismo del

propio código, ya que cada servidor público podría llegar a interpretar de diversas maneras dicha disposición, llenando o quitando los valores que considere se vinculen con los principios propios de la Administración Pública.

El Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal establece a su vez compromisos con el servicio público, los mismos están encaminados al respeto de la dignidad humana, los derechos humanos, la no discriminación y la inclusión de todas las personas, todo ello en cumplimiento al artículo 1º Constitucional, que tras la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos establece en su párrafo cuarto que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Con lo anterior se ha dado paso al control difuso de la convencionalidad no sólo en el ámbito constitucional y en la acción de los operadores jurídicos, sino también como parte del compromiso por parte de los servidores públicos en la aplicación de mandatos de optimización con respecto a la función pública, pues la misma también debe de estar abocada dentro del Estado a dar la mayor protección posible de los derechos humanos a través del principio *pro-persona*, lo que incluye que dentro de sus funciones administrativas y en el ámbito de su competencia, de darse el caso, puedan aplicar cualquier derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados

Internacionales ratificados por México que versen sobre los mismos, si estos últimos ofrecen una protección más amplia.

Así mismo los compromisos establecidos en el Código de Ética buscan evitar los conflictos de interés a través del cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligando a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales correspondientes y evitando recibir obsequios o reconocimientos que puedan contravenir las disposiciones jurídicas o administrativas, vinculando con ello, una vez más el Código de Ética con la coercitividad de la norma, contraviniendo así el sentido original con el que se había buscado establecer los Código de Ética de los servidores públicos, pues se consideraba que:

“Los Códigos de Ética o de Conducta de la Administración Pública en México, se constituyen como un instrumento, traducido en la capacidad para crear y motivar su criterio para incidir en una serie de normas, que lejos de limitar o coartar su libertad, le dan los elementos para desarrollar su creatividad acorde con las funciones y niveles a desempeñar dentro de la Función Pública” (Bentazos Torres, pág. 30).

Los Códigos de ética son “un indicador natural mediante el cual se muestre sobre lo que es correcto, y no como algo obligado a cumplir” (Bentazos Torres, pág. 30), con un carácter educativo encaminado a la formación de un *ethos* determinado en el servidor público desde la apropiación de los principios y valores; ahora bien, es importante aclarar que en lo anterior no se critica la función coercitiva del derecho, sino la desvirtuación que se realizó en la concepción de la ética pública y la configuración de los principios éticos a la función pública, pues en el caso de la ética no se trata de “las acciones que debo hacer, sino del

principium a partir del cual debo hacerlas” (Kant, Reflexiones sobre filosofía moral, 2004, pág. 155).

6.4. El deber ser y el es en la ética pública

De lo anteriormente expuesto, resulta que el grave problema que tiene esta *nueva ética pública* es la falta de comprensión de lo qué es la propia ética y cómo opera con respecto a las acciones humanas, pues al desvincular la acción humana de todo su ser y establecer una dualidad entre el comportamiento del servidor público en funciones y el que no lo está, termina por no configurar un *ethos*, ya que:

“el Estado orienta a las y los servidores públicos hacia la adopción de principios, normas de conducta o valores, pero en realidad éstas proceden desde el inconsciente de las personas, y por esta razón se les da un carácter rígido, exagerado o autoritario, experimentando una orientación mecánica que ni ella misma sabe por qué tiene que actuar en determinado sentido, prefiriendo seguir y dar cumplimiento estricto a la normatividad” (Bentazos Torres, pág. 16).

La mala incorporación de principios éticos deriva en que los valores propios del *ethos* no se interioricen y no se conviertan en una convicción del hombre en la cual se hacen “innecesarios los instrumentos de coerción social e institucional como la seguridad, la vigilancia y el control” (Bolívar Meza, pág. 60), ya que para evitar una pregunta infinita sobre el actuar que deben de tener los servidores públicos y sobre qué están sustentados se tiene que señalar que las obligaciones y los valores son proyecciones de las disposiciones éticas del hombre, en las cuales “ciertas acciones son correctas y que ciertos fines particulares son buenos” (Korsgaard C. , 2000, pág. 118).

Así mismo, como menciona Betanzos Torres:

“Un código de ética posee dos características que le son inherentes: por un lado, es un documento normativo, y por otro, es educativo, en tanto que presenta un conjunto de valores para que las personas asimilen. Si bien un código puede ser considerado un instrumento de derecho no es el derecho. Un código ético va más allá de la sola norma, supone implicarse en la vida de la persona, en sus creencias y en las costumbres que dan origen a su conducta. En su contenido llevan los valores que esperados en el actuar de los servidores públicos” (Betanzos Torres, pág. 30).

Los códigos de ética nos señalan que debemos de distinguir en ese sentido las normas éticas de las leyes jurídicas, en el sentido que las primeras “exige[n] una disposición interna, que se reflejan en que la motivación para actuar es simplemente el deber: la ley autoimpuesta de la razón” (Santos Herceg, 2004, pág. 20), mientras que la legislación jurídica, “es de origen externo y no exige actitud espiritual alguna, así como tan poco ninguna motivación particular: ella se hace cumplir coactivamente” (Santos Herceg, 2004, pág. 20).

En ese mismo sentido debemos de buscar que las disposiciones contenidas en la ética pública se vean realmente interiorizadas por parte de los servidores públicos, pues la ley de la reproducción establece que:

“sin duda es una ley meramente empírica aquella según la cual representaciones que se han seguido o acompañado con frecuencia finalmente se asocian una a la otra y, de esta manera, se establece un vínculo conforme al cual, incluso sin la presencia del objeto, una de estas representaciones hace que la mente pase a la otra de acuerdo con una regla fija” (Stepanenko, 2012, pág. 174).

Así mismo a pesar de la necesidad de incluir en los campos de estudio del Derecho Administrativo y en general de la Administración Pública tópicos encaminados a las nociones sobre ética es necesario también tener en cuenta que los modelos de gobernanza y gobernabilidad han variado en los últimos años, y que en un Estado donde cada vez no sólo se solicita más la participación social, sino que comienza a darse esta, es necesario hablar de una ética pública que no esté sólo abocada al servidor público, sino a la formación de un *ethos* del ciudadano a través del cual las acciones de los hombres estén encaminadas al bien común de toda la comunidad, pues “la eticidad del hombre es un deber, puesto que si libertad no está originalmente determinada por el entendimiento. Ella es, por lo tanto, sólo una espontaneidad condicionada y, de hecho, que [se interrumpe]” (Kant, Reflexiones sobre filosofía moral, 2004, pág. 92).

6.5 La escala de valor del Código de ética de las personas servidoras públicas

Una de las primeras cosas a observar en el Código de ética de las personas servidoras públicas es que el mismo presenta como punto de partida principios constitucionales, los cuales son legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficacia y eficiencia, estos componen en el un universo de principios que intentan direccionar principios legales que son liderazgo, respeto por los Derechos Humanos, el interés público, entorno ecológico y cultural, equidad de género, igualdad, no discriminación y cooperación, y se establece que el cumplir con ellos permite hacer valer los valores de equidad, objetividad, competencia por mérito, eficacia, economía y disciplina.

Al establecerse este Código de ética de las personas servidoras públicas no se pretendía emitir un código que contuviera valores éticos, que den una obligación a todo el actuar del servidor público en una dimensión ética amplia, sino que presenta valores del servicio público,

entendiendo a estos últimos como aquellas cualidades que se consideran valiosas en un servidor, pero que se alejan de lo que es la consideración ética de lo que debería de representar el Código de ética, ya que el cumplimiento de los principios y de los valores del servicio público dependerá de la conciencia ética individual y por lo tanto no existe en sí una formación de una ética pública.

6.6 Análisis comparado de las escalas de valor

La primera diferencia que podemos encontrar en tanto la escala de valores establecida en la Constitución es que los valores de la misma no se encuentran presentes en el Código de ética de las personas servidoras públicas, así como que los principios de optimización que se han establecido en el Código, si bien son de corte Constitucional, no corresponden a los principios de optimización de los valores superiores, sino que corresponden a la optimización de procesos en el servicio público, en ese sentido pareciera que se pretendió dar un desglose de estos valores para que fueran más acorde a la tarea de la Administración, pero que no se logró acoplarlos del todo a los valores Constitucionales, que en sí si tienen un *ethos* que se pretende fortalecer en el Estado y por ende en todos sus ciudadanos.

Los valores presentes en el Código de ética de las personas servidoras públicas son de corte institucional, y se alejan del contenido axiológico constitucional, que de forma más amplia pretende establecer con claridad pautas de valoración a seguir para que los valores superiores sean una realidad en la vida pública del país.

Los valores establecidos en el Código son de tipo gerencial más que ético, pues pretenden favorecer la competitividad, los procesos y acabar con la burocracia, pero no transformar de manera profunda la cuestión de las conexiones éticas de la persona en sociedad y sus acciones.

Una de las características de este Código de ética es que no existe establecido en él una escala que pueda ser apreciada, sino que representa más un conjunto de principios de optimización del trabajo de los servidores públicos, cuyo contenido sólo está vinculado en tanto que persigue el mismo fin de mejorar la toma de decisiones en el desempeño de las funciones y actividades diarias, y no se muestra como una búsqueda de un *ethos* que sirva para la construcción verdadera de la ética del servidor público, sino como una cuestión meramente valorativa del *hacer*.

7. Conclusiones

Tal y como refiere Guastini “una Constitución no es un simple conjunto de normas, sino una totalidad cohesionada de principios y valores” (Guastini R. , 2013, pág. 145), y el criterio de identidad radica en cómo se caracterizan y se establece la escala de valor dentro de ella.

La comparación que se hace en esta investigación de las escalas de valor constitucionales, y de cómo han ido evolucionando las escalas de valor a lo largo de la historia del constitucionalismo mexicano nos permite darnos cuenta que muchos de los preceptos fundadores siguen ahí, pero han cambiado en cuanto a su función, pasando de ser valores a principios de optimización o que han sido relegados en la escala de valor constitucional.

En ese sentido, se debe de tener en cuenta que “el cambio de tales principios constituye, por lo tanto, una revisión constitucional no banal, sino la genuina instauración de una nueva constitución” (Guastini R. , 2013, pág. 145), pues representa la modificación del sustento axiológico que dirige el *deber ser* presente en cualquier Carta Magna.

Como se puede apreciar en la comparación entre la escala establecida por el constituyente originario y la reforma constitucional de 2011 “la revisión constitucional no puede llevarse hasta el límite de modificar los principios y valores caracterizadores del ordenamiento (sin convertirse en instauración constitucional)” (Guastini R. , 2013, pág. 145), la adición de los valores que provienen de los derechos humanos representa por lo tanto no sólo un cambio de paradigma constitucional y jurídico, sino que podría llegar a llamarse un cambio de Constitución.

En ese sentido, las intenciones de una reforma constitucional como la que en este momento pretende hacer el ejecutivo federal, al buscar que se establezca una constitución moral

representarían en sí, un nuevo cambio axiológico, que tendría que ser analizado para ver sus alcances y cuáles son los valores específicos que busca se lleven a cabo en la sociedad.

De esta investigación se derivó que existen 4 valores fundamentales dentro del ordenamiento constitucional con una teleología que tiene como meta acciones concretas planteadas por los constituyentes, lo que corresponde a lo que Zaglebleski considera como valor, ya que “el valor, en el sentido que aquí nos interesa, es un bien final, un fin en sí mismo, que se encuentra ante nosotros como una meta que pide ser alcanzada mediante actividades orientadas teleológicamente” (Cervantes Andrade, 2016, pág. 160). Por ejemplo: El valor de la igualdad, como valor primero, tiene como teleológica, el bien común o la felicidad del pueblo (idea aristotélica), y tiene como camino concreto la formación de derechos, establecidos como garantías en la Constitución, en donde la actividad orientada a esa meta sería el fortalecimiento del Estado de Derecho y sobre todo al cumplimiento de la justicia social. Estos 4 valores serían:

- ❖ Igualdad
- ❖ Libertad
- ❖ Justicia
- ❖ Autodeterminación

Con respecto a la relación entre la escala de valor constitucional y la ética pública, la incorporación de nociones éticas no solo al derecho administrativo sino a la Administración Pública en general, a través del orden Constitucional pretende fortalecer la legitimidad de las instituciones administrativas y de sus servidores públicos ante la sociedad; la propia política anticorrupción puesta en marcha en este último año es un intento por recuperar la confianza perdida de la sociedad por las instituciones estatales que se han visto envueltas en diversos

escándalos financieros, de corrupción o tráfico de influencias que terminan por lesionar a la sociedad en general.

Sin embargo, la ética pública no puede ni debe ser considerada como una mera deontología, sino que debe de ser asumida como un *ethos* común entre todos aquellos que componen al Estado, entendiendo que la misma no sólo es pertinente para los servidores públicos en funciones, sino que debe de ser una constante en el ejercicio de cualquier actividad en los espacios públicos, por lo que la ética pública no puede ni debe ser reducida tampoco al tiempo en que una persona es servidora pública, sino que esta también debe permear en su esfera privada.

Si bien los Códigos de ética y de conducta han tratado de integrar a la función pública, ciertas directrices han terminado por desvirtuar su alcance al adherirse a la coercitividad de la ley y no al fomento de un *ethos* determinado, hay que tener claro que “las leyes como tales no sirven de nada si el espíritu, el *ethos* del Estado no es bueno de por sí” (Jaeger, 2010, pág. 909) y que, la esencia de los códigos de ética es una esencia formadora de un *ethos*, de la completa interiorización de valores y principios no porque estén plasmados en la ley, sino porque forman parte de la esencia del hombre, en este sentido los servidores públicos deben comprometerse con su función y la sociedad, independientemente de las sanciones que la ley prevea y del cargo que ocupen.

El Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, y el pronunciamiento de una *nueva ética pública* nos lleva a plantearnos también la necesidad de dar seguimiento a las concepciones barajeadas por parte del Ejecutivo Federal con respecto a una Constitución Moral, pues si bien resulta evidente que en toda Constitución se encuentra presente una escala de valor y determinados valores superiores que fungen como directrices

axiológicas del Estado, anteriormente no se había circunscrito la ética a la fuerza coercitiva del Derecho, cuestión que puede terminar derivando en ideologías estatales sobre el bien y el mal, y que pueden llegar a fomentar visiones subjetivas de cómo debe componerse el *ethos* de todos los ciudadanos.

8. Bibliografía

Aguilera Portales, R. (2013). *Filosofía del derecho*. Monterrey: Res Pública.

Declaración Universal de Derechos Humanos. (s.f.). Obtenido de https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

ACUERDO por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (s.f.).

ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. (s.f.).

Aguilar Rivera, J. A. (2017). Alamán y la Constitución. En J. A. Aguilar Rivera, *Ausetes del universo: Reflexiones sobre el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 1821-1850* (págs. 173-210). D.F.: F.C.E.

Aguilar Rivera, J. A. (2017). *Ausetes del universo: Reflexiones sobre el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional, 1821-1850*. Cd. México: F.C.E.

Aguilera, E. (s.f.). El derecho y su moral interna: En defensa de una conexión necesaria entre la existencia de un sistema jurídico y la observancia mínima del Estado de Derecho. *Revista de Administración Pública*, 144, Volumen LII, No. 3.

Alvarado Gómez, A. A. (2017). Introducción. En A. A. Alvarado Gómez, & L. (. Ruano Galindo, *Testimonios legislativos. Historia parlamentaria de los Congresos Mexicanos. Cámara de Senadores: Actas correspondientes al I Congreso*

- Constitucional, 1844. Tomo I, Volúmen I* (págs. 9-31). Ciudad de México: Secretaría de Cultura; Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Andrews, C. (2009). Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera república federal (1824-1835). En E. (. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México. Tomo I* (págs. 86-134). D.F.: F.C.E.; Conaculta.
- Andrews, C. (2017). *De Cádiz a Querétaro. Historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano*. Ciudad de México: F.C.E.
- Andrews, C. (2017). *La tradición constitucional en México*. Ciudad de México: CIDE.
- Andrews, C. (2017). Reformas la Constitución de 1824. En C. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 73-114). Cd. México: CIDE.
- Aquino, T. d. (2005). *Suma teologica V parte III e indices*. Madrid: B.A.C.
- Aragón, M. (2012). La Constitución como paradigma. En M. (. Carbonell, *Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos*. (págs. 109-122). D.F.: Porrúa.
- Aristóteles. (2004). *Magna Moralia*. Buenos Aires: Losada.
- Armegol Alonso, C. (2014). Principales retos de la reforma constitucional. En C. Pérez Vázquez (Cordi), *Retos y obstaculos en la implementación de la reforma constitucional e materia de derechos humanos*. (págs. 151-165). D.F.: S.C.J.N.; U.N.A.M.
- Arroyo Vieyra, F. (2014). El control de convencionalidad. En C. Pérez Vázquez, *Retos y obstaculos en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos*. (págs. 45-51). D.F.: S.C.J.N.; U.N.A.M.

- Ávila, A. (2009). Cuandose canonizó la rebelión. Conservadores y serviles en Nueva España. En E. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México. Tomo I* (págs. 43-85). D.F.: F.C.E.; Conaculta.
- Barrón, L. F. (2017). La Constitución de Coahuila como antecedente para el proyecto Carrancista de la Constitución de 1917. En C. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 261-280). Ciudad de México: CIDE.
- Basabe Serrano, S. (2007). El Nuevo Intitucionalismo en Ciencia Política: perspectivas, enfoques y campos de acción. En S. (. Basabe Serrano, *Instituciones e institucionalismo en América Latina. Perspectivas teóricas y enfoques disciplinarios.* (págs. 173- 202). Quito: Editorial del Centro de Investigaciones de Política y Economía.
- Baudrillard, J. (2010). De lo universal a lo singular: la violencia de la globalidad. En J. Bindé, *¿Hacia dónde se dirigen los valores?* (págs. 42-). D.F.: F.C.E.
- Bauman, Z. (2005). *Ética posmoderna*. D.F.: Siglo XXI.
- Bedoya, M. (2009). Las potencialidades del institucionalismo histórico cetrado en los actores para el análisis de la política pública. Contingentes de trabajadores extranjeros en España. *Estudios Políticos*, 35, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia., 33-58.
- Bentazos Torres, E. O. (s.f.). Notas en torno a la ética en el Servicio Público Mexicano. *Revista de Administración Pública*, 144, Volumen LII, No. 3.
- Beuchot, M. (2013). *Interculturalidad y derechos humanos*. D.F.: Siglo XXI; UNAM.

- Bolívar Meza, M. L. (s.f.). Crisis de legitimidad del estado contemporáneo. Replantando el papel de la ética pública. *POLIS*, vol. 15, núm. 1.
- Bonifaz Alfonso, L. (2017). *La división de poderes en México*. Ciudad de México: F.C.E.
- Burgoa Orihuela, I. (2017). La reformabilidad de la Constitución mexicana de 1917 (1970). En I. B. FLORES, *Doctrina Constitucional Mexicana*. Ciudad de México: Senado de la República- LXIII legislatura; Secretaría de Cultura; Instituto Nacional d.
- Burke, T. P. (2011). *The Concept of Justice: Is Social Justice Just?* New York: Continuum.
- Caballero Míguez, G. (2007). Nuevo institucionalismo en ciencia política, institucionalismo de elección racional y análisis político de costes de transacción: una primera aproximación. *RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, vol. 6, núm. 2, 9-27.
- Calderón Gutiérrez, F. (2016). *Inflexión histórica: la situación social. institucional en el cambio político de América Latina*. Ciudad de México: INE.
- Camou, A. (2013). Los tres componentes de la gobernabilidad. En A. Camou, *Gobernabilidad y democracia*. D.F.: I.F.E.
- Campa Mendoza, V. (2017). *Los constituyentes de 1917*. Durango.
- Carbonell, M. (2008). *Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México*. D.F.: Porrúa.
- Carbonell, M. (2015). *Los derechos humanos en México. Régimen jurídico y aplicación práctica*,. Distrito Federal: Editorial Flores; Universidad Nacional Autónoma de México.

- Cárdenas Gracia, J. F. (1998). Hacia una Constitución normativa. En *El significado actual de la Constitución. Memoria del sim'posio internacional* (págs. 93-118). D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Carranza, V. (2014). Discurso de don Venustiano Carranza. En J. Castañón, & A. Morales Jiménez, *50 discursos doctrinales en el Congreso Constituyente de la Revolución Mexicana 1916-1917* (págs. 4-25). D.F.: Secretaría de Educación Pública; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
- Casanueva Reguart, S. E. (2006). *Ética judicial. Bases para la construcción de una ética judicial*. D.F.: Editorial Porrúa.
- Cea Egaña, J. L. (1997). La Constitución como institución. *Revista de Derecho. Universidad de Concepción*.
- Cepeda Rincón, F. d., & Lucho González, G. F. (2017). Una ética pública desde el origen de la Administración Pública. *Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Administrativo, Núm. 19, julio-diciembre*, pp. 299-319.
- Cepeda Rincón, F. d., & Lucho González, G. F. (2018). Derechos Humanos y Constitucionalismo: una perspectiva desde la axiología. En N. N. González Samiguel, & L. G. Rodríguez Lozano, *Derechos Humanos y su interacción en el Estado Constitucional*. CDMX: Tirant lo Blanch; Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Cervantes Andrade, R. (2016). *El constitucionalismo de principios. Un enfoque desde el constructivismo jurídico*. Madrid: Tirant lo Blanch.
- Comanducci, P. (2012). Modelos e interpretación de la Constitución. En M. (. Carbonell, *Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos* (págs. 123-154). D.F.: Porrúa.

Condés Lara, E. (2015). *Atropellado amanecer. El comunismo en el tiempo de la Revolución Mexicana*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Constitución Española de 1978. (s.f.). Obtenido de <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=2>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (s.f.). Obtenido de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2016). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.

Conteras Acevedo, R., & Sánchez Trujillo, M. G. (s.f.). *La reforma del Estado Mexicano*. Obtenido de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/1FRCONTRERA_SPOEXP.pdf

Cortina, A. (2008). *Ética*. Madrid: Akal.

Cortina, A. (2008). *Ética*. Madrid: Akal.

Cosío Villegas, D. (2007). *La Constitución de 1857 y sus críticos*. D.F.: F.C.E.; El Colegio Nacional; Clío.

COVIELLO, P. ., (2015). Derecho administrativo y ética. Una visión luego de treinta y cinco años. *Prudentia Iuris*, N° 80.

Coviello, P. (2015). Derecho administrativo y ética. Una visión luego de treinta y cinco años. *Prudentia Iuris*, N° 80.

- Cue Canovas, A. (2013). El Congreso de Anáhuac. Sus orígenes y antecedentes. En P. Galeana, & a. et, *El primer Congreso de Anáhuac* (págs. 41-47). D.F.: INEHRM.
- Cuéllar Moreno, J. M. (2018). *La revolución inconclusa: La filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI*. CDMX: Grupo Planeta.
- D'HOLBACH, P. H. (2017). *Sistema Social*. Madrid: Laetoli.
- de la Hidalga, L. (2002). *Historia del Derecho Constitucional Mexicano*. D.F.: Editorial Porrúa.
- de Lora, P. (2005). *Memoria y frontera. El desafío de los derechos humanos*. Madrid: Alianza Editorial.
- de Malberg, R. C. (2013). *Teoría general del Estado*. D.F.: F.C.E.
- Décima época, Segunda sala, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 215, p. 1298. (s.f.).*
- Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, p. 1529, jurisprudencia, civil..
- Di Blasi, J. (s.f.). *Publicación del Estado*. Obtenido de <http://www.senado.gov.ar/upload/1355.pdf>
- Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I.* (2015). D.F.: Secretaría de Cultura; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
- Díaz Revorio, F. J. (2018). *Valores superiores e interpretación constitucional*. Ciudad de México: Tirant lo Blanch.

- Diego Bautista, O. (s.f.). *Los Códigos éticos en el marco de las administraciones públicas contemporáneas. Valores para un buen gobierno*. Obtenido de <http://eprints.ucm.es/6971/1/art%C3%ADculo-cortes1.pdf>
- Doyle, R. (2017). Las constituciones y los derechos a la insurrección y de petición 1821-1854. En C. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 97-114). Cd. México: CIDE.
- Estrada, G. 2. (2016). *Interpretación judicial internacional*. Distrito Federal: Editorial Fontamara; Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fernández, J. M. (1955). *Justicia social: ni comunismo ni propiedad absoluta*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Ferrua, P. (2012). *Un anarquista e la Revolución Mexicana:: Praxedis G. Guerrero*. D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Fichte, J. G. (2005). *Ética*. Madrid: Akal.
- Fioravanti, M. (2011). *Constitución. De la antigüedad a nuestros días*. Madrid: Trotta.
- Frondizi, R. (2015). *¿Qué son los valores?* D.F.: F.C.E.
- García García, R. (2013). *Del institucionalismo histórico al neoinstitucionalismo en la docencia e investigación del constitucionalismo mexicano*. D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- García Máynez, E. (2013). *Obras 3*. D.F.: El Colegio Nacional.
- García Ramírez, S. (1997). *Los valores en el derecho mexicano. Una aproximación*. D.F.: F.C.E.- U.N.A.M.

- González, J. (2006). Valores éticos y valores humanos. En J. González, & J. Landa, *Los valores humanos en México* (págs. 33-49). D.F.: Siglo XXI editores.
- Guastini, R. (2012). Sobre el concepto de Constitución. En M. (. Carbonell, *Teoría de la Constitución. Ensayo escogidos*. (págs. 93-107). D.F.: Porrúa.
- Guastini, R. (2013). *Estudios de teoría constitucional*. Distrito Federal: Editorial Fontamara.
- Gúzman Pérez, M. (2017). El primer constitucionalismo de la Independencia. En C. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 23-46). Ciudad de México: CIDE.
- Guzmán Perez, M., & Andrews, C. (2017). El Constitucionalismo republicano 1814-1824. En C. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 47-72). Cd. México: CIDE.
- Hartmann, N. (2011). *Ética*. Madrid: Encuentro.
- Heidegger, M. (2017). *Nietzsche*. Madrid: Ariel.
- Hernández López, C. (2009). La "reacción a sangre y fuego" los conservadores en 1855-1867. En E. (. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México. Tomo I* (págs. 267-299). D.F.: F.C.E.; Conaculta.
- Hillgruber, C. (1/2009). Soberanía- La defensa de un concepto jurídico. *InDret*, 1-20.
- Hipona, A. d. (2010). *Confesiones*. Madrid: B.A.C.
- INE. (2016). *Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023*. Ciudad de México: INE.

- Instituto de Investigaciones Jurídicas. (1995). *Diccionario Jurídico Mexicano*. Distrito Federal: Porrúa-UNAM.
- Jaeger, W. (2010). *Paidea: los ideales de la cultura griega*. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económico.
- Johansson, F. (2017). La Constitución de 1857: Un texto renegado convertido en el símbolo del liberalismo. En C. (. Andrews, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* (págs. 115-136). Cd. México: CIDE.
- Kant, I. (2004). *Reflexiones sobre filosofía moral*. Salamanca: Sígueme.
- Kant, I. (2012). *La metafísica de las Costumbres*. Madrid: Tecnos.
- Kant, I. (2017). *Lecciones de filosofía moral Mrongovius II*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Korsgaard, C. (2000). La autoridad de la reflexión. En *Las fuentes de la normatividad*. Distrito Federal: Universidad Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Filosóficas.
- Korsgaard, C. M. (2011). *La creación del reino de los fines*. D.F.: U.N.A.M.
- Küng, H. (2006). *Proyecto de una ética mundial*. Madrid: Trotta.
- Lasalle, F. (2016). *Sobre la esencia de la Constitución*. Ciudad de México: Porrúa.
- Lepe Pineda, C. (2010). Ignacio Ramírez. En M. d. Rovira Gaspar, *Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX* (págs. 207-227). D.F.: U.A.Q.; UGTO; U.A.M.; U.N.A.M.

- Letamendía, F. (2003). La autodeterminación, evolución histórica, tratamiento constitucional y polémicas actuales. *Revista Viento Sur*, Número 71, 85-93.
- Lima Torrado, J. (s.f.). Estudio crítico de la dignidad humana como fundamento teórico y práctico de la ética pública a partir del modelo de la ética de la responsabilidad. *Revista de Administración Pública*, 144, Volumen LII, No. 3, 87-104.
- Llamas Cascón, Á. (s.f.). *Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca*. Obtenido de Los valores jurídicos como ordenamiento material: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/15829>
- Lomelí Vanegas, L. (2016). *La política económica y el discurso de la reconstrucción nacional (1917-1925)*. D.F.: U.N.A.M.
- López González, G. (2017). Los proyectos constitucionales conservadores, 1857-1865. En C. Andrews, *La tradición constitucional e México (1808-1840)* (págs. 137-157). Cd. México: CIDE.
- López Vela, V. (2010). Vicente Rocafructe. En M. d. Rovira Gaspar, *Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX* (págs. 143-153). D.F.: U.A.Q.; UGTO; U.A.M.; U.N.A.M.
- Losada, L. R., & Casas Casas, A. (2008). *Enfoques para el análisis político. Historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Lozano, J. M. (2011). Discurso pronunciado en la Capital del departamento de Guanajuato el 16 de setiembre de 1854 por el Lic. Don José M, Lozano. En J. Ramiro, & D. (.

- Vaught Alcocer, *Dos Siglos de Discursos Patrióticos* (págs. 827-844). D.F.: U.N.A.M.
- Lucas Verdú, P. (1994). Reflexiones en torno y dentro del concepto de constitución. La constitución como norma y como integración política. *Revista de Estudios Políticos (Nueva época) Núm. 83. Enero- Marzo*.
- Lucho González, G. F., & Cepeda Rincón, F. d. (2018). Justicia Social: el reto de los derechos humanos. En A. J. Martínez Lazcano, & A. e. Islas Colín, *Derechos Humanos: La transformación de la cultura jurídica* (págs. 223-238). Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.
- Luna Argudín, M. (2006). *El Congreso y la Política mexicana (1857-1911)*. D.F.: F.C.E.; Colegio de México.
- MacCormick, N. (2003). Enn contra de la ausencia de fundamento moral. En R. Vázquez, *Derecho y moral. Ensayos sobre un debate contemporáneo* (págs. 160-182). Barcelona: Gedisa Editorial.
- Mackie, J. (2000). *Ética. La invención de lo bueno y lo malo*. Barcelona: Gedisa editorial.
- Mandujano Rubio, S. (2018). *Control de convencionalidad y convergencia interpretativa*. Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
- Martínez Ferró, H. (s.f.). Kant: una ética para la Modernidad. *Diálogos de Saberes, N° 24*, 181-194.
- Marván Laborde, I. (2017). *Cómo hicieron la Constitución de 1917*. Ciudad de México: Secretaría de Cultura; CIDE; F.C.E.

- Mateos Martínez, J. (2012). Fundamentos filosóficos del surgimiento y la evolución del. *Δαιμόνιον. Revista Internacional de Filosofía*, 5-17.
- Medina, H. (2015). Introucción. En *Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, Tomo I* (págs. 19- 33). D.F.: Secretaría deCultura; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
- Méndez Aguirre, V. H. (s.f.). Valores, Ética Pública y sus instrumentos: del consejo platónico al comité bioético. *Revista de Administración Pública*, 144, Volumen LII, No. 3,.
- Nación, S. C. (s.f.). *Contradicción de Tesis 293/2011*. Obtenido de <http://207.249.17.176/Transparencia/Epocas/Pleno/DecimaEpoca/293-2011-PL%20CT%20Ejecutoria.pdf>
- Neiman, S. (2012). *El mal en el pensamiento moderno*. D.F.: F.C.E.
- Neves, M. (2015). *La constitucionalización simbólica*. Lima: Palestra Editores.
- Nicol, E. (1998). *El problema de la filosofía hispánica*. D.F.: F.C.E.
- Noriega, C., & Pani, E. (2009). las propuestas "conservadoras" en a décad de 1840. En E. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México. Tomo I* (págs. 175-213). D.F.: F.C.E.; Conaculta.
- Núñez M., A. (2009). Francisco O'Reilly. En M. d. Rovira Gaspar, *Una aproximación a la historia de las ideas filosoficas en México. Siglo XIX y principios del XX* (págs. 173-182). D.F.: U.A.Q.; UGTO; U.A.M.; U.N.A.M.
- Núñez Torres, M. (2006). *España., La capacidad legislativa del gobierno desde el concepto de institución. El paradigma de Venezuela y*. D.F.: Porrúa.

- Ojeda Gastélum, S. O., & Lazcano Armienta, M. H. (2011). *Historias de la Revolución en Sinaloa*. Culiacán: UAS.
- Olivé, L. (2008). *Inter-culturalismo y justicia social*. Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Ollero, A., García Amado, J. A., & Hermida del LLano, C. (2013). *Derecho y moral: una relación desnaturalizada*. D.F.: Editorial Fontamara.
- Orozco y Berra, M. (2011). Oración cívica que el ciudadano Manuel Orozco y Berra, individuo de la sociedad literaria de Puebla, prununció el 16 de semptiembre de 1846. En J. Ramiro, & D. (. Vaught Alcocer, *Dos Siglos de Discursos Patrióticos* (págs. 449-462). D.F.: U.N.A.M.
- Ortega García, R. (2015). *El modelo constitucional de derechos humanos en México*. D.F.: Tirant lo Blanch.
- Ortega García, R. (2015). *El modelo constitucional de Derechos Humanos en México*. D.F.: Tirant lo Blanch; Poder Judicial del Estado de México.
- Palavicini, F. F. (2014). *Historia de la Constitución de 1917. Tomo II*. D.F.: Secretaría de Educación Pública; Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
- Pani, E. (2009). "Las fuerzas oscuras": El problema del conservadurismo en la historia de México. En E. (. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México.Tomo I* (págs. 11-14). D.F.: F.C.E; Conaculta.

- Pavón, J. M. (2013). Proclama en que se anuncia la próxima promulgación de la Constitución (15 de juni de 1814). En J. M. Pavón, *Los sentimientos de la Nación de José María Morelos. Antología Documental* (págs. 143-146). D.F.: INEHRM.
- Peña, V. S. (2012). El equilibrio Puntuado: sobre una teoría del cambio en las políticas públicas. *Encrucijada. Revista electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública*.
- Pico della Mirandola, G. (2009). *Discurso sobre la dignidad del hombre*. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Piechowiak, M. (2017). Normas verdaderas a la luz de la justificación axiológica de las normas. En G. Sucar, & J. Cerdio Herrán, *Derecho y Verdad IV Problemas* (págs. 655-682). Valencia: Tirant Lo Blach.
- Pierson, P., & Skocpol, T. (2008). El institucionalismo histórico en la ciencia política contemporánea. *Revista Uruguaya*, 7-38. Obtenido de Rev. Urug.
- Pisarrello, G. (2014). *Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática*. Madrid.: Trotta.
- Platón. (2008). *Diálogos IV República*. Madrid: Gredos.
- Prieto Sanchís, L. (2007). *El constitucionalismo de los Derechos. Ensayos de filosofía jurídica*. Madrid: Trotta.
- Rabasa, E. (2006). *El pensamiento del Constituyente de 1856-1857*. DF.: Porrúa.
- Rabell García, E. (Núm. 126 / 2009). Reforma del Estado y reforma constitucional. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*.

- Ramírez Álvarez, J. G., & Garrido del Toral, A. (2015). *Querétaro de la Constitución; Constitución de Querétaro*. Querétaro: INEHRM.
- Ramón Guerrero, R. (2002). *Historia de la Filosofía Medieval*. Madrid: Akal.
- Rodriguez, V. R. (2006). Tratado de las Virtudes en General. Introducción a las cuestiones 55 a 67. En T. d. Aquino, *Suma teológica II. Parte I-II* (págs. 415-420). Madrid: B.A.C.
- Rojas, R. (2014). *Los derechos del alma*. D.F.: Taurus; CIDE.
- Rovira Gaspar, M. d. (2010). Introducción. II. Discurso liberal y conservador. En M. d. Rovira Gaspar, *Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX* (págs. 141-142). D.F.: U.A.Q.; UGTO; U.A.M.; U.N.A.M.
- Rovira Gaspar, M. d. (2010). Lorenzo de Zavala. En M. d. Rovira Gaspar, *Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX* (págs. 155-172). D.F.: U.A.Q.; UGTO; U.A.M.; U.N.A.M.
- Rubio y Rubio, A. (1945). *La filosofía de los valores y el derecho*. Distrito Federal: Jus.
- Ruiz Resa, J. D. (2015). *Derecho y valores en las democracias constitucionales*. D.F. : S.C.J.N.
- Ruiz Rodríguez, V. (2012). *Filosofía del Derecho*. Toluca: IEEM; Universidad Iberoamericana.
- Saladino García, A. (2009). *La filosofía de la ilustración latinoamericana*. D.F.: U.N.A.M.
- Salazar Andreau, J. P. (2016). *La publicación normativa en la Primera República Centralista (1836-1846)*. Distrito Federal: Tirant lo Blanch.

- Salazar Bondy, A. (2010). *Para una filosofía del valor*. D.F.: F.C.E.
- Sánchez Gil, R. (2015). Valores constitucionales. En M. Carbonell Sánchez, H. Fix Fierro, & D. (. Valadés, *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Estado constitucional, tomo IV, volumen 2* (págs. 637- 660). D.F.: Universidad Autónoma de México.
- Sánchez Ruiz, S. (2015). *Introducción al estudio de la política*. Culiacán: UAS.
- Sánchez Vázquez, A. (2007). *Ética y política*. D.F.: F.C.E. ; UNAM.
- Santidrián, P. R. (2007). *Humanismo y renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial.
- Santos Herceg, J. C. (2004). Estudio introductorio. En I. Kant, *Reflexiones sobre filosofía moral*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Scheler, M. (2001). *Ética*. Madrid: Caparrós Editores.
- Scheler, M. (2001). *Ética*. Madrid: Caparrós editores.
- Schmitt, C. (2011). *Teoría de la Constitución*. Madrid: Alianza Editorial.
- Schmitt, C. (2012). *La tiranía de los valores*. Buenos Aires: Hydra.
- Schmitt, C. (2012). *La tiranía de los valores*. Buenos Aires: Hydra.
- Serrano Migallón, F. (2013). *Las constituciones en México*. D.F.: El Colegio de México.
- Serrano Villapañe, E. (s.f.). *La filosofía del derecho y el derecho natural en Heinrich Henkel*.
Obtenido de Dialnet-LaFilosofiaDelDerechoYElDerechoNaturalEnHeinrichHe-
2062279.pdf

- Sesión Inagural. 1º de Diciembre de 1916. (2016). En *Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917 Tomo I* (págs. 387-404). D.F.: Secretaria de Cultura; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
- Skinner, Q. (2009). I. Historia de la política: los límites de la geometría. En E. (. Pani, *Conservadurismo y derechas en la historia de México.Tomo I* (págs. 15-42). D.F.: F.C.E.; Conaculta.
- Solé, C. (2011). *Inmigración y ciudadanía*. Barcelona: Anthropos.
- Stepanenko, P. (2012). *Unidad de la conciencia y objetividad. Ensayos sobre autoconciencia, subjetividad y escepticismo en Kan*. Distrito Federal: Universidad Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Filosóficas.
- Strauss, L. (2014). *¿Qué es filosofía política?* Madrid: Alianza Editorial.
- Taparelli, L. (1843). *Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos*. Obtenido de <http://fama2.us.es/fde/ocr/2013/ensayoTeoricoDeDerechoNaturalApoyadoEnLosHechosT1.pdf>
- Tornel y Bonilla, J. M. (2011). Oración cívica, que pronunció el 16 de septiembre de 1853 en la Ciudad de San Luis Potosí por José Manuel Tornel y Bonilla. En J. Ramiro, & D. (. Vaught Alcocer, *Dos Siglos de Discursos Patrióticos* (págs. 783-824). D.F.: U.N.A.M.
- Trigo Soto, L. (2016). Una revisión de los aportes del institucionalismo histórico a la ciencia política. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales* 7 (1), 224-241.

- Valades, D. (2003). Constitución y reforma de Estado. En E. González Pedrero, *México: transiciones múltiples, gobernabilidad y Estado Nacional*. México: Fondo de Cultura Económica; Instituto Nacional de Administración Pública.
- Valades, D. (2003). Constitución y reforma de Estado. En E. González Pedrero, *México: transiciones múltiples, gobernabilidad y Estado Nacional*. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica; Instituto Nacional de Administración Pública.
- Vallès, J., & Martí i Puig, S. (2015). *Ciencia Política. Un manual*. D.F.: Ariel.
- Velasco Gómez, A. (2009). *La persistencia del humanismo republicano en la conformación de la nación y el Estado en México*. D.F.: U.N.A.M.
- Villacañas, J. L. (2008). *Poder y conflicto. Ensayos sobre Carl Schmitt*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Villoro, L. (1985). Las corrientes ideológicas de la Independencia. En M. De la Cueva, & e. al, *Estudios de Historia de la Filosofía en México* (págs. 169-200). D.F.: U.N.A.M.
- Villoro, L. (2000). *El poder y el valor. Fundamentos de una ética política*. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
- Villoro, L. (2006). ¿Crisis del Estado-nación? En J. González, & J. Landa, *Los valores humanos en México* (págs. 251-266). México: Siglo XXI editores.
- Von Hildebrand, D. (2006). *Moralidad y conocimiento ético de los valores*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Zarco, F. (2013). El orden constitucional. En F. Zarco, *Charadas, Logogrifos y enigmas* (págs. 157-161). Durango: CONACULTA; INBA.

Zea, L. (1985). El positivismo. En M. De la Cueva, & e. al, *Estudios de historia de la filosofía en México* (págs. 227-247). D.F.: U.N.A.M.

Zurbruggen, C. (2006). El institucionalismo centrado en los actores: una perspectiva analítica en el estudio de las políticas. *Revista de Ciencia Política*, vol. 26, núm. 1, 67- 83 .